

La Serena, a diez de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Que se instruyó esta causa Rol N°3-2010 Tomo A (Antofagasta), para investigar el delito de homicidio calificado, en grado de consumado, cometido en contra de don Luis Busch Morales, de don Francisco Valdivia y de don Andrés Rojas Marambio; y determinar la responsabilidad penal que en ese hecho correspondió a **Claudio Hernán Mesina Schulz**, cédula nacional de identidad N°4.337.701-9, chileno, natural de Santiago, nacido el 4 de noviembre de 1943, abogado, domiciliado en Avenida Kennedy N°3530, departamento 1401, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, y a **Adolfo Fernando Born Pineda**, cédula nacional de identidad N°5.647.176-6, chileno, natural de Valdivia, nacido el 9 de octubre de 1949, casado, Brigadier en retiro del Ejército de Chile, domiciliado en calle Las Alpacas N°419, comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago.

El proceso se inició por querrella criminal de fojas 7, interpuesta por don Patricio Rosende Lynch, Subsecretario del Interior, en representación del Programa Continuación Ley N°19.123, por el delito de secuestro calificado, aplicación de tormentos y homicidio calificado, en contra de Eugenio Rivera Desgroux, Osvaldo Arriagada Pasmíño, Rómulo Enrique Galleguillos Pangué, Abel Galleguillos, Álvaro Romero, Oscar Figueroa Márquez y de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores, por lo delitos de secuestro calificado, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, solicitando acogerla a tramitación, decretar las diligencias que se solicitan, someter a proceso a los que aparezcan responsables y, en definitiva, sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley.

A fojas 635, doña Alicia Lira Matus en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dedujo querrella criminal por los delitos de homicidio y asociación ilícita perpetrados en las personas de Andrés Rojas Marambio, Francisco Gabriel Valdivia y Luis Busch Morales, en contra de los agentes del Estado y de todos los que aparezcan responsables, solicitando se acoja a tramitación, decretar auto de procesamiento en su oportunidad y en definitiva aplicar a los responsables el máximo de la pena legal, con costas.

A fojas 1886 el 12 de diciembre de 2013, se sometió a proceso a Eugenio Rivera Desgroux, Osvaldo Arriagada Pazmiño, Oscar Figueroa Márquez y Raúl Aránguiz Muñoz como autores del delito reiterado de homicidio calificado en las personas de

Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, cometido en Calama el día 6 de octubre de 1973.

A fojas 2073 y 2074 se revoca auto de procesamiento de fojas 1886 y siguientes, en lo relativo a Raúl Aránguiz Muñoz.

A fojas 2439 se sobresee parcial y definitivamente por la demencia vascular progresiva e irreversible de Osvaldo Arriagada Pazmiño, sobreseimiento aprobado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta a fojas 2480.

A fojas 2856 se sometió a proceso a Claudio Mesina Schulz como cómplice del delito reiterado de homicidio calificado en las personas de Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, cometido en Calama el día 6 de octubre de 1973.

A fojas 3052, el 28 de febrero de 2017, se sobre parcial y definitivamente la causa respecto del fallecido Eugenio Rivera Desgroux.

A fojas 3404 se sometió a proceso a Raúl Aránguiz Muñoz y a Adolfo Fernando Born Pineda como autores de los delitos de homicidio calificado consumado de Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, hechos cometidos en Calama el día 6 de octubre de 1973.

A fojas 3986 se sobresee parcial y definitivamente respecto al fallecido Raúl Aránguiz Muñoz.

A fojas 4127 se sobre parcial y definitivamente respecto del fallecido Óscar Figueroa Márquez.

A fojas 4210 se declaró cerrado el sumario.

A fojas 4223 se dictó acusación judicial en contra de Claudio Hernán Mesina Schulz y Adolfo Fernando Born Pineda, como cómplice y autor, respectivamente, del delito de homicidio calificado, en grado de consumado, de Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia primera del Código Penal, vigente a la época de los hechos, delito perpetrado el 6 de octubre de 1973, en la comuna de Calama.

A fojas 4242 el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Adolfo Fernando Born Pineda y Claudio Hernán Mesina Schulz, por tres delitos de homicidio calificado, en grado de consumados, ambos en calidad de autores, invocando en contra

de los acusados las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sean condenados a presidio perpetuo, más las accesorias legales y costas de la causa.

A fojas 4252 el abogado Álvaro Aburto Guerrero, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en contra de Claudio Hernán Mesina Schulz y Adolfo Fernando Born Pineda, por el delito reiterado de homicidio calificado, en grado de consumado, ambos en calidad de autores, invocando en contra de los acusados la circunstancia agravante prevista en el numeral 8 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sean condenados a presidio mayor en grado máximo, más las penas accesorias que en derecho correspondan.

A fojas 4308 el abogado Ismael Hernán Olivares Swett, en representación del acusado Claudio Hernán Mesina Schulz, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares, solicitando la absolución de su representado por falta de participación, en subsidio la recalificación del grado de participación de cómplice a encubridor del artículo 17 N°4 del Código Penal, se acoja la modificatoria de responsabilidad de media prescripción, la irreprochable conducta anterior del artículo 11 N°6 y colaboración sustancial del artículo 11 N° 9, ambas del Código Penal. Respecto a la acusación particular de la AFEP, solicita que se rechacen las agravantes del artículo 12 N°8, 10 y 11 del Código Penal, respecto a la acusación particular del Programa solicita que se rechace la agravante del artículo 12 N° 8 del Código Penal, y por último, solicita para el caso que se dicte sentencia condenatoria se le conceda alguna de las penas sustitutivas de la Ley N°18.216.

A fojas 4376 el abogado Maximiliano Eduardo Murath Mansilla, en representación del acusado Adolfo Fernando Born Pineda, opuso la prescripción de la acción penal y la amnistía como excepciones de previo y especial pronunciamiento; en subsidio, contestó la acusación fiscal, adhesiones y la acusación particular. Para el evento de dictarse sentencia condenatoria, invocó las atenuantes del artículo 11 N°6 y 9 del Código punitivo; en subsidio, solicitó la aplicación de la atenuante correspondiente a la eximente incompleta del error de prohibición y la atenuante del cumplimiento de órdenes militares, solicitó se aplicara a favor de su representado lo prescrito en el artículo 103 del Código Punitivo y lo dispuesto en los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar.

A fojas 4412 se recibió la causa a prueba.

A fojas 4441, se certificó el vencimiento del término probatorio.

A fojas 4442, se trajeron los autos para efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 4445, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y AMNISTÍA:

PRIMERO: Que a fojas 4376 el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación del acusado Adolfo Fernando Born Pineda, invocó a favor de su defendido como excepción de previo y especial pronunciamiento la prevista en el artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 93 N°6 del Código Penal, esto es, la prescripción de la acción penal, fundado en que los hechos se habrían producido el 6 de octubre de 1973 y que desde esa época han transcurrido más de 48 años, encontrándose prescrita la acción penal de conformidad a los artículos 94 y 95 del Código Penal, y la responsabilidad penal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de dicho Código; prosigue señalando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 102 del Código Penal se declare de oficio la prescripción, que en su concepto se habría cumplido en 1983, y aunque se estimaren suspendidos los plazos durante la permanencia del régimen militar, de igual modo desde 1990, han transcurrido más de 31 años. Al efecto, argumenta que los hechos establecidos no pueden considerarse como delitos de lesa humanidad, toda vez que no concurrirían los elementos a que se refiere el artículo 1° de la Ley 20.357, y por otra parte, esa ley comenzó a regir el 18 de julio de 2009, quedando los hechos anteriores sometidos a la legislación vigente a esa época. En subsidio, opuso la excepción de amnistía, sosteniendo que los hechos caen dentro del ámbito del Decreto Ley N°2.191 del año 1979 al haber acaecidos dentro del período que reguló esa normativa.

SEGUNDO: Que a fojas 4397 el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP, evacuó el traslado, solicitando el rechazo de la excepción de prescripción deducida, por tratarse en la especie de crímenes de lesa humanidad, consagrados en instrumentos convencionales como en normas imperativas de

Derecho Internacional (*ius cogens*), siendo una de las principales consecuencias de ello que resultan imprescriptibles ante el Derecho Internacional General, el Estado de Chile ha contraído obligaciones que emanan de los Tratados Internacionales que se han suscrito por lo que el ordenamiento jurídico chileno ha reconocido la primacía del derecho Internacional sobre el Derecho Interno. Es deber del estado asegurar que no se apliquen normas de prescripción a los crímenes de lesa humanidad. En cuanto a la excepción de amnistía, solicita su rechazo atendido que el D.L N°2191 no es un instrumento que facilitara la transición a la democracia, más bien buscaba sustraer de la persecución penal crímenes cometidos por el Estado, en atención a la gravedad que le ha dado la comunidad internacional a estos crímenes, es imperativo para los estados perseguir y condenar a los responsables de tales hechos, pues se encuentran ofendiendo a la Humanidad toda.

TERCERO: Que fojas 4403 el abogado Felipe Alemparte Croxatto, del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evacuó el traslado solicitando el rechazo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento deducidas, en primer lugar, porque el derecho del acusado para oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento precluyó, al no haberla interpuesto dentro del plazo para contestar la acusación, sino que 21 días después del plazo fijado y después de haber sido conminado por el tribunal para que contestara bajo apercibimiento de aplicar la medida disciplinaria de suspensión del ejercicio de la profesión. En cuanto a la prescripción y amnistía, señala que aunque se ventilen como excepciones distintas, en sus basamentos son equivalentes y las replica en su conjunto la Excma. Corte Suprema en reiterada jurisprudencia, validándose del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el cual ha rechazado tajantemente la aplicación de los institutos de la amnistía y la prescripción. El Sistema de Derechos Humanos está enmarcado en el principio de la interpretación progresiva y *pro personae* que tiene como sentido último impedir la impunidad ante hechos que violentan la conciencia universal. Por último, señala, que estamos en presencia de delitos internacionales, criminalizados por la comunidad de naciones de la cual forma parte Chile. En consecuencia es imposible aceptar amnistías o prescripciones en esta materia, por cuanto esas normas están en contradicción con normas del *ius cogens*, imperativas, inderogables y vinculantes para el Estado de Chile, que inevitablemente se imponen por sobre la normativa nacional.

CUARTO: Que, como cuestión previa, el abogado del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió se declara inadmisibles estas excepciones por haberse deducido fuera del plazo legal para contestar las acusaciones, y una vez que el defensor del acusado Born Pineda había sido apercibido para evacuar la contestación, solicitud que será desestimada teniendo en consideración que el artículo 434 del Código de Procedimiento Penal, no establece un plazo perentorio para deducir las excepciones de previo y especial pronunciamiento, solo establece que se deducirán conjuntamente con la contestación a la acusación y este trámite, de conformidad al inciso tercero del artículo 448 del código citado, es esencial y conforme a lo que se previene en dicha norma el plazo para contestar no es fatal, de tal manera que si no se ha evacuado se ordena al juez arbitrar las medidas para que se conteste la acusación, lo que implica que el término legal establecido en el inciso primero del artículo 447 del código de enjuiciamiento criminal, a su vencimiento, no produce el efecto de hacer precluir el derecho a contestar y, encontrándose vinculado a ella las excepciones aludidas, tampoco precluye el derecho para oponerlas.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo de las excepciones previas deducidas, cabe señalar que la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema las ha desestimado (por ejemplo: la dictada en la causa Rol N° 14.283-2015, el 18 de mayo de 2016), dado que los sucesos de que trata esta investigación corresponden a crímenes contra la humanidad, al ocurrir en un contexto propio de tal categoría de ilícitos. En efecto, el estado de guerra preventivo declarado por el régimen de facto constituyó una situación que torna aplicable plenamente los Convenios de Ginebra, que imponen la prohibición de precisas y determinadas conductas (en lo que interesa para este proceso, los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios) respecto de las personas que no participen en las hostilidades.

En tales términos, el marco jurídico aplicable a la descripción fáctica contenida en la acusación y que ha quedado asentada, según se señalará más adelante, analizada bajo el prisma de los Principios Generales del Derecho Internacional sobre crímenes de lesa humanidad, da cuenta que en la especie se han contravenido no sólo los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que el comportamiento desplegado ha supuesto una negación de la personalidad moral de la víctima, demostrándose así la íntima conexión entre el delito de orden común y el valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a

la dignidad de la persona, porque la característica principal de los delitos de lesa humanidad es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente.

En definitiva, la conducta establecida da cuenta, como sucede en los delitos de lesa humanidad, de un ultraje a la dignidad humana y representa una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes.

SEXTO: Que, tanto la preceptiva internacional como nacional relativa a la materia en estudio, en especial el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Ley N° 20.357 del año 2009, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, respectivamente, así como la jurisprudencia de los Tribunales y organismos internacionales, hoy es conteste en reconocer la existencia de cada vez mayores y más complejos escenarios en los que se cometen delitos contra la humanidad y que exceden a los conflictos armados o de guerras declaradas, precisamente, porque tales enfrentamientos ya no son lo que fueron al nacimiento de los conceptos de crimen de guerra y delitos de lesa humanidad, fraguados hacia la década de 1940, en plena segunda guerra mundial y usados en sentido no técnico desde antes, en 1915. Esta evolución, marcada por las innumerables formas que han ido adquiriendo los delitos que atentan contra el ser humano, ha llevado a diversos autores a precisar que los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos tanto en tiempo de guerra como de paz, como expresamente se ha reconocido en el artículo 1 letra b) de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de 26 de noviembre de 1968; y, más tarde, en el artículo 3 del Estatuto del Tribunal para Ruanda de 1994 y el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1996, así como en el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998.

A propósito del primer proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1954, ya entonces se concedió autonomía al delito de lesa humanidad, desvinculándolo del contexto bélico. Para esa fecha había sido conceptualizado como "los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales,

perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia". Al referido concepto se ha agregado que las acciones deben ser "parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque", cuestión que aparece suficientemente demostrada en los antecedentes de esta causa, si se tiene en cuenta la forma de ocurrencia de las muertes de las víctimas y el encubrimiento de sus circunstancias.

Entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

De este modo, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados en la presente causa, así como el contexto en el que indudablemente deben inscribirse y la participación que miembros del Estado han tenido en ellos, no cabe duda alguna que deben ser subsumidos a la luz del derecho internacional humanitario dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y que se deben penalizar, pues merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal, al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular.

SÉPTIMO: Que, por lo que se ha venido considerando, este sentenciador estima que prevalece en el caso de autos, la norma internacional de Derecho Internacional General que determina que, es incompatible normativamente aplicar la prescripción de la acción penal conforme al Derecho Interno a Crímenes de Lesa Humanidad, porque se trata de normas de Ius Cogens donde la penalización de estos crímenes es obligatoria. Estamos ante una norma imperativa de Derecho Internacional General, recepcionada constitucionalmente en Chile por vía de un Tratado Internacional vinculante desde antes, como Principio General del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

OCTAVO: Que, la evolución del tratamiento de los derechos humanos hace imperativa la mentada imprescriptibilidad, por cuanto la normativa internacional que se ha generado al respecto es obligatoria para el derecho chileno y en virtud de ella es inadmisibles cualquier causal de extinción que pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos.

NOVENO: Que, en cuanto a la amnistía invocada subsidiariamente cabe considerar que en Chile, producido el golpe de estado, se dictó el Decreto Ley N°3 de 11 de septiembre de 1973 que decretó el estado de sitio y al día siguiente, esto es, el 12 de septiembre de 1973 se dictó el Decreto Ley N°5, aclaratorio del anterior que señaló: "Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse "estado o tiempo de guerra" para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general para todos los demás efectos de dicha legislación", en el mismo sentido, al sistematizar los estados de excepción, el artículo 6° del Decreto Ley N°640, describió que "la declaración del Estado de Sitio podrá decretarse en alguno de los siguientes grados: "a) Estado de Sitio por situación de Guerra Interna o Externa. b) Estado de Sitio en Grado de Defensa Interna, que procederá en caso de conmoción interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad. c) Estado de Sitio en grado de Seguridad Interior, que procederá cuando la conmoción sea provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que no se encuentren organizadas, y d) Estado de Sitio en grado de Simple Conmoción interior, que procederá en los demás casos previstos en la legislación vigente". Asimismo el artículo 7° de ese cuerpo legal dispone que: "en los casos en que el Estado de Sitio se declare por peligro de ataque exterior, de invasión o por conmoción interior en grado de Defensa Interna, regirán las disposiciones legales contenidas en el Título III del Libro I y en el Título IV del Libro II del Código de Justicia Militar y se aplicará, cuando corresponda, la penalidad del tiempo de guerra". Cabe señalar que el Libro I, Título III, del Código de Justicia Militar se ocupa "De los Tribunales Militares en tiempo de Guerra" (Arts. 71 a 91) y que el Título IV del Libro II, por su parte, en los Arts. 180 a 194, trata acerca "Del procedimiento penal en tiempo de Guerra".

DÉCIMO: Que, ese estado o tiempo de guerra aludido en los decretos leyes citados en el motivo precedente, tuvo el carácter de "preventivo" y fue dictado para justificar el funcionamiento de esa jurisdicción extraordinaria indebidamente convocada que permitió el juzgamiento y la sanción de hechos perpetrados con anterioridad al 11 de septiembre de 1973 o sea con fecha previa a la constitución de dichos Consejos de Guerra y, de otros sucesos que claramente no constituían hechos punibles tipificados en la ley penal, quebrantando fundamentales normas de derecho, que inducen claramente a sostener que se instrumentalizó un

estado de guerra para activar artificiosamente una competencia castrense indebida, pero además para, con ningún control, cometer en contra de la población delitos graves que el derecho internacional considera como de lesa humanidad, y sin perjuicio de la finalidad de esos actos, es innegable que el régimen imperante formalizó un estado de guerra que, aunque en el hecho no existía, lo obligó institucionalmente a respetar la normativa internacional que regía sobre la materia y al efecto, cabe considerar que en Chile los Convenios de Ginebra se ratificaron en 1951, por consiguiente, a la fecha de los delitos investigados en estos autos ya eran Leyes de la República y, como ha quedado establecido en el fundamento precedente, sí se declaró un estado de guerra interna, de lo que se hace mención expresa en los decretos leyes mencionados, de tal manera que, el artículo 3° del IV Convenio de Ginebra se encontraba vigente, norma que sostiene que: "En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: "1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo". "A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".

UNDÉCIMO: Que, esos Convenios de Ginebra de 1949, vigentes a la época de perpetración de los hechos, y los Principios Generales del Derecho Internacional sobre crímenes de lesa humanidad, integrados a la normativa constitucional según lo razonado, implican la existencia de una obligación convencional para los Estados Partes de las Naciones Unidas, entre ellos, el Estado de Chile, de adoptar medidas legislativas necesarias para procurar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de las infracciones graves definidas en el Convenio, como también se obligan a buscar a

tales personas y hacerlas comparecer ante sus propios Tribunales, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o favorecer la impunidad de sus autores.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de esta manera, estándole prohibido a los estados partes, por la normativa internacional aplicable en la especie, dictar normas que tiendan a obtener la impunidad de los autores de violaciones a los derechos humanos, resulta inaplicable el artículo primero del Decreto Ley N°2.191 de 1978, como así lo ha declarado uniformemente la Excm. Corte Suprema, motivo por el cual se desechará la alegación subsidiaria formulada por este defensor.

EN CUANTO AL FONDO

DÉCIMO TERCERO: Que, según consta a fojas 4223, el Tribunal acusó a Adolfo Fernando Born Pineda y a Claudio Hernán Mesina Schulz, como autor y cómplice, respectivamente, en los términos de los artículos 15 N°1 y 16 del Código Penal de los delitos de Homicidio Calificado, en grado de consumado, de Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio.

Los hechos en que se fundó la acusación son los siguientes:

- 1) Que, en el Departamento de El Loa, el Comandante del Regimiento de Infantería N°15 de Calama, Coronel Eugenio Rivera Desgroux (fallecido), a raíz de los sucesos acaecidos en el país el 11 de septiembre de 1973, pasó a ocupar, además, el cargo de Gobernador del mismo Departamento y Juez Militar de la Zona en Estado de Sitio y, junto al Prefecto de Carabineros de Calama, decidieron crear una unidad operativa de inteligencia con funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría de Calama, unidad policial que estaba al mando del Comisario Raúl Aránguiz Muñoz (fallecido), destinada a reprimir y detener a los partidarios del depuesto Gobierno de la Unidad Popular, pudiendo detener sin orden judicial o administrativa y torturar a las personas que tuvieren militancia política, demostraran simpatía con partidos o movimientos de izquierda, o hubiesen desempeñado alguna dirigencia sindical proclive al depuesto régimen y, en el desarrollo de esa función, ejecutaron prisioneros sin otorgarle la posibilidad de un proceso justo y racional. Esa unidad operativa adoptó el nombre de Servicio de Inteligencia de Carabineros, conocida también como SICAR, y estuvo a cargo del Teniente de Carabineros Manuel Wladimiro Cuadra (fallecido), lo componían otros oficiales de la misma rama, así como personal subalterno y funcionó en el Retén Dupont, que era dependiente de la Primera

Comisaría de Calama, cuyo Mayor Comisario era Raúl Aránguiz Muñoz, sin perjuicio que además muchos de los detenidos estuvieron en los calabozos de la Primera Comisaria de Calama, fueron interrogados y torturados en ese lugar, según ellos mismos han narrado y los vieron familiares.

- 2) Que, en este orden de ideas, el 20 de septiembre de 1973, a la hora de almuerzo, funcionarios de Carabineros del SICAR procedieron a detener a Francisco Valdivia en su lugar de trabajo Planta de Explosivos Dupont, donde fue interrogado y torturado, sacándole las uñas de manos y pies, le reventaron los oídos y le pusieron corriente en los genitales, luego lo fueron a dejar a su domicilio alrededor de las 21 horas.
- 3) Posteriormente, el 4 de octubre de 1973, alrededor de las 20 horas, nuevamente fue detenido por funcionarios de Carabineros del SICAR desde su domicilio, fue llevado al Regimiento y de ahí a la cárcel de Calama, desde donde lo sacaron alrededor de las 15 horas del día 6 de octubre de 1973 en dirección al Regimiento N°15 de Calama.
- 4) Que a Andrés Rojas Marambio lo detuvieron funcionarios de Carabineros del SICAR el 4 de octubre de 1973, lo trasladaron al Reten Dupont donde fue torturado y el día 6 de octubre de 1973 fue llevado al Regimiento N°15 de Calama.
- 5) Que Luis Busch Morales también fue detenido por funcionarios de Carabineros del SICAR el 5 de octubre de 1973, fue interrogado y torturado e ingresado a la cárcel el mismo día y el día 6 de octubre de 1973 fue llevado al Regimiento de Calama.
- 6) Que el día 6 de octubre de 1973, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:30 horas, las tres personas fueron fusiladas en el Cerro Topáter, indicándose en la prensa afín al nuevo Gobierno que: "según un comunicado oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio, de Calama, Coronel Eugenio Rivera Desgroux, el sábado 6, a las 18,30 horas, fueron ajusticiados los extremistas Luis Busch Morales, ciudadano boliviano y ex guerrillero en su país; Francisco Javier Valdivia Valdivia, ex presidente del Sindicato Industrial de la Empresa Nacional de Explosivos, Río Loa y Andrés Rojas Marambio, ex chofer del Servicio Nacional de Salud, quien tenía a su cargo una de las ambulancias del Hospital Carlos Cisternas. Los ajusticiados, junto con Ricardo Pérez Marambio, alias "El Toro", quien fue muerto cuando intentaba asesinar a un suboficial de Carabineros;

Manuel Gallardo Gallardo y Luis Mamani Mamani, ex presidente del Sindicato Profesional de la Empresa Nacional de Explosivos, Río Loa, proyectaban realizar en el Loa un siniestro plan de sabotaje y asesinato en masa a Carabineros". Agregándose que lo anterior se hizo en cumplimiento de una sentencia dictada por un Consejo de Guerra.

7) Que la versión del Consejo de Guerra no pudo comprobarse durante la etapa investigativa, resultando por lo demás inverosímil su constitución, teniendo en consideración todos los antecedentes que profusamente se han colacionado al proceso que impiden arribar a la convicción que ello hubiere sucedido, atendiendo a la época en que se detuvo a las víctimas y su fusilamiento, sin que tampoco exista rastro alguno de la sentencia que allí se hubiere dictado y, esa información, se contrapone también con otras noticias publicadas en esos días que daban cuenta que recién el 6 de octubre de 1973 estaban en las etapas preliminares de las declaraciones y que el consejo de guerra debería conformarse en los días posteriores.

8) Que el pelotón de fusilamiento fue integrado por suboficiales del ejército comandado por un teniente de las mismas filas.

DÉCIMO CUARTO: Que, por su parte, el abogado querellante don David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP, a fojas 4242, dedujo su acusación particular en contra de Adolfo Fernando Born Pineda y Claudio Hernán Mesina Schulz, por tres delitos de homicidio calificado, en grado de consumado, ambos en calidad de autores, invocando en contra de los acusados las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sean condenados a presidio perpetuo, más las accesorias legales y costas de la causa.

DÉCIMO QUINTO: Que a fojas 4252 el abogado Álvaro Aburto Guerrero, en representación del Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en contra de Claudio Hernán Mesina Schulz y Adolfo Fernando Born Pineda, por el delito reiterado de homicidio calificado, en grado de consumado, ambos en calidad de autores, invocando en contra de los acusados la circunstancia agravante prevista en el numeral 8 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sean condenados a presidio mayor en grado máximo, más las penas accesorias que en derecho correspondan.

DÉCIMO SEXTO: Que a fojas 4308 el abogado Ismael Hernán Olivares Swett, en representación del acusado Claudio Hernán

Mesina Schulz, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares. Solicitó la absolución de su representado por falta de participación, en subsidio la recalificación del grado de participación de cómplice a encubridor del artículo 17 N°4 del Código Penal, se acoja la modificatoria de responsabilidad de media prescripción, irreprochable conducta anterior del artículo 11 N°6 y colaboración sustancial del artículo 11 N° 9, ambas del Código Penal. Respecto a la acusación particular de la AFEP, solicita que se rechacen las agravantes del artículo 12 N°8, 10 y 11, respecto a la acusación particular del Programa solicita que se rechace la agravante del artículo 12 N° 8, por último solicita para el caso que se dicte sentencia condenatorio alguna de las penas sustitutivas de la Ley N°18.216.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que a fojas 4376 el abogado Maximiliano Eduardo Murath Mansilla, en representación del acusado Adolfo Fernando Born Pineda, en subsidio a las excepciones antes aludidas, contestó la acusación fiscal, adhesiones y acusación particular. Señalando que en el evento de dictarse sentencia condenatoria, se acogieran las atenuantes N°6 y 9 del artículo 11 del Código Penal; en subsidio, solicitó la aplicación de la eximente incompleta del error de prohibición y la atenuante del cumplimiento de órdenes militares, además pidió se aplicara a favor de su representado lo prescrito en el artículo 103 del Código Punitivo y lo dispuesto en los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar.

DÉCIMO OCTAVO: Que el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 391 N°1 circunstancia primera del Código Penal, sanciona con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo al que mate a otro ejecutando el homicidio, con alevosía, lo que ocurre, según describe el N°1 del artículo 12 del código sancionador, cuando se obra a traición o sobre seguro.

DÉCIMO NOVENO: Que para determinar los hechos del libelo acusatorio se rindieron en el proceso diversas pruebas, entre ellas documental, pericial, testimonial, inspección personal del Tribunal y reconstitución de escena que rolan en autos.

EN CUANTO AL INICIO Y FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS:

VIGÉSIMO: Que, respecto de Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, el certificado de nacimiento agregado a fojas 1496 comprueba que éste nació en la ciudad de Vallenar, el 4 de octubre de 1939, la inscripción lleva el número 410 en el Registro de Nacimientos del año 1939 y su madre era Blanca Hilda Valdivia Álvarez, información que es corroborada por el certificado de matrimonio entre Francisco Gabriel Valdivia y Silvia Noellea Tapia Gallardo de fojas 1499 remitido por el

Servicio de Registro Civil e Identificación. La copia del registro de defunción agregado a fojas 1498, da cuenta que falleció a las 18:30 horas del 6 de octubre de 1973 en la ciudad de Calama. De la conjunción de ambos documentos surge que la víctima tenía 34 años al momento de su muerte.

Respecto a la víctima Andrés Rojas Marambio consta del certificado de nacimiento agregado a fojas 1501 que éste nació en la ciudad de Antofagasta, el 14 de agosto de 1935, la inscripción lleva el número 896 en el Registro de Nacimientos del año 1935 y sus padres eran Timoteo Rojas Olivares y Encarnación Marambio, información que es corroborada por los antecedentes familiares de la víctima remitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación a fojas 1505. El certificado de defunción agregado a fojas 1500, da cuenta que falleció a las 18:45 horas del 6 de octubre de 1973 en la ciudad de Calama. De la conjunción de ambos documentos surge que la víctima tenía 38 años al momento de su muerte.

Respecto a la víctima Luis Busch Morales consta del certificado de Primera Filiación agregado a fojas 601 que éste nació el 25 de septiembre de 1944; que era de nacionalidad boliviana, según consta de la partida de defunción, inscripción N°295, del año 1973, de la circunscripción de Calama, así como la información remitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación de fojas 1997, que es corroborada por los antecedentes familiares de la víctima a fojas 1506 y el certificado de matrimonio entre Luis Busch Morales y Grimilda Hortensia Sánchez Gómez de fojas 600, remitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. El certificado de defunción agregado a fojas 1998, da cuenta que falleció a las 18:30 horas del 06 de octubre de 1973 en la ciudad de Calama. De la conjunción de ambos documentos surge que la víctima tenía 29 años al momento de su muerte.

EN RELACIÓN A LA CAUSA DE MUERTE:

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en relación a la causa de la muerte de **Francisco Gabriel Valdivia Valdivia**, se señala en el certificado de defunción agregado a fojas 364 y en las copias del certificado médico de defunción agregados a fojas 377 y 382, que la causa de muerte fue por destrucción de tórax y región cardiaca- fusilamiento. Por su parte, en el Informe Pericial Médico Forense de fojas 1124 y siguientes, complementado con el Informe Pericial de Genética Forense de fojas 2227 y siguientes, en que establece la identidad de Francisco Valdivia Valdivia, se concluye también que la causa de la muerte corresponde a un traumatismo torácico por un mecanismo de alta energía, compatible con impactos de proyectiles balísticos con salida, y que al contener el tórax

órganos tan importantes como el corazón, pulmón y grandes vasos, se puede comprender que traumatismos balísticos en esta región son causa de lesiones necesariamente mortales. Prosigue la pericia indicando que la disección de las partes blandas momificadas de la víctima evidenció alteraciones y presencia de esquirlas óseas en el pulmón izquierdo y en la arteria aorta, lo que certifica que las lesiones en este segmento corporal fueron necesariamente mortales, tratándose de una muerte de etiología médico legal violenta tipo homicida, entendida ésta como aquella ajena a la voluntad de la víctima y ocasionada por terceras personas.

La copia del registro de defunción agregado a fojas 1498 indica que la causa de muerte es destrucción tórax y región cardiaca- fusilamiento.

Respecto a **Andrés Rojas Marambio**, el certificado de defunción agregado a fojas 1500, y las copias del certificado médico de defunción agregado a fojas 342 y 373 indica que la causa de muerte es la destrucción zona cardiaca y tórax-fusilamiento. Por su parte, el Informe de Causa de Muerte de fojas 1231 y siguientes, complementado por el Informe Pericial de Genética Forense de fojas 2211 y siguientes, que estableció la identidad de Andrés Rojas Marambio, concluye que los hallazgos óseos observados en parrilla costal y columna torácica presentan patrones compatibles con elementos provisto de alta energía, y que las rasgaduras observadas en el plano anterior de las vestimentas presentan hallazgos morfológicos compatibles con el paso de un elemento perforante capaz de atravesar simultáneamente dos capas de vestimentas. Refiere, asimismo, que el análisis conjunto del origen del trauma consignado en las vestimentas y su correlación con el trauma óseo observado, permite establecer un origen común para ambos eventos, el cual compatibiliza con un proyectil balístico de alta velocidad. En relación al número de impactos, se indica que se pudo establecer la presencia de un mínimo de 5 impactos balísticos. Finalmente, se establece como causa de la muerte un traumatismo torácico y raquimedular por proyectiles.

Por último, respecto de **Luis Busch Morales**, en la copia de certificado médico de defunción agregado a fojas 375 se indica que la causa de muerte es destrucción tórax y región cardiaca- fusilamiento. Por su parte, en el Informe Pericial Médico Forense agregado a fojas 1056 y siguientes, complementado por el Informe Integrado de Identidad de fojas 2185 y siguientes, que establece la identidad de Luis Busch Morales, se concluye que la causa de muerte corresponde a un traumatismo craneano y torácico-abdominal por múltiples proyectiles balísticos de carga única, donde se reconocen al menos 7 eventos causantes de las fracturas constatadas, que por el patrón que presentan, los primeros 6 son compatibles

con el paso de proyectil de arma de fuego. El evento 7, corresponde a una lesión compatible con un traumatismo contundente, que a nivel del húmero (hueso largo del brazo) izquierdo afecta la región epifisal distal provocando una solución de continuidad en el epicóndilo medial, observándose rasgos de fractura y un pequeño desprendimiento en forma de mariposa lo que evidencia que la energía que impactó el hueso es lenta y focalizada, compatible con la acción de un elemento contundente y respecto a la dirección desde donde provino la energía, es de posterior a anterior y de arriba abajo. Respecto de la fractura craneal, se sostiene que no se puede determinar con claridad la trayectoria del proyectil debido a la ausencia del tejido óseo, pero a manera de hipótesis y consistente con los antecedentes recopilados, es posible inferir que el proyectil describe una trayectoria postero-anterior y de derecha a izquierda, generando un canal a partir del cual se observan rasgos de fractura irradiados y pérdida de tejido óseo; en tejidos blandos, este trauma lesiona tanto tejido encefálico como meninges (envoltura del tejido encefálico), por lo que corresponde a una lesión potencialmente mortal. Añade el informe que si bien el análisis de las osamentas per se no permite establecer temporalidad entre el trauma en cráneo respecto de los eventos en la parrilla costal, a modo de hipótesis y considerando la topografía y discrecionalidad de los traumas y en el contexto de un eventual fusilamiento, es posible plantear que los múltiples traumas en la parrilla costal se generarían en un primer tiempo, con la víctima enfrentando al tirador desde su plano anterior; mientras que en un segundo tiempo se produciría el trauma en el cráneo. Se explica también que no es posible diferenciar cuál de éstos causa en último término la muerte de la víctima, disquisición además irrelevante considerando que traumas por proyectiles balísticos en cada una de esas regiones por sí solas corresponden a lesiones potencialmente mortales. A su vez, se establece la forma de muerte como violenta de tipo homicida, es decir, ajena a la voluntad de la víctima y ocasionada por terceras personas. Hay que tener presente que doña Grimilda Hortensia Sánchez Gómez en su declaración remitida por la Secretaría Ejecutiva Programa Continuación Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior, a fojas 648 y siguientes, datada el 25 de enero de 1984, indicó que al exhumar el cadáver de una persona de un metro setenta y dos, estaba vestido con una camisa color verde agua que aún conservaba sus características, pantalón de pijama de color beige claro, zapatos negros intactos, lo mismo que los calcetines, que ella reconoció como pertenecientes a su esposo. Añadió que el cuerpo estaba boca abajo, con sus manos atadas por delante con un tiro de gracia en la parte frontal izquierda y con varios impactos de bala en el pecho, lo que tiene plena

coincidencia con el informe del Servicio Médico Legal antes citado.

EN RELACIÓN A LA DETENCION, LUGAR Y FECHA EN QUE SE COMETIERON LOS DELITOS

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que a fojas 1 de autos, se agregó Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde se indica que Francisco Gabriel Valdivia, Andrés Rojas Marambio y Luis Busch Morales: "El 6 de octubre de 1973 fueron ejecutados, por resolución de un supuesto Consejo de Guerra celebrado en Calama. Las tres personas mencionadas fueron condenadas a la pena de muerte por Consejo de Guerra que según versiones oficiales se habría realizado en Calama el día 6 de octubre de 1973, acusados de participar en un intento de sabotaje a la planta de explosivos Dupont de la empresa Enaex. La versión oficial fue publicada en la prensa regional. Esta Comisión no obtuvo copia del proceso respectivo ni de la sentencia. Las ejecuciones se practicaron el mismo día en que se habría desarrollado el Consejo y los restos de los ejecutados no fueron entregados a sus familiares sino hasta dos años después, cuando se les indicó el lugar en que se hallaban sepultados y se les permitió exhumarlos." El mismo informe agrega como observación que: "La Comisión se formó convicción de que la muerte de Luis Busch, Francisco Valdivia y Andrés Rojas fue el resultado de un enjuiciamiento realizado al margen de toda legalidad, incurriendo en una violación de su derechos humanos, en especial el derecho al justo proceso y a la vida, comprometiendo la responsabilidad de agentes del Estado. Basa su convicción en los antecedentes ya señalados respecto de los Consejos de Guerra y especialmente los siguientes: Entre la fecha de detención y la ejecución solo transcurrió un día, lo que da cuenta de la imposibilidad de haber efectuado una investigación y proceso judicial adecuados, de haber existido. Diversos testimonios dan cuenta de las consecuencias visibles de los apremios a que fueron sometidos los ejecutados durante ese breve lapso de tiempo, por lo que eventuales confesiones de ellos, carecerían de valor. Los acusados no tuvieron derecho a ser asistidos por un abogado y a sus familiares no se les informó que serían sometidos a Consejo de Guerra, por lo que no pudieron proveerles de asistencia letrada, y se enteraron de sus condenas y ejecuciones por informaciones radiales".

VIGÉSIMO TERCERO: Que a fojas 203, se incorporaron a la causa recortes de prensa del diario "El Mercurio de Calama", de 8 de octubre de 1973, remitidos por Informe Policial N°845 de la Policía de Investigaciones de Antofagasta, que informan en la noticia titulada "3 peligrosos extremistas fueron fusilados en Calama", en la cual se expresa: "Según un comunicado oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio, de

Calama, Coronel Eugenio Rivera Desgroux, el sábado 6, a las 18:30 horas, fueron ajusticiados los extremistas Luis Busch Morales, ciudadano boliviano y ex guerrillero en su país; Francisco Javier Valdivia Valdivia, ex presidente del Sindicato Industrial de la Empresa Nacional de Explosivos, Río Loa y Andrés Rojas Marambio, ex chofer del Servicio Nacional de Salud, quien tenía a su cargo una de las ambulancias del Hospital Carlos Cisternas." Continúa diciendo: "El Comunicado oficial expresa que de "acuerdo a lo acordado por el Consejo de Guerra, reunido el 6 del mes en curso se procedió a aplicar la pena capital (fusilamiento) a Busch, Valdivia y Rojas, quienes habían atentado en contra de personal uniformado y contra instalaciones de servicio de utilidad pública del Departamento, que acarrearán graves e irreparables daños para con esos servicios y para las personas que las servían". Asimismo, a fojas 663 y 3468 (el último con certificación de la Biblioteca Nacional donde se señala que corresponde a la publicación del día 10 de octubre de 1973, página 2 en "El Mercurio de Calama"), se incorporaron copias de recortes de prensa, donde figura la noticia titulada "20 años de prisión para un extremista", en que se indica: "...Por otra parte, Luis Bush Morales, ex guerrillero boliviano, casado con la extremista Grimilda Sánchez; el ex presidente del Sindicato Industrial de la Empresa Nacional de Explosivos, Francisco Javier Valdivia y Andrés Rojas Marambio, ex chofer del Servicio Nacional de Salud; fueron fusilados, de acuerdo a sentencia dictada por el Consejo de Guerra que se reunió el sábado pasado. Los sentenciados fueron ejecutados el sábado a las 18:30 horas". En otro recorte de prensa que rola a fojas 3465, de la Edición de "El Mercurio de Calama" del Lunes 8 de octubre de 1973, en una noticia de la portada de ese impreso, titulada "Desbaratan un Plan Terrorista en el Loa", en que no obstante no indicarse la fuente de la información, comienza titulando que: "El personal del servicio de inteligencia de Carabineros de Calama logró desbaratar un plan terrorista de amplias proyecciones...", éste diario era el organismo oficial de difusión del régimen militar, y ello se acredita por lo demás, con lo que se puede observar a fojas 3467, en cuya página, junto con la continuidad de la noticia de la portada, ya aludida, se publicaban los "Bandos" de la Jefatura de Zona en Estado de Sitio, en esa información, en el acápite subtitulado "A LA CÁRCEL", se comunica: "Todos los implicados en este proyecto de masacrar, con excepción de Pérez Marambio, fueron encarcelados el viernes pasado y el sábado debieron declarar y dar cuenta de sus actuaciones ante la Fiscalía Militar. Posteriormente serán procesados por un Consejo de Guerra"; a fojas 664 y 3463 se agrega otro recorte de prensa del mismo medio, vocero del régimen militar, en que tampoco se indica la fuente de la información, pero se

asevera categóricamente lo que se informa, titulado: "44 extremistas detenidos en la Cárcel de Calama", señala lo siguiente: "A 41 extremistas alberga en estos momentos la Cárcel Pública de Calama". Entre ellos cuenta a individuos de todas las categorías..."; continua señalando: "...entre los últimos integrantes figura un ex guerrillero boliviano, quien recibió asilo político en nuestro país y montaba en compañía de otros delincuentes un criminal plan. También los ex dirigentes de la Compañía Nacional de Explosivos que robaron material en esa industria para emplearlo posteriormente con fines de sabotaje. Además, un ex chofer de ambulancia de Hospital de Calama, quien portaba explosivos a la capital de El Loa", (fecha "domingo, 7 de octubre de 1973", según certifica la Biblioteca Nacional).

VIGÉSIMO CUARTO: Que a fojas 338 consta copia de sentencia recaída en causa Rol N°48-73, de 12 de noviembre de 1973, dictada por el Consejo de Guerra de Calama, dependiente del Primer Juzgado Militar de Antofagasta, según se lee en el timbre del costado superior izquierdo, mediante la cual se condena a Berta Erlinda Soto Labarca y a Petronila Hidalgo Honores por aplicación de la Ley sobre Control de Armas y Ley N° 12.927, respectivamente, aduciendo que ambas estaban acusadas, la primera, de pedir dinamita y de entregarla a Andrés Rojas Marambio, fusilado por extremista, y a la segunda, por haberle entregado a aquella una partida de dinamita, con detonadores y mecha. En el considerando primero de la sentencia, se señala: "Que está comprobado que la reo Berta Soto pidió a Petronila Hidalgo dinamita, la que posteriormente entregó al extremista fusilado Andrés Rojas" ; a fojas 341 consta Oficio N° 174, de 6 de octubre de 1973, emitido por el Primer Juzgado Militar, Fiscalía de Ejército Calama (se repite a fojas 371), donde aparece firmando como Fiscal Militar Óscar Figueroa Márquez, documento dirigido al Jefe del Registro Civil de Calama, en que se indica lo siguiente: "En el proceso que se instruye a ANDRÉS ROJAS MARAMBIO, LUIS BUSCH MORALES y FRANCISCO GABRIEL VALDIVIA VALDIVIA, se requiere en esta Fiscalía, la filiación de las personas anteriormente citadas. Consecuente con lo anterior, mucho agradeceré a UD, efectuar los trámites correspondientes en la Comandancia del Regimiento".(Cabe considerar que filiación, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es definida como: "Conjunto de los datos identificativos de un individuo' y, en especial, 'procedencia de una persona respecto de unos determinados padres", esto es, la concurrencia de Oficial del Registro Civil al Regimiento no tenía por objeto inscribir la defunción de las víctimas). Por lo demás, El certificado de defunción de las víctimas tiene fecha 8 de octubre de 1973 y la inscripción se realizó recién el 9 de octubre de ese año.

En cuanto a la detención de don Andrés Rojas Marambio:

VIGÉSIMO QUINTO: Que a fojas 32 declaró **Violeta del Rosario Berríos Águila** (ratificada judicialmente a fojas 231), quien además depone en declaraciones de fojas 270 y 291 ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. Señala que su pareja era don Mario Arguellez Toro, quien fue detenido el día 30 de septiembre de 1973 y de inmediato fue trasladado al Retén Dupont a donde todos los días le iba a dejar comida, y que con el tiempo supieron que se trataba de un centro de detención y torturas (esto se corrobora con la declaración judicial de Ruperto Lara Muñoz a fojas 3416, quien señala "Recuerdo que la Sra. Violeta Berrios le iba a dejar la vianda todos los días a su marido que estaba preso en el Retén. Lo habían llevado detenido funcionarios de estas comisiones especiales"). Agrega esta testigo que en esos viajes al Retén, específicamente el día 5 de octubre de 1973, encontró sentado a la entrada de esa unidad de Carabineros a Andrés Rojas Marambio, a quien conocía como chofer de la ambulancia de la ciudad de Calama y, como había una sola ambulancia, él era muy conocido, sumado a que era amigo de su pareja y, al parecer, compañeros de partido. Refiere haberle preguntado qué le había pasado, respondiéndole éste: "Aquí estoy", y que luego ingresó a dejarle comida a su pareja. Añade que cuando salió del recinto, él le dijo que le avisara a su familia que estaba en ese lugar, pidiéndole que le llevaran pañuelos y una frazada, porque estaba resfriado. Agrega que al día siguiente, aproximadamente a las 18:30 a 19:00 horas, como todos los días, concurrió al Retén Dupont a dejarle comida a su pareja, observando a su llegada, que dos Carabineros iban sacando a Rojas Marambio, y que le preguntó "Chato qué te pasó", observando que su cara era una masa humana, sin lograr distinguir sus ojos y que estaba muy hinchado, a lo que éste le preguntó: "Quién es", respondiendo ella "soy yo Violeta". Agregó que luego lo subieron acostado a una camioneta, en su parte trasera y que tomó rumbo hacia Calama. Manifestó que durante esa misma noche, habiendo arribado ella a Calama aproximadamente a las 20:00 horas, escuchó por la radio que: "Habían fusilado a Busch, Marambio y Valdivia" el día 6 de octubre del año 1973 y que los cargos que le imputaban, era transportar explosivos en la Ambulancia. Finalmente, afirma que estos antecedentes nadie se los contó y que los vivió personalmente. A fojas 231 detalla que en el Retén sólo había Carabineros, y a Rojas Marambio lo vio en un instante con su rostro como una masa humana.

A fojas 173 y 1047 declaró Inés del Carmen Espoz Zelaya, indicando que en el año 1960 ingresó a trabajar al Hospital de Calama, como auxiliar de enfermería, cargo que estuvo desempeñando hasta el año 1973, siendo reincorporada a sus

labores al año siguiente, pero que en el año 1980 se fue al exilio. Añade que como funcionaria del Hospital de Calama, conoció a Andrés Rojas Marambio, quien era conductor de la ambulancia del Hospital de Calama y estaba en conocimiento que él era militante del Partido Socialista. A su vez, declara que el día 3 de octubre de 1973, ingresó a su turno normal en el Hospital de Calama, a las 15:00 horas y recuerda que como a las 16:00 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en las afueras del Banco de Sangre sentada en una banca y desde una rampa proveniente desde el piso inferior, donde estaba la lavandería, observó que venía subiendo don Andrés Rojas Marambio, a quien saludó y él le preguntó si conocía a Ricardo Pérez. Añade que al único que conocía con ese nombre era a un músico y que Andrés le dijo que no era esa persona, sino que se trataba de un sobrino de él, que era socialista y le contó que lo habían detenido. Recuerda que en ese momento ella le dice que se fuera de la ciudad, pero que él le respondió que él no había hecho nada y no tenía por qué arrancar, a lo que ella respondió que nadie había hecho nada, incluso sus hermanos, a quienes también los habían detenido. Agrega además, que desde ese momento nunca más vio a Andrés. Refiere que ese mismo día, siendo alrededor de las 23:00 horas, en circunstancias que se retiraba a su domicilio, un guardia del Hospital de apellido Ramírez, le comentó que los Carabineros andaban buscando a Rojas Marambio, porque habían ido a preguntar dónde estaba y que él les había respondido que no tenía idea donde se encontraba. Asimismo, manifiesta que al día siguiente, a su llegada al Hospital, esto es, a las 15:00 horas, escuchó el comentario de que habían detenido a Marambio y que lo habían condenado a 20 años de prisión y que desde ese momento nada más se comentó, hasta que el día 6 de octubre de 1973, siendo alrededor de las 18:30 horas, en circunstancias que se encontraba en el Banco de Sangre, repentinamente entró una compañera de trabajo, diciendo "Mataron a Marambio", por lo que le preguntó quién le había dicho y ella le dijo que había sido Ester. Refiere que inmediatamente va a buscar a Ester, que trabajaba en maternidad, cuando iba por el pasillo observa que vienen caminando Ester y otras compañeras llorando, quienes le confirmaron que habían matado a Marambio. Declara que durante ese momento un enfermo las llamó a escuchar la radio y dieron a conocer un bando, donde informaron la muerte de Marambio, junto a Busch, que no conocía y a Valdivia, que tampoco conocía.

A fojas 178 declaró policialmente Juan Ernesto Ales Osorio, quien refiere que sobre los sucesos del año 1973 y que dicen relación con la detención de su cuñado, don Andrés Rojas Marambio, debe indicar que en esa época trabajaba en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, que él era conductor de la ambulancia y a su vez, era integrante del Partido

Socialista de Chile. Agrega que él tenía una buena relación con su cuñado, y que su esposa quería mucho a su hermano, por intermedio de ella se enteró que Andrés vivía junto a un amigo, cerca de calle Grecia en Calama. Además, también le comentaron que había sido detenido por personal de Carabineros, a su presentación en la Comisaría, ya que él se había enterado que habían detenido a un amigo con quien compartía la casa, quien a su vez era un profesor que habían detenido horas antes, por lo que el Andrés concurrió hasta la Comisaría a averiguar qué había pasado con su amigo y lo habían dejado detenido a él. Lo anterior, se lo comentó su fallecida esposa Teresa Rojas Marambio. Añade que él también fue detenido el año 1974, estando recluido en la cárcel de la ciudad durante 8 meses. Explica que allí conoció a varios detenidos, entre ellos gente de Chuquicamata y Calama, y que en ese lugar le comentaron otros detenidos que habían visto a Rojas Marambio, su cuñado, quienes agregaron que llegaba muy golpeado y que se acostaba en las bancas, pero nada más le dijeron al respecto de la muerte de él, pues estuvo pocos días en la cárcel, ya que fue detenido el día 4 de octubre de 1973 y fusilado un día 6 de octubre de 1973.

Con los dichos de estos testigos, especialmente de doña Violeta Berríos, quien aseguró que vio a Rojas Marambio en el Retén Dupont el 5 de octubre de 1973, sentando a la entrada, y lo volvió a observar al día siguiente cuando lo sacaron muy golpeado, tanto es así que le tuvo que decir su nombre para que él supiera quien le estaba hablando, luego de lo cual lo subieron a una camioneta y se lo llevaron, ese mismo día en horas de la noche se enteró por un bando radial que había sido fusilado y, de lo dicho por doña Inés Espoz, quien aseguró haberlo visto el día 3 de octubre de 1973 aproximadamente a las 16,00 horas, en el Hospital de Calama, y al día siguiente supo por comentarios que habría sido detenido y condenado a 20 años, además el 6 de octubre de 1973 se enteraron en el Hospital que había sido fusilado, se colige que la detención de don Andrés Rojas Marambio no se realizó antes del 3 de octubre de 1973, y posiblemente lo detuvieron el 4 o 5 de dicho mes.

En cuanto a la detención de don Francisco Valdivia Valdivia.

VIGÉSIMO SEXTO: Que a fojas 45 declaró policialmente **Silvia Noellea Tapia Gallardo**, lo que también hizo ante la Comisión Verdad y Reconciliación el 22 de julio de 1990, a fojas 658 y 659, señalando ser viuda de Francisco Gabriel Valdivia (vínculo que se acreditó con el certificado de matrimonio de fojas 1499). Agrega que su cónyuge era un comerciante de la zona, pero que con el paso de los años, su padre le consiguió trabajo como mecánico de la maestranza en el Dupont, actualmente la Planta de Enaex, y con el tiempo fue conociendo amigos que lo invitaron a integrarse al Partido

Socialista. Después comenzó a participar de los encuentros del Partido Socialista y era Presidente del Sindicato de Obreros Río Loa del Dupont y Presidente del Deportivo Tronador de la misma empresa y fundador del Club Cóndor o Sport Loa, actualmente Club Deportivo Cobreloa. Añade que el 20 de septiembre de 1973, su marido salió a trabajar como de costumbre, pero que en la tarde no regresó a la hora de salida, por lo que comenzó a preocuparse y como a las 21:00 horas lo fueron a dejar los Carabineros, quienes le dijeron "Acá le traemos a su marido, sano y salvo". Recuerda que el Carabinero que le habló era un conocido, casado con una sobrina de don Domingo Mamani López, individuo bajo, de contextura gruesa y colorín, de nombre Alfonso Pedroshell Valencia, quienes dejaron a su esposo y se retiraron. Refiere que cuando lo fue a abrazar se quejó y al preguntarle qué le había pasado, le mostró sus manos observando que no tenía uñas, ni en las manos y pies, y que además tenía los oídos reventados, porque le habían colocado corriente, incluso en sus genitales, los que estaban ensangrentados. Al consultarle qué le había pasado, le contó que a la hora de almuerzo, llegaron los Carabineros a la empresa y lo tomaron detenido siendo trasladado al Retén Dupont, donde comenzaron a interrogarlo y torturarlo, para saber dónde estaban las armas, de las cuales su marido les manifestó no tener antecedentes. Luego se quedó en la casa y como estaba tan mal, un doctor de apellido "Gallegos" fue a visitarlo y le dio licencia hasta el lunes siguiente, fecha en que se reintegró a su trabajo hasta el día 4 de octubre de 1973, fecha en la que a su marido le dieron sus vacaciones en la empresa, se quedaron en la ciudad de Calama, y siendo alrededor de las 20:00 horas, llegaron a la casa los Carabineros, nuevamente iba Alfonso Pedroshell Valencia, eran alrededor de 6 funcionarios, los cuales comenzaron a buscar por la casa y la registraron completamente, y como ella les preguntaba qué era lo que buscaban, le ordenaron callarse, mientras la alumbraban con una linterna en los ojos. Señala que su padre tenía en ese entonces una perra policial que ladraba mucho y un Carabinero le dijo que la hiciera callar porque o si no lo iba a matar a él y a la perra. Refiere no recordar la hora exacta, pero los funcionarios se llevaron a su marido, diciéndole que pronto lo regresarían a la casa. Añade que al día siguiente se levantó temprano y concurrió a la Comisaría de Carabineros que está ubicada en calle Granaderos, a consultar por su marido, pero le respondieron que no había ningún detenido con ese nombre en el lugar, que buscara en el Hospital, en la Postas y, cuando lo buscaba, se encontró con un amigo Gendarme en la Cárcel a quien le contó que habían tomado detenido a su marido el día anterior y éste le confirmó que no estaba en la Cárcel, le aconsejó que lo buscara en el Retén Dupont. Concurrió inmediatamente a ese

lugar, hasta donde llegó como al medio día, pero como no había ninguna persona para consultarle, intentó entrar, pero una señora que vivía en el campamento le dijo que no entrara porque los Carabineros le iban a pegar como lo habían hecho anteriormente con otra señora, agregando que los detenidos eran trasladados al Regimiento Calama, hasta donde se fue caminado, donde llegó en horas de la tarde noche, pero tampoco le dieron ninguna respuesta. Recuerda haberse entrevistado con un sujeto de nombre Jerónimo Rojo, quien le dijo: "Para qué lo andaba buscando", explicándole que los Carabineros lo habían tomado detenido la noche anterior y que aún no regresaba a la casa, ante lo cual éste le respondió que debía poner una denuncia por Presunta Desgracia. Después de eso regresó a su casa. Añade que se entrevistó con un amigo gendarme, quien le dijo que tenían a Francisco en el Regimiento y que lo llevarían a dormir a la Cárcel, agregando que le llevara frazadas porque hacía mucho frío y su marido estaba mojado. Añade que el día sábado 6 de octubre de 1973, concurrió nuevamente a la Cárcel, lugar donde no pudo ver a su marido, pero le entregó toda la comida que llevaba a los gendarmes que estaban de guardia, quienes le dijeron que se fuera a la casa y que consultara el día siguiente. Agrega que no le hizo caso al Gendarme y se quedó parada en las escaleras afuera de la Cárcel y como a las 15:00 horas de ese día, observó llegar un Jeep café, observando en su interior a Jerónimo Rojo y otros militares, quienes entraron al interior de la cárcel, desde donde sacaron a su marido y cuando iban saliendo se acercó a Jerónimo para preguntarle dónde lo llevaban, individuo que con un empujón le respondió que no tenía por qué darle explicaciones, ante lo cual lo increpó y la hizo callar. Añade que su marido le pidió que se fuera para la casa y otro militar de la comitiva le dijo que se quedara tranquila, pues en la noche lo traerían de regreso, que solamente iba a ser objeto de una entrevista porque no quería decir donde estaban las armas y como dijeron que lo iban a traer de regreso se quedó en la cárcel. Añadió que por ser hora del toque de queda, salió su amigo gendarme diciéndole que se fuera a la casa porque a su marido lo habían trasladado a la ciudad de Antofagasta para mantenerlo en la Cárcel de esa ciudad, ante lo cual ella le dijo que viajaría a Antofagasta para verlo, pero que cuando caminaba cerca de la plaza, su amigo Gendarme la alcanzó y le dijo que mejor se fuera para la casa, porque a su marido lo habían matado, como a las 18:00 horas de ese día, sin entregarle mayores detalles del hecho, y la fue a dejar a donde su compadre de nombre Armando Rojas, de quien no recuerda mayores antecedentes, quien era Suboficial mayor del Ejército y trabajaba en el Regimiento Calama y, estando en la casa de su compadre, llegó él con otro militar de apellido Silva, quienes habían ido al Regimiento a averiguar qué había pasado

y llegaron a la casa con la noticia de que habían fusilado a tres personas, confirmando la situación después que la fueron a dejar a la casa. Agrega que en una de sus tantas visitas posteriores al Cementerio, se le acercó el panteonero de apellido Ramírez, quien le señaló que sabía dónde estaba enterrado su marido, porque él mismo lo había sepultado, le manifestó que a él le ordenaron cavar cuatro fosas, una para él y las otras para tres personas, diciéndole además que su marido vestía un pantalón de tela, color azul medio celeste (lo que coincide con el pantalón periciado a fojas 1137), jersey celeste de lana (coincide con el suéter periciado a fojas 1135) y zapatos de gamuza (coincide con los zapatos periciados a fojas 1140), lo que concordaba plenamente con las vestimentas que su marido portaba el día que lo detuvieron. Hace presente, además, que el Capellán Jorquera Molina, en los días posteriores al 6 de octubre de 1973, llegó a su casa a avisarle que habían matado a su marido y que tenía que ir a buscar un Certificado de Defunción al Registro Civil, donde se indica como causa de muerte "fusilamiento y destrucción torácica".

Cabe tener presente que, sin perjuicio de no contar con una declaración judicial de doña Silvia Tapia donde ratifique sus dichos, quien falleció pocas semanas después de su declaración policial (6 de septiembre de 2010), sus dichos, en lo esencial, fueron apoyados por la declaración de su hijo Francisco Valdivia Tapia a fojas 181, quien a la sazón tenía once años de edad, y vivía junto a sus padres y abuelos, quien se refirió sobre hechos que percibió con sus sentidos, y al efecto dijo que el día 20 de septiembre de 1973 fue a buscar a su primo Juan Donoso Tapia al colegio que quedaba cerca de su casa alrededor de las 18,00 horas, al volver a su casa por el pasaje San Lorenzo, al llegar a la esquina de calle Latorre observó que en su casa había una patrulla de Carabineros y una gran cantidad de vecinos que estaban mirando, por temor se quedó escondido y cuando se cercioraron que el furgón de Carabineros se había retirado, se acercaron a su casa y su madre le comunicó que su padre había sido detenido por Carabineros, añadió que, en horas de la noche de ese mismo día, llegó su padre con su ropa mojada y les contó que había sido torturado detrás del Dupont, aplicándole corriente en los genitales, mostrando sus piernas en las que también tenía golpes y además señaló que había sido sumergido en un tambor con agua por los Carabineros. Más adelante expresó que sin poder precisar la hora, en la noche del día 2 de octubre de 1973, llegaron los militares a su casa, ingresando por calle Latorre, que él se quedó en un dormitorio más retirado y sin ventanas; refirió que su hermana pequeña salió con su abuela Paulina Gallardo por un pasillo hacia el patio de la casa, alcanzando a ver a su abuelo en calzoncillos arrodillado en un charco de agua,

observando que un militar golpeó con la culata del fusil a su abuelo, luego ordenaron que tranquilizaran a un perro policial que había en la casa, amenazando con matarlo, su abuelo regresó a su dormitorio y los militares preguntaron por Francisco Valdivia, ingresaron a su dormitorio y luego de revisar todos los muebles de la casa se lo llevaron detenido, desde cuando no lo volvió a ver. Agregó que el 6 de octubre de 1973, en horas de la noche escucharon un bando por la radio, en el dormitorio contiguo al de sus abuelos, en el que estaba su madre, su hermana y él, donde se comunicaba el fusilamiento de su padre junto a otras dos personas, pero antes de terminar la transmisión su madre apagó la radio y se fue al dormitorio de sus abuelos, mientras con su hermana escuchaban los llantos; luego narró la situación del cementerio sobre la exhumación de su padre y la sepultación en un nicho, lo que también presencié; en cuanto a la discrepancia que existe en la fecha de la detención según lo que señaló doña Silvia Tapia y lo expresado por don Francisco Valdivia, debe considerarse que es más factible que los hechos ocurrieran como los describió la señora Tapia, puesto que se trataba de una persona adulta en contraposición de su hijo de tan solo once años, por lo demás, según ambos describen la detención fue en horas de la noche, y perfectamente ello pudo ocurrir en las primeras horas de la madrugada, lo que para el menor pudo ser en una fecha anterior al cuatro de octubre; pero además, las actividades que desplegó y que relató doña Silvia Tapia en cuanto a lo que ella hizo para ubicar a su marido, los lugares que visitó y con quienes habló, hasta ubicarlo en la cárcel, permiten dar por cierto lo que ella señala en cuanto a que la detención de don Francisco Valdívía, la víctima, se efectuó el día 4 de octubre de 1973. Asimismo consta a fojas 188, la declaración de doña Ruth Emelina Tapia Gallardo, cuya ratificación consta a fojas 1032, quien señaló ser la hermana de Silvia Noelia Tapia Gallardo, fallecida el 6 de septiembre de 2010, quien a su vez, era casada con don Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, su cuñado y padre de sus dos sobrinos. En cuanto a los hechos investigados, refiere que en el año 1973, para el Golpe Militar, ella se encontraba viviendo en Antofagasta, junto a su grupo familiar y por teléfono se enteró de la detención de su cuñado, instancia en la que habría sido golpeado por parte de sus aprehensores. Posteriormente, por intermedio de la radio, se enteró de la muerte de su cuñado, por fusilamiento. Recuerda que una oportunidad, en circunstancias que concurrió a la ciudad de Calama a visitar a sus padres, sin recordar fecha exacta, y siendo alrededor de las 02:00 horas, personal de Ejército en un jeep, llegaron a la casa buscando a Francisco, sacaron a su padre al patio y lo golpearon fuertemente con la culata de los fusiles, como asimismo golpes de pies y puños. Añade que

la perra de la casa, que era de raza policial, trató de defender a su padre y los militares la querían matar, por lo que su madre tuvo que hacerla callar y la encerró. No recuerda muy bien si fue ese día cuando se llevaron detenido a Francisco, porque su hermana le pidió que se llevara a su pequeña hija de nombre Patricia, sacándola del lugar y se la llevó al día siguiente a la ciudad de Antofagasta, ignorando lo que posteriormente sucedió. Agrega que sus padres vivían en ese entonces en calle Latorre esquina de Tarapacá. Finalmente, refiere que por lo que ella escuchó o le dijeron, supo que la detención de su cuñado se habría originado por una supuesta tenencia de explosivos, lo que obviamente descarta, ya que su cuñado era una persona muy tranquila, siendo solamente dirigente sindical de la Planta de Explosivos Dupont, como también encargado de fútbol en la planta. Se enteró también que su cuñado, junto a otras dos personas, fueron los primeros fusilados en la ciudad de Calama, acusados de la tenencia de explosivos, pero que nunca fueron capaces de probar o entregarles antecedentes certeros que así lo acreditaran.

Además de las probanzas precedentemente indicadas constan los dichos de: Senedio Jiménez Rojas a fojas 546, quien confirma la detención de los dirigentes socialistas de Dupont el 20 de septiembre de 1973 y de don Germán Ramón Hidalgo Contreras a fojas 3182, dio cuenta que a su hijo lo detuvieron unos días después del 11 de septiembre de 1973 junto con Francisco Valdivia, ambos habrían sido llevados a la Primera Comisaría ubicada en calle Granaderos donde permanecieron algunas horas y fueron golpeados. Además de los asertos del testigo Juan Adán Guenul Guenul de fojas 3165, 3167 y 3196, quien afirmó que la comisión civil de Carabineros colaboraba en estas detenciones con los militares. Por su parte Guillermo Arancibia Bonilla (Ayudante del Prefecto), también se expresó en el mismo sentido, con lo que se logra comprobar que los militares también llevaban detenidos a dicho Retén, lo cual hace presumir que existía coordinación del organismo represor de Carabineros conocido como SICAR, a cargo del oficial Manuel Wladimiro Cuadra y el Ejército, de ahí que surge como conclusión la veracidad de lo narrado por don Francisco Valdivia Tapia y doña Ruth Tapia Gallardo. Respecto a los dichos sobre haber visto cómo sacaban a su marido desde la cárcel de Calama, hay que considerar en este sentido las declaraciones de Rosa Elena Sepúlveda Araya a fojas 171 y 1031, quien estuvo detenida en la Cárcel de Calama, y señala: "el 06 de octubre de 1973, la señora María, Gendarme que nos cuidaba, nos comunicó que se llevaron a Busch, Mamani y Valdivia, para fusilarlos". Y si bien es cierto que don Orlando Justiniano Aros a fojas 3625 declara "a Busch, Valdivia y Rojas los fusilaron el 6 de octubre de 1973, nunca los vi en la cárcel", cabe consignar

que de su relato de los hechos que a él le acontecieron se desprende que llegó después de esa fecha a la cárcel de Calama, en efecto, refiere que fue detenido el 4 de octubre en su trabajo, una constructora de casas, y lo llevaron a la Primera Comisaría de Calama donde estuvo sólo una noche, de ahí lo llevaron a la Dupont, donde estuvo otra noche y de ahí lo llevaron nuevamente a la Primera Comisaría, donde tenían habilitado un espacio para detenidos políticos y después, sin señalar cuanto tiempo, desde la Comisaría fue llevado a la cárcel. En la cárcel pudo ver a doña Grimilda Sánchez muy mal anímica y físicamente porque había sido torturada y también conoció a su hijo Fernando que fue ultimado por la Caravana de la Muerte.".

En cuanto a la detención de don Luis Busch Morales:

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que a fojas 131 declaró doña **Grimilda Hortensia Sánchez Gómez** (quien además depuso en declaraciones de fojas 34, 138 vta., 652, y en careo de fojas 137 vta.), manifestando que fue detenida el día 11 de septiembre de 1973 en la Gobernación, porque se encontraba en comisión de servicio, y que además trabajaba en el Hospital de Chuquicamata. Expuso que en esa oportunidad la dejaron con arresto domiciliario, lo que se prolongó hasta después del 18 de septiembre del mismo año. Después de eso, al comienzo de octubre, concurrieron una patrulla de Carabineros a su domicilio y registraron todo, la detuvieron en tanto señalaban que iban a ir a detener a su hijo Fernando, a quien también subieron a la camioneta, luego la llevaron a Investigaciones y al Ejército, después a la Comisaría y seguidamente al Retén Dupont, donde también había otras personas detenidas. Refiere que al estar en Dupont, otro compañero nombró a su marido Luis Busch, entonces lo acusaron de terrorista, además que era boliviano, esto fue alrededor del 4 de octubre, no presenciando su detención y nunca más lo volvió a ver, porque a ella la trasladaron a la cárcel de Calama, hasta el día que dictaron su sentencia, donde la condenaron a la pena de extrañamiento; refirió que sabe que a su marido lo sacaron en pijamas y lo llevaron a la Dupont donde fue extremadamente torturado y posteriormente lo trasladaron a la cárcel de Calama, quedando incomunicado junto a su hijo Fernando, desde donde fue sacado para ser torturado. Aclara que en el Consejo de Guerra en que fue condenada que se habría celebrado en el mes de noviembre, había alrededor de 20 personas, entre las cuales no estaban "Luis Busch Morales, Francisco Leopoldo Valdivia Valdivia, ni Andrés Rojas Marambio". Añade que la muerte de Luis Busch Morales, Francisco Valdivia Valdivia, y Andrés Rojas Marambio, fue el 6 de octubre de 1973, y que se enteró de su muerte porque le avisó otro prisionero que también estaba en la cárcel, y que al día siguiente, el 7 de octubre del mismo

año, llegó el párroco del Ejército, quien le devolvió el anillo de Luis y le dijo que él no se había querido confesar y que estaba muerto. Finaliza indicando tener la seguridad de que no hubo Consejo de Guerra respecto de su marido Luis Busch Morales, de Francisco Valdivia Valdivia y de Andrés Rojas Marambio, ya que el Consejo que le hicieron a ella fue en el mes de noviembre del 1973 y la muerte de ellos fue el día 6 de octubre de ese año. En la denuncia formulada en agosto de 1990 en autos Rol N°33.516 del Primer Juzgado del Crimen del Loa que pasó por incompetencia, como se acostumbraba en esa época, al Primer Juzgado Militar de Antofagasta, también refirió que el 4 de octubre de 1973 Luis Busch Morales fue detenido en el que fuera su domicilio en la ciudad de Calama y a los dos días después de su detención fue fusilado en un ilegítimo procedimiento, y a fojas 4 de esos autos, agregó que la última vez que lo vio vivo fue el día 19 de septiembre de 1973 en horas de la noche en un restaurante.

A fojas 171, declaró **Rosa Elena Sepúlveda Araya** (cuya ratificación judicial obra a fojas 1031), quien señaló haber sido detenida junto a otras personas el 30 de septiembre de 1973 en la Villa Ayquina por una patrulla de Carabineros de Chuquicamata, siendo trasladada el 2 de octubre del mismo año a la Cárcel de Calama, quedando desde ese momento a disposición del personal del Ejército. Agrega que el 6 de octubre de 1973, la señora María, gendarme que los cuidaba, les comunicó que se habían llevado a Busch, Mamani y Valdivia, para fusilarlos. Afirma que Busch y Valdivia estuvieron en la cárcel, pero no podría decir lo mismo de don Andrés Rojas, pues no lo conocía. Finalmente a fojas 3174 se compulsó declaración judicial de **Edith Hortensia Castro Olave** (quien además depone en declaraciones de fojas 3171 y 3210), señalando haber sido detenida el 1 o 2 de octubre de 1973 por una comisión mixta entre Militares y Carabineros al mando del "Teniente Wladimiro". Refiere que Luis Busch jamás estuvo en la Cárcel, que él fue detenido el día 4 de octubre de 1973 por el Teniente Wladimiro, tampoco lo llevó a la Primera Comisaría, solamente, supone, tiene que haberlo llevado al Retén de la Dupont o al Regimiento. Hace presente que esta persona era el cónyuge de doña Grimilda Sánchez, y ella misma lo encontró, a los años después, en el Cementerio General de esta ciudad.

EN CUANTO A LOS SUJETOS QUE PRACTICARON LAS DETENCIONES:

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, además de los dichos de doña Edith Hortensia Castro Olave, referidos en el motivo precedente, que se pronuncia por la detención de Luis Busch por el Teniente Wladimiro de Carabineros, cabe señalar que varios de los ex funcionarios de Carabineros que depusieron en el proceso identifican al SICAR como organismo creado para represión política y tortura, es así que: a) A fojas 167,

declaró policialmente **Luis Alberto Caroca Roa**, quien manifestó haber sido destinado a la 1º Comisaría de Calama, y señaló que los primeros días después del Golpe Militar se formó un grupo a cargo del Teniente Wladimiro Cuadra, con 3 o 4 funcionarios más, que se ubicaron en las dependencias de la antigua Prefectura, ubicadas en la calle Vargas, en pleno centro de la ciudad de Calama, y que habrían dejado de depender de la 1º Comisaría y eran independientes de los servicios que su unidad cumplía e ignora de quien recibían órdenes, si de la misma Prefectura o directamente del Ejército; añadió que se imagina que ellos se dedicaron a realizar investigaciones relacionadas con personas contrarias al régimen militar e ignora si detenían o no a personas y el lugar donde las trasladaban. En cuanto al Reten Dupont, declara que se ubicaba a la entrada de la ciudad de Calama y estaba a cargo de un Sargento 1º de apellido Figueroa y su dotación correspondían a unos 6 Carabineros. Además en las dependencias había unas caballerizas, que estaban ubicadas a una cuadra más o menos de la Planta de Explosivos Dupont y recuerda que después del Golpe Militar comenzaron una serie de rumores, unos decían que habían colocado dinamita en los alrededores de la Planta de Explosivos, ignora si los encontraron o los sacaron y si encontraron a los responsables, pero en esa fecha había bastante conmoción pública y circulaban varios rumores, de los cuales nada de eso le consta, pues nunca se supo si era efectivo que habían instalado explosivos. Indica que también escuchó en esa fecha que habían encontrado al conductor de la ambulancia trasladando explosivos, pero que eso tampoco le consta, cree que los encargados de realizar estas actividades eran los propios servicios especiales que fueron dispuestos, tanto de Carabineros como del Ejército y no sabe si se involucraron otras instituciones. b) A fojas 169 y 1030, declaró policialmente **José Luis Ledezma Azola**, señalando que el día 12 o 13 de septiembre de ese año, se formó un grupo de 5 personas más o menos, que se fueron a radicar a las dependencias del Reten Río Loa, más conocido como Retén Dupont. Refiere que el grupo iba a cargo de un Teniente de apellido Cuadra y cuatro funcionarios, quienes fueron desligados completamente de la 1º Comisaría y se dedicaron exclusivamente a las detenciones de personas contrarias al régimen militar, a realizar allanamientos e interrogatorios, lo que no le consta, pero se fueron enterando por comentarios en la misma unidad. Respecto al Retén Dupont, refiere que antes era una unidad pequeña donde había alrededor de 6 funcionarios, a cargo de un Sargento de apellido Figueroa, y la unidad se ubicaba fuera de la ciudad, a un costado de la Planta de Explosivos de ENAEX, y nunca conoció sus dependencias, pero sabía que había unas caballerizas. En cuanto a los Carabineros que participaron de ese grupo,

recuerda a un Sargento 1º de apellido Rivera, a un Cabo de Apellido Concha, y los otros eran unos Carabinero. c) A fojas 250 y 1045, declaró **Mario Edgardo Hernández Rodríguez**, indicando que a la época de los hechos se desempeñaba como Subcomisario en la 1º Comisaría de Calama, con el grado de Capitán (lo cual coincide con el documento de fojas 56), y que no participaron en detenciones de personas u otros allanamientos o procedimientos de orden político. Agrega que para tales efectos, se dispuso de parte de la Dirección General, la creación de un Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), integrada por un Teniente de nombre Manuel Wladimiro y dos Carabineros más, y que a los pocos días, la Prefectura dispuso que quedaban bajo su mando. Explica que la función de este grupo era atender las denuncias de orden político que llegaban a conocimiento de Carabineros, pero que de ese tema no sabe mucho, pues ese personal ya no pertenecía la unidad y por ende, no le daban cuenta de las actividades que realizaban, pero funcionaban en las mismas dependencias de la Comisaría y como dependientes de la Prefectura, tenían la circunscripción de ella, por ende, funcionaban en cualquier parte y podían trasladarse a cualquier lugar o unidades de la jurisdicción. Añade que observó personas detenidas en la comisaría, pero que estaban a cargo de este grupo especial Sicar, y como no dependían de la unidad no se informaba mayormente de estos temas que eran de exclusivo conocimiento de la Prefectura, de quienes dependían. d) A fojas 538, declaró **Rómulo Enrique Galleguillos Pangué**, quien refirió que en 1970 fue destinado al Retén Dupont, y que en esa unidad prestó servicios hasta el año 1974. Recuerda que en el año 1973, se encontraba como jefe el Sargento 2º Luis Figueroa Godoy, siendo parte de la dotación de ese entonces Ruperto Lara, el Sargento Chávez, sin recordar otros nombres, pero eran alrededor de 8 personas. Agrega que el Retén Dupont, era una casa de material sólido, destinada como cuartel, en el living comedor funcionaba la guardia, detrás de esta estaba ubicada la oficina del jefe de retén, hacia el costado derecho, había una puerta que comunicaba con los dormitorios del personal soltero, de quienes no recuerda sus nombres, pero eran dos o tres personas. La casa tenía unas caballerizas, era un patio cerrado con 6 o 7 separaciones, donde guardaban los animales, seguidamente había una pequeña dependencia destinada como bodega de forraje. Añade que había un calabozo pequeño, donde cabían como 4 personas de pie y estaba aislado del campamento Dupont a unos 500 metros aproximadamente. Por lo anterior, deduce que el mando de Carabineros de la época eligió ese lugar, por las características que presentaba el mismo, esto es, completamente alejado de la ciudad y del campamento de la empresa de explosivos, para realizar las funciones de identificación de personas contrarias al régimen militar, por

parte de personal del SICAR. Agrega que no recuerda fecha exacta, pero que posteriormente apareció personal de la comisión civil, pero denominada SICAR (servicio de inteligencia de Carabineros), a cargo del Teniente Manuel Wladimiro Cuadra, con otros funcionarios, de quienes no recuerda sus nombres, quienes comenzaron a preguntarles si conocían personas pertenecientes a partidos comunistas o socialistas, pero se entendieron directamente con el Jefe de Retén, ignorando la información entregada por éste. Añade que el SICAR comenzó a llevar personas detenidas al Retén, como estaban en situación de acuartelamiento, podían observar esta situación y en todas las ocasiones en que éstas personas llegaron al Retén, el jefe a ellos los hacía salir a custodiar el perímetro externo, ignorando completamente el tenor de los interrogatorios y si eran o no torturados en ese lugar los detenidos, agregando que en ocasiones permanecieron personas detenidas durante la noche, algunas pasaban dos días y luego eran sacados a otros lugares. El jefe de retén les ordenaba cuidar el entorno del cuartel, los detenidos después de ser interrogados por el SICAR, eran ingresados al calabozo y la orden del jefe era no acercarse ni preguntar nada. Esto siguió sucediendo paulatinamente, pero cada vez era más frecuente que llevaran personas al lugar y a ellos les causaba mucha molestia la presencia de detenidos en el cuartel, pues los hacían salir al exterior para resguardar el perímetro mientras duraba el interrogatorio, sin importar si era de día o de noche exponiéndolos a las inclemencias del tiempo, esto le llevó incluso a representarle a su jefe la molestia y de sus compañeros de trabajo, pero el jefe le respondió que cumplía órdenes superiores y ante eso no podía hacer nada, por lo que no siguió insistiendo en el tema y se retiró del lugar. No se acuerda si iban personas a la unidad a visitar los detenidos, pues no siempre estaba en las dependencias, ya que debían cumplir todos los servicios dispuestos por el jefe, lo que obviamente significaba que salieran a la calle o simplemente se apostaban en el control carretero donde pasaban gran parte del tiempo controlando vehículos. e) A fojas 542, 1424, 1481 y 3153, declaró **Guillermo Miguel Pascual Arancibia Bonilla**, señalando que a la época de los hechos era ayudante del Prefecto y que dependía directamente de él, que estaba encargado de toda la parte información de la unidad, novedades que llegaban de las dos comisarías y preparar los cronogramas del Prefecto. Agrega que se hicieron patrullajes mixtos con personal de ejército, pues tuvo la oportunidad de ver las órdenes, que eran transmitidas directamente a los comisarios de cada unidad y de esta forma pasaron mucho tiempo. Refiere haber tomado conocimiento de fusilamientos que se produjeron en la pampa, específicamente en el sector de Topater, por parte de personal del Ejército, pero no presencié estos hechos y sólo

llegaron a su conocimiento por comentarios del personal de la Prefectura, lo que informó inmediatamente al Prefecto. Declara que habían detenidos en las comisarías y, en el retén Dupont tenía su base el SICAR (servicio de inteligencia de carabineros) que trabajaba en conjunto con personal del Ejército, que estaba a cargo del Teniente Wladimiro o el Teniente Alfero, no recordando a sus integrantes, pero que eran 4 a 5 personas, que tenían la misión de un servicio de inteligencia para prevenir disturbios, desórdenes o atentados y especialmente, a ubicar la gran cantidad de explosivos que había en manos de particulares, además identificar cualquier elemento de izquierda de tipo subversivo. Las actividades militares o de carabineros, estaban direccionadas a detectar, identificar, neutralizar y detener cualquier actividad de tipo subversiva de que tomaren conocimiento, en caso de que el personal o algún oficial que no cumpliera esta orden sería sometido a un consejo de guerra. Lo anterior le consta pues era él la persona que descifraba las instrucciones provenientes de la ciudad de Santiago. Agrega que el grupo SICAR comenzó a funcionar de preferencia en el Retén Dupont, sin perjuicio de tener jurisdicción en toda la Región, ellos trabajaban de civil y se movilizan en una camioneta de la empresa Cobre Chuqui, tenían contacto directo con el señor Prefecto y para la parte operativa dependían directamente del Subprefecto, esto es, el señor Arriagada, cuando correspondía informaban de sus actividades a los comisarios. Afirma que en varias oportunidades pudo ver que este grupo trasladaba detenidos en la parte posterior de la camioneta (detalle en que coincide con doña Violeta Berríos, quien señala haber visto cómo subían a Andrés Rojas Marambio a la parte posterior de una camioneta, con destino a Calama). Refiere que el fiscal militar veía los problemas de Carabineros y de Ejército, por eso ambos se reunían periódicamente. Expuso que toda la información se enviaba al Coronel Rivera, la que correspondía a las Comisarías de Calama, Chuquicamata, retén Toconao, San Pedro de Atacama, y que los delitos comunes eran entregados a los tribunales ordinarios, en cambio a los otros eran entregados a la Fiscalía Militar. Refiere haber sabido que algunos detenidos de las patrullas militares eran trasladados al retén Río Loa y luego los iban a buscar, que eso le consta y en esa detención nada tenía que ver el SICAR o funcionarios del Retén. f) A fojas 578,996 y 3415 y en careo de fojas 3420, **Ruperto Segundo Lara Muñoz**, quien refirió que estaba destinado en el Retén Río Loa durante 1973. El jefe de ese entonces, era el Sargento 1º don Luis Figueroa Godoy, siendo parte de la dotación un Carabinero de apellidos Galleguillos Pangué, un Sargento de nombre Rafael Chávez Toledo, los Carabineros Joel Ortega, Guido Rodríguez Aguirre, Jaime Rivera Labra, apodado "el enchapao", Juan Espejo Pereira, sin recordar otros nombres, pues manifiesta

que en esa fecha llegó a trabajar personal de la comisión civil, que tenía su sede en la 1º comisaría, pero que llevaban detenidos al Retén Río Loa y los interrogaban, por lo que pasaban diferentes funcionarios, recordando entre ellos a Hugo Díaz Olivares y al Carabinero Sergio Concha Merari, sin recordar otros nombres, pero que habían 3 o 4 funcionarios en total, todos a cargo del Teniente Wladimiro Cuadra, y que después hubo otro Teniente de apellido Alfero, quienes al parecer estaban encargados de los servicios especiales de Carabineros, ignorando mayores detalles. Añade que los funcionarios integrantes de estos servicios especiales, llegaban a la unidad con detenidos, a quienes interrogaban en las dependencias del mismo Retén, para luego trasladarlos a otro lugar, ignorando a cuales, presumiendo que a disposición de los Tribunales, y a otros detenidos los dejaban en la unidad en custodia. Indica que lo principal era recibir y entregar detenidos, siendo la mayoría de ellos por delitos de índole subversivo y eran llevados hasta la unidad por este grupo especial. Agrega que en presencia del personal de guardia no se torturaba a los detenidos, que nunca tomó conocimiento de que se realizara algo así en la unidad, pero sí estaba en conocimiento de que los detenidos eran interrogados, aunque nunca le correspondió ver a algún detenido lesionado. Aclara que el Retén Río Loa era de material ligero, se trataba de una casa antigua, cedida por la empresa de explosivos ENAEX, y tenía un servicio de guardia, una oficina del Jefe de Retén, una pieza habilitada como dormitorio de solteros y una dependencia habilitada para cocina, aparte de las caballerizas que estaban ubicadas hacia el costado norte donde efectuaban los interrogatorios, faltándole describir un pequeño calabozo de 3x3 metros. Hace presente que el Retén estaba ubicado detrás de las casas de un pequeño campamento habilitado por la empresa para sus empleados, éste grupo de casas estaba ubicado a unos 300 metros al norte de la planta y el retén inmediatamente detrás de este grupo habitacional, rodeado de sitios eriazos. Explica que solo cuando le correspondía el servicio de guardia, tenía acceso a los detenidos, porque tenía la misión de recibirlos y entregarlos al día siguiente, pues el servicio duraba 24 horas, ignorando completamente los detalles del procedimiento adoptado con esos detenidos. Dentro de los detenidos, recuerda a algunos de apellido Valdivia, Mamani, Ortega, Rojas Marambio, a quien recuerda muy bien, porque se acercó a él en la guardia del recinto, pidiéndole que lo ayudara porque presentía que algo le pasaría. En cuanto a las muertes de Andrés Rojas Marambio, Francisco Valdivia Valdivia y Luis Busch Morales, indica que a los dos primeros los recuerda claramente como que estuvieron en el Retén, pero que del último no tiene antecedentes. Añade que los Carabineros de la Comisión Civil

nada comentaban acerca de los detenidos, y el personal que recuerda era Sergio Concha Merari, el cabo Gallegos Fuentes y Hugo Díaz Olivares. En cuanto a Oficiales integrantes de la Comisión Civil, recuerda Wladimiro Cuadra y a Alfero, quienes eran los oficiales a cargo y quienes ordenaban sacar e ingresar a los detenidos; g) A fojas 583 y 999, declaró **Joel del Carmen Ortega Valenzuela**, señalando que para el mes de septiembre del año 1973, se encontraba prestando servicios en el Retén Río Loa, dependiente de la 1 ° Comisaría de Calama, siendo el Jefe de dicha unidad el Sargento Figueroa, con una dotación de 5 funcionarios, entre sus compañeros más cercanos, recuerda a un Suboficial de apellido Lara, otro Cabo de apellido Galleguillos, y del resto no recuerda sus nombres. Refiere que en ese tiempo funcionaba la comisión civil, en ese entonces a cargo de un capitán Wladimiro, integrada además por 4 funcionarios, de quienes no recuerda nombres, pero que ellos estaban encargados de realizar detenciones de personas por temas políticos, a quienes trasladaban al Retén Río Loa, donde procedían a interrogarlos, no le consta que los hayan torturado, pero escuchaba los gritos de la gente, sin poder presenciar una situación así, pues no le consta y no podría afirmar que eso haya ocurrido realmente porque no lo vio. Hace presente que por la unidad pasaron varios detenidos, unas 80 personas, a quienes los llevaban a interrogatorio, luego los devolvían y así sucesivamente, eran pocos los detenidos que pasaban la noche en la unidad, estaban en conocimiento que se trataba de detenidos por temas políticos, sus familiares los visitaban y les llevaban comida, que los mismos funcionarios se la hacían llegar, pero que en pocas ocasiones sacaron los detenidos al patio, solamente cuando los de la comisión civil abrían el recinto, pues eran los únicos que podían hacerlo, sin percatarse que tuvieran lesiones en el cuerpo. Hace presente que el Jefe del Retén estaba en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo, pues la gente de la comisión civil debe haberle informado lo que estaban haciendo. Señala que a Andrés Rojas efectivamente lo conoció, se trataba del chofer de la ambulancia del Hospital de Calama, con quien compartían frecuentemente porque realizaban un turno en emergencia del Hospital y varias veces le correspondió a él ese servicio. Indica que en ese tiempo supo que a este señor le habían disparado en la vía pública, ignorando mayores antecedentes. En cuanto a Francisco Valdivia, también lo recuerda, se trataba de un señor moreno, alto, quien estuvo siendo interrogado en el Retén Río Loa y en horas de la tarde de un día, personal de la comisión civil, a cargo de Wladimiro, sacaron a esta persona y lo llevaron caminando por los alrededores de la Planta de Explosivos, después de unas horas regresaron al Retén, traían unas bolsas plásticas con explosivos. Según se comentó, esta persona tenía la intención

de volar la planta y los megasines, que contenían muchos explosivos. Recuerda que las bolsas eran grandes y deben haber contenido unos 160 kilos de explosivos, cree que vio dos o tres bolsas, las que personal de la comisión civil subieron a una camioneta y trasladaron, conjuntamente con el detenido, a la ciudad de Calama, ignorando qué sucedió posteriormente con esta persona. Agregó respecto del señor Valdivia, que era un dirigente sindical de la empresa de explosivos. Sobre Busch y Rojas, manifiesta que no sabe nada, él estuvo sólo de paso, tiene entendido que lo mataron en Calama, cerca de la Comisaría, no lo tiene claro. h) A fojas 589 y 1007, declaró **Juan Marcelino Espejo Pereira**, señalando que el día 11 de septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo funciones policiales en la 1º Comisaría de Calama y se decretó el acuartelamiento en primer grado del personal, posteriormente, les ordenaron realizar servicios de patrullaje, controles de Toque de Queda y reforzar la guardia de la comisaría, que incluso mandaron militares a reforzar en las afueras de la unidad, pues se decía que podía realizarse atentados contra los cuarteles policiales. Refiere que como 15 días después del Golpe Militar, les ordenaron a varios funcionarios acudir a reforzar el Retén Río Loa, pues surgieron antecedentes que intentarían volar la planta de explosivos. Relata que la función principal era la custodia de los detenidos políticos que se llevaban a ese lugar, por parte de Carabineros, a través del grupo SICAR, Servicio de Inteligencia de Carabineros y los Militares, de quienes ignora antecedentes. Añade que el SICAR estaba a cargo de un Mayor, de quien no recuerda su nombre, además estaba integrado por un Carabinero de nombre Sergio Concha Menare, ignorando el nombre de otros integrantes, andaban de civil y no se metían en sus asuntos. Tanto los Militares como Carabineros llevaban gran cantidad de detenidos al Retén, pero como la unidad era demasiado chica, el Jefe de Retén de ese entonces de apellido Figueroa, manifestó su malestar ante el Prefecto de la época, de quien no recuerda su nombre, pero recuerda su visita al Retén, donde el Jefe le manifestó su molestia por la gran cantidad de detenidos que eran llevados por los Militares, recordando que en ese momento el Prefecto dio la orden de recibir solamente a los detenidos que eran traídos por el SICAR, mientras los que traían los Militares debían ser llevados inmediatamente al Regimiento. Respecto a la muerte de Andrés Rojas Marambio, declara que conoció a esta persona antes de estos hechos, pues se trataba del conductor de la ambulancia del Hospital, con quien incluso jugó a la pelota y permanentemente él pasaba como a las 22:00 horas en la Ambulancia con destino a Sierra Gorda, a buscar enfermos. Recuerda que nunca lo controlaron y tampoco lo vio detenido en el Retén. Respecto a don Francisco Valdivia Valdivia, le parece que lo vio en una oportunidad en el

Retén, pero que no está muy seguro, pues los Militares llegaron a la fábrica y detuvieron a todos los dirigentes. Posteriormente, se enteró que a estas dos personas las habían fusilado, acusando a los dirigentes de sacar explosivos de la Planta, los cuales entregaban a don Andrés Rojas Marambio, quien en la Ambulancia los transportaba hacia Sierra Gorda, donde se los entregaba a la enfermera que estaba a cargo de la Posta. Aclara que eso fue lo que escuchó posteriormente, pero nada de ello le consta, pues no participó de sus detenciones, mucho menos de sus muertes.

i) Pablo Guillermo Alfero Brenner en declaración que rola a fojas 3178 señaló que reemplazó a Wladimiro Cuadra en el SICAR, quien señaló que vio personas detenidas en la Primera Comisaría de Calama, mineros u otros ciudadanos y recuerda que algunos detenidos que llegaron a esa comisaría fueron derivados al Retén Río Loa, conocido en ese tiempo como la Dupont, que según él entendió fue por razones de espacio y para comodidad de los detenidos.

j) A fojas 3180, 3249 y 3251 se compulsaron declaraciones de **Sergio Merari Concha Concha** (SICAR), quien sostuvo que para el 11 de septiembre de 1973 estaba en la Primera Comisaría de Calama y a las dos semanas el Mayor Juan Utreras Chávez lo asignó para integrar el SICAR, servicio compuesto por cuatro funcionarios y dirigido por el Teniente Manuel Wladimiro Cuadra, grupo integrado además por el sargento Hugo Olivares y un cabo, que dependía de la Prefectura de Calama y ocupaban dependencias de la Primera Comisaría, investigaban grupos subversivos que existían en la zona y el hallazgo de armas o explosivos y además debían identificar y tener conocimiento de las actividades de los políticos de esa época. Indicó que dado que la Primera Comisaría se encuentra en plena ciudad, los detenidos fueron trasladados al antiguo Retén Río Loa, conocido como Dupont, esto porque quedaba más aislado y no había tanta interferencia en los diferentes procedimientos, en los que actuaban todos los que componían la agrupación y se trasladaban en una camioneta marca Ford de color verde. También manifestó que le correspondió participar en las detenciones de los funcionarios de la Empresa Nacional de Explosivos ENAEX, los que fueron entregados a la Cárcel y que posteriormente fueron retirados por una comitiva militar, los que según se dijo en su momento, los llevaron al sector Topater y los fusilaron, no sabiéndose más de su paradero.

k) A fojas 3253 y 3261, se compulsaron declaraciones de **Manuel Honorio Fernando Wladimiro Cuadra** (Jefe SICAR), en las que expuso que el grupo operativo especial que él tenía bajo su mando funcionaba en el Retén Dupont, que era dependiente de la Primera Comisaría, cuyo Mayor Comisario era Raúl Aránguiz Muñoz. Consultado por un detenido de nombre Ricardo Pérez, señaló que éste tenía explosivos y planeaba atentar contra la planta de explosivos Dupont, y el Fiscal Militar que era un

Mayor de apellido Arriagada Pazmiño le ordenó practicar los interrogatorios a esta persona, quien habría confesado donde los tenía enterrado hasta donde concurren en una camioneta Chevrolet modelo C-10 color amarillo que les facilitaba la Compañía Minera de Chuquicamata, y preguntado -entre otras cosas- porqué se saltó los procedimientos policiales que lo obligaban a tomarle previamente una declaración extrajudicial, señaló que "estaban trabajando contra el tiempo, pues habían más detenidos que interrogar". l) A fojas 3196 declaró el ex funcionario Juan Adán Guenul Guenul, exponiendo que en el año 1973 trabajaba en la Primera Comisaría de Calama y en ese lugar le correspondía hacer guardias y una vez ingresó al libro de detenidos a varias personas que estaban en el cuartel y fue reprendido por el Teniente Wladimiro Cuadra, porque él decidía si ingresaban a no debido a que ellos tomaron libros de las sedes políticas y chequeaban si los detenidos figuraban en esos libros primero. Añadió que veía a los detenidos políticos golpeados y pidiendo clamor. Señaló que como el cuartel era chico y seguramente porque la gente gritaba cuando los torturaban, lo que no era un secreto, los trasladaron a otro lugar más alejado y dentro de los interrogatorios que logró escuchar cuando pasaban estos funcionarios del grupo de Wladimiro Cuadra por los calabozos, preguntaban a los detenidos donde tenían escondidas las armas o cuál era su misión, se escuchaba que decían "vayan a dejarlo al Río Loa", ese era un Retén pequeño, con un calabozo, una sala, un dormitorio y las caballerizas. Agregó que ese grupo se instaló completamente en noviembre o diciembre de 1973, puede que antes llevaran detenidos. ll) También se agregó a fojas 3894 una copia de un parte policial N°3 de 26 de octubre de 1973, que aparece firmado por el funcionario Juan Espejo del Retén Río Loa o Dupont, dirigido a la Fiscalía Militar de Carabineros de Calama, donde se refiere que pasan detenidos los hermanos Santiago y José Espoz Zelaya, por activistas, indicándose que la detención por el Teniente Manuel Wladimiro Cuadra, Vice 1° Hugo del C. Olivares, cabo Sergio Concha Concha y Carabinero José Olivares Villegas; el visto bueno de ese oficio lo efectuó el Mayor de Carabineros y Comisario Raúl Aránguiz Muñoz. m) Relacionado con el caso de Ricardo Pérez Cárdenas, se agregó a fojas 3256 una declaración jurada de su madre doña Francisca Filomena Cárdenas Iriarte, compulsada también de la causa Rol N°2.182-98 "Ricardo Pérez", quien expresó que a su hijo lo detuvieron el 2 de octubre de 1973 por funcionarios de Carabineros a cargo del Teniente Vladimir, lo acompañaban dos cabos, uno de apellido Lara y no supo del paradero de su hijo hasta el día 4 de octubre de 1973, cuando lo vio en el Retén Dupont, aproximadamente a las 14 horas de ese día. Añadió que Ricardo fue duramente golpeado y flagelado, y según testigos presenciales lo hacían correr, él

se caía y los caballos pasaban por encima, en un corral o caballeriza que existía en el recinto de la Dupont; más adelante en su relato manifestó que el día 5 de octubre, a las 10 horas, lo llevaron a la Comisaría, donde lo hicieron firmar dos papeles, ese fue el último día que vio con vida a su hijo, porque ese día aproximadamente a las 17,45 horas fue fusilado en la misma Comisaría o en el Retén Dupont.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, respecto de esta acápite debe traer a colación lo expuesto por doña **Edith Hortensia Castro Olave**, quien a fojas 3174 y siguientes, junto con dar testimonio de su detención y de don Mario Argüelles Toro, el 1 o 2 de octubre de 1973, donde refirió que a ella la tuvieron detenida hasta el 9 de octubre en la Primera Comisaría, donde pudo ver a doña Grimilda Sánchez, quien le contó que había estado detenida por 13 días en el Reten de la Dupont, y la vio maltratada, y éste le contó que había sido torturada; asimismo narró que se enteró por un funcionario de Carabineros que a Mario Argüelles lo habían llevado al Reten Dupont, quien le dijo que no se preocupara porque en ese lugar sólo "torturaban". Además indicó que cuando estaba en la cárcel pública tomó contacto y conversó con detenidos que habían llegado de la Dupont, entre los que nombra, se encontraba don Domingo Mamani, quien según las publicaciones del Mercurio de Calama, formaría parte del grupo de detenidos que, según ese diario, pretendían realizar atentados explosivos junto con las víctimas de esta causa. También lo señalado por doña Violeta del Rosario Berríos Águila, según ya se ha mencionado precedentemente quien vio en ese lugar durante dos días consecutivos a don Andrés Rojas Marambio, la última vez el 6 de octubre de 1973 cuando lo iban sacando del Retén y la cara era "una masa humana", tanto es así que al hablarlo le tuvo que preguntar quién era ella.

TRIGÉSIMO: Que con el mérito de la sentencia agregada a fojas 3.305 y siguientes, de la causa Rol N° 2182-1998 denominada "Episodio Ricardo Pérez" donde consta que su homicidio calificado se cometió en la ciudad de Calama el 5 de octubre de 1973, en la que actuó la unidad operativa de inteligencia de Carabineros a cargo del Teniente Manuel Wladimiro Cuadra, creada con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 por el Gobernador y Juez Militar en estado de sitio Eugenio Rivera Desgroux y el Prefecto de Carabineros. A Ricardo Pérez lo detuvieron el 30 de septiembre de 1973 y fue "inhumanamente" interrogado en el Retén Dupont, acerca de un presunto armamento oculto para luego acribillarlo con 22 impactos de proyectil que recibió en su cuerpo.

De acuerdo a lo señalado en el motivo décimo números 7 y 8 de ese fallo, se consideró para establecer los hechos las declaraciones de la cónyuge y de la madre de la víctima, doña María Irmina Araya Tapia, quien fue testigo de su detención

en horas de la tarde del 30 de septiembre de 1973, y además lo vio el 4 de octubre de 1973 aproximadamente a las 12,00 horas, cuando fue trasladado del Retén Dupont hasta la Primera Comisaría, a quien los Carabineros le señalaron que sería dejado en libertad el 5 de octubre a las 16,00 horas. Doña Francisca Filomena Cárdenas Iriarte, madre de Ricardo Pérez, indicó que el 3 de octubre de 1973 lo vio en el Retén Dupont o Río Loa, y el día 5 de octubre de ese año lo llevaron nuevamente a la Primera Comisaría a las 10,00 horas, y fue en esa oportunidad la última vez que lo vio con vida, da cuenta que su hijo presentaba 21 balas en su cuerpo, piernas y brazos quebrados, la cara cortada y su cuerpo mutilado.

Los hechos que se establecieron en la sentencia aludida en los acápites precedentes hay que relacionarlos, necesariamente, con la prensa de la época, particularmente con las publicaciones efectuadas en el diario "El Mercurio de Calama" los días siguientes al asesinato de Ricardo Pérez. En efecto, según las copias agregadas entre otras a fojas 3462 y siguientes, donde se relaciona directamente a Ricardo Pérez Cárdenas, (aunque allí se menciona como Ricardo Pérez Marambio, error que puede deberse por el parentesco que se le atribuía con Andrés Rojas Marambio), con un "plan terrorista en el Loa". En esa publicación correspondiente al día 8 de octubre de 1973, se indica que personal del servicio de inteligencia de carabineros de Calama logró desbaratar plan terrorista de amplias proyecciones, en una acción de peligrosos contornos, en la cual murió uno de los extremistas, Ricardo Pérez Marambio, alias " el toro", al intentar asesinar a uno de los policías; enseguida se agrega que los planes figuraban además de Pérez Marambio, un tal Rojas Marambio, chofer de la ambulancia del Hospital Carlos Cisternas; Manuel Gallardo Gallardo, Santiago Valdivia, ex presidente del sindicato profesional de la Compañía Nacional de Explosivos, Río Loa, peligroso delincuente (SIC); Ricardo Pérez, socialista, Domingo Mamani, ex presidente del sindicato profesional de la compañía nacional de explosivos Río Loa y Luis Busch. Además 30 hombres, prometidos por Calixto Pacheco, líder del movimiento marxista-leninista de El Loa, armados con metralletas que iba a llegar a Antofagasta. Continúa la publicación señalando que el proyecto incluía volar tanques de petróleo de la compañía de cobre Chuquicamata, misión que cumpliría Rojas Marambio; destrucción de la subestación eléctrica ubicada en el camino Calama-Chuquicamata junto a otros objetivos; en la elaboración del plan mencionan papeles y a Rojas y como autor intelectual a Luis Busch Morales, "boliviano es guerrillero en su país y asilado en Chile desde hacía mucho tiempo, el elemento en extremo peligroso". En cuanto a los explosivos señala que eran robados en la planta de Río Loa de la

Compañía Nacional de Explosivos por Domingo Mamani y Santiago Valdivia, ex dirigentes sindicales esa empresa, según se desprende de las declaraciones de Manuel Gallardo y por las investigaciones realizadas por el SICAR, se refiere enseguida, que "agregó el extremista a la policía que el contacto era el boliviano Busch, a quien debía entregar posteriormente los explosivos. En otro subtítulo denominado las granadas, se expresa que Pérez Marambio le había declarado a la Policía un día antes de su muerte que la granada de la había recibido de Hernán Moreno. En otro subtítulo denominado " a la cárcel "se señala que "todos los implicados en este proyecto de masacrar, con excepción de Pérez Marambio, fueron encarcelados el viernes pasado y el sábado debieron declarar y dar cuenta de sus actuaciones ante la fiscalía militar. Posteriormente será procesado por un consejo de guerra".

De esas informaciones efectuadas por el diario "El Mercurio" de Calama, fuente oficial del Régimen Militar, tanto es así que allí se publicaban noticias sin siquiera indicar la fuente, salvo cuando se mencionaba algún bando, los que por lo demás también eran publicados en ese medio, además de otras publicaciones que se mencionarán más adelante, se desprende que aparecían vinculados a Ricardo Pérez, entre otros, las víctimas de este proceso Busch, Rojas y Valdivia, por lo que lo expresado por Manuel Wladimiro Cuadra en cuanto a que estaba en contra del tiempo porque debían "interrogar" a otras personas debe necesariamente relacionarse con las torturas que estaban infligiendo al menos a Rojas Marambio, lo que pudo apreciar la testigo Violeta Berríos, cuando concurreó el 6 de octubre de 1973 al Retén Dupont a dejarle comida a su pareja don Mario Arguellez Toro (asesinado por la Caravana de la Muerte de Calama), observando a su llegada, que dos Carabineros iban sacando a Marambio, y que le preguntó "Chato qué te pasó", observando que su cara era una masa humana, sin lograr distinguir sus ojos y que estaba muy hinchado, a lo que Marambio le contesta diciendo: "Quién es", respondiendo ella "soy yo Violeta". Agregó que luego lo subieron acostado a una camioneta, en su parte trasera y que tomó rumbo hacia Calama. Lo mismo se constata de los dichos de los otros testigos presenciales Ruperto Lara y Joel Ortega Valenzuela, quienes vieron a Rojas Marambio y a Valdivia en el Retén Río Loa o Dupont. A rojas Marambio lo llevaron el día 6 de octubre al Regimiento porque en ese lugar lo vieron funcionarios militares, como se indicará más adelante, y a Valdivia lo llevaron el día 5 de octubre al Regimiento y de ahí a la Cárcel, desde donde los sacaron alrededor de las 15,00 horas, según pudo observar su cónyuge Silvia Tapia Gallardo.

Según lo expresado por su cónyuge Valdivia fue llevado a la Cárcel el 5 de octubre, misma fecha en que habrían llevado a Luis Busch, desde donde los sacaron el día 6 para llevarlos al Regimiento, y según lo expresado por doña Violeta Berríos, a Rojas Marambio lo llevaron directamente al Regimiento, porque nadie lo divisa en la Cárcel, lo que se puede inducir que fue sacado en la tarde de ese día desde el Reten Dupont, según la testigo presencial antes mencionada, en el Regimiento se tomó la determinación de asesinarlos.

En resumen, existe constancia a Francisco Valdivia lo detuvieron en la madrugada del 4 de octubre de 1973, mismo día que habrían detenido o se presentó voluntariamente Andrés Rojas Marambio, y Luis Busch fue detenido el 5 de octubre, estos datos serán útiles para establecer la existencia de una investigación y de un presunto Consejo de Guerra.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que de esta manera se demostró con la prueba expuesta y analizada que el grupo denominado SICAR de Carabineros, participó en la detención y tortura de las tres víctimas de este proceso, quienes se habrían encargado de una investigación, según explicaba el Régimen a través de su diario portavoz, sobre un plan terrorista en el Loa. En este proceso no procede cuestionar la veracidad de esas investigaciones, pero basta leer esas informaciones, en el diario tantas veces citado, para darse cuenta de lo absurda que resultaba la creatividad de los organismos de represión y de las autoridades militares de la época, porque para nadie es un misterio que en esa época Calama estaba copada por un gran contingente Militar reunido en el Regimiento N°15 de Calama, sin embargo, en la noticia que se ha transcrito previamente, se describe con gran fantasía una serie de actos que pretendían, en último término, atacar a los Carabineros después de sabotear obras de infraestructuras, que estaban completamente custodiada y franqueadas por los militares, lamentablemente el oportunismo y el colaboracionismo con el aniquilamiento de los que se creían enemigos de las nuevas fuerzas imperantes, hizo desaparecer todo atisbo de lógica y ética periodística.

SOBRE LA CIRCUNSTANCIA DE HABER EXISTIDO O NO UN CONSEJO DE GUERRA QUE LOS HABRÍA CONDENADO A MUERTE.

TRIGÉSIMO SEGUNDO Que, **Eugenio Rivera Desgroux** (fallecido antes de la acusación y sobreseída parcial y definitivamente la causa a su respecto) de quien a fojas 28 se agregó copia autorizada de la declaración prestada en causa Rol N° 2182-98 Episodio Ricardo Pérez, y en este proceso depuso a fojas 132, 139, 2378, y en careos de fojas 135 vta., 136 vta., 137 vta. y 2379; allí expuso que en septiembre de 1973 ostentaba el grado de Coronel de Ejército y era el Comandante del Regimiento de Infantería Motorizado N° 15 Calama. Con

posterioridad al 11 de septiembre de ese año asumió como Gobernador Militar (Jefe de Zona en Estado de Sitio) y Juez Militar del departamento de El Loa. Respecto de la situación ocurrida con el señor Pérez, dice que no recuerda ese hecho, que parece que no fue informado, pues por la gravedad de esos hechos sin duda que lo recordaría, pero piensa que puede estar relacionado con un Consejo de Guerra que ordenó instruir con ocasión de un robo de explosivos ocurrido en la empresa de explosivos ENAEX en que se condenó a la pena de muerte a cuatro personas (un ingeniero de nacionalidad boliviana de apellido Bush, a Grimilda Sánchez, que era su conviviente y que recibió pena de extrañamiento, al dirigente sindical de apellido Valdivia y el chofer de ambulancia del Hospital de Calama de apellidos Rojas Marambio), proceso que llevó uno de sus fiscales, no recuerda cuál, pero puede decir que se trataba del Teniente Coronel Óscar Figueroa Márquez y el Mayor de Carabineros Eduardo Arriagada Pasmiño. Cree que pueden estar relacionados, porque se debe a que precisamente fue personal de Carabineros del Retén Dupont que colindaba con ENAEX quien primero investigó esta situación, y según le informaron, el señor Pérez habría estado detenido en ese retén por personal de Carabineros. Agrega desconocer si el retén Dupont fue utilizado como centro de detención por Carabineros, pero tiene la idea que no, pues según él, todos los detenidos eran trasladados a la cárcel de Calama. En relación al intento de sabotaje de la Planta de Explosivos Río Loa, ocurrida a fines del mes de septiembre de 1973, con gran reserva, por orden del administrador de la Planta Río Loa, ingeniero don Néstor González Parada y el Jefe de Seguridad de la Planta, el ingeniero don Eduardo Chacón, le informaron que estaban con total reserva investigando el indicio de robo de dinamita en la Planta. Ante esta situación, que fue también informada a Carabineros, se aumentó el Control de Carreteras, ubicado frente a la puerta de acceso de la Planta de Explosivos, y que incluso la estrictez fue tal, que revisaban la ambulancia del Hospital, que viajaba en distintas oportunidades fuera de la ciudad, y en una oportunidad, cuya fecha no recuerda exactamente, mientras volvía desde Sierra Gorda a Calama con un enfermo y conducida por el conductor de siempre, don Andrés Rojas Marambio, al realizar el control por parte de Carabineros, encontraron bajo el enfermo, un cajón de dinamita. Agrega que el Fiscal de Carabineros, Mayor Eduardo Arriagada Pasmiño, que ya había sido informado del posible robo de dinamita en la Planta, inició el proceso correspondiente, al término del cual propuso al Juez Militar que se constituyera un Consejo de Guerra para realizar el proceso. Añade que como resultado de la investigación, se le formularon cargos a cuatro personas, un Ingeniero Agrónomo boliviano, señor Busch; al Dirigente Sindical de la Planta de Enaex de apellido

Valdivia; al conductor de la ambulancia, un señor de apellido Rojas, y a la señora Grimilda Sánchez, considerada pareja del señor Busch. Terminada la investigación del Mayor Arriagada, indica que se le solicitó el nombramiento o constitución de un Consejo de Guerra, el cual aprobó de inmediato, sin recordar los nombres de los integrantes, pero que podrían haber sido el Mayor Ravest, el Mayor Robles, el Mayor Aracena, el capitán Santander, y otro oficial de igual graduación que no recuerda su nombre, que hacían un total de 5 oficiales, más los dos Fiscales, Teniente Coronel Óscar Figueroa Márquez y el Mayor de Carabineros Eduardo Arriagada Pasmiño, el secretario de la Fiscalía Teniente Álvaro Romero Reyes, el Suboficial Mayor Tomás Jerónimo Rojo y la dactilógrafa señorita Rosalba, además del Abogado asesor jurídico Claudio Messina Schulz. Refiere que terminado el Consejo de Guerra, del cual no recuerda fecha de celebración, pero que fue a fines del mes de septiembre, se le propuso a él como Juez Militar, la pena de muerte para los cuatro implicados. Después de estudiar el proceso, determinó aceptar la pena para los tres varones, pero no para la señora Grimilda Sánchez, para quien determinó cadena perpetua. Manifiesta que estando presente los tres varones en el Consejo de Guerra, concurrió a hablar con los condenados, porque conocía bastante al señor Valdivia, por su permanente preocupación por la Planta de Explosivos, y al señor Rojas Marambio, chofer de la ambulancia, que diariamente concurría al Regimiento a buscar el pan que el Regimiento vendía al Hospital de Calama, y que en muchas circunstancias había conversado con él largamente. Indica que antes de firmar la condena, habló con los tres para que le dieran alguna explicación y saber si pensándolo mejor, ellos no habrían cometido este intento de sabotaje, a lo cual Valdivia y Rojas, le insistieron en que era su responsabilidad ejecutar este atentado para paralizar la producción minera de Chile, porque era la única que producía explosivos en Chile y ellos se oponían al Golpe Militar, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Respecto a los condenados a muerte y firmada la sentencia por su parte, se dispuso que el Fiscal Militar, Teniente Coronel Figueroa, dispusiera la ejecución conforme a la legislación vigente. Añade que personalmente no asistió a estos trámites y que solo recibió la información de parte del fiscal militar que se habían cumplido las disposiciones legales y que los restos habían sido entregados a los familiares. En relación con la investigación desarrollada contra las tres personas, esto es, los procesos que se hicieron, refiere que constaban en tomos escritos de documentos, integrados por las diligencias realizadas y las declaraciones que llevaron al Fiscal a formarse la convicción de la participación de las personas en los hechos. Indica que estos antecedentes los estudió para aprobar, modificar o

rechazar la proposición del Consejo de Guerra, lo que modificó única y exclusivamente en el caso de la señora Grimilda, y en lo demás confirmó la proposición del Consejo. Explica que dichos procesos volvían a la Fiscalía y quedaban en el archivo, salvo aquellos que por razones especiales se mandaban al Juez Militar, pero le consta que existieron y estuvieron en sus manos. Aclara que solamente 15 procesos se remitieron a Santiago y no fueron ubicados en la Fiscalía, pero que todos los demás constan o deberían estar archivados en ese lugar. Luego rectificó que el abogado Claudio Messina Schulz no era un asesor, sino el defensor de los detenidos. Además, aclara que estos procesos eran en tiempo de guerra, por lo que eran breves y sumarios, y el Juez Militar tenía algunas facultades, y que es por eso que le cambió la pena a la señora Grimilda Sánchez, quien había sido detenida por el mismo delito. Añade que al Fiscal de Carabineros, don Osvaldo Arriagada Pasmíño, que ya estaba investigando en forma reservada, le encargó que siguiera con la investigación, que se dio inicio con el decreto de nombramiento, y al Fiscal Militar, don Óscar Figueroa Márquez, le encargó que cumpliera la sentencia. Agrega que el Consejo de Guerra, en el cual no participó ni presidió, se realizó los primeros días de octubre de 1973, cuyo proceso no duró más de 10 días, y que por estar en tiempo de guerra, el Fiscal era don Osvaldo Arriagada Pasmíño, pero que también estuvo presente en este, el Fiscal de Ejército, don Oscar Figueroa Márquez. Indica que el que presidió el Consejo tiene que haber sido el más antiguo de los mayores que se encontraban presentes. Explica que como Juez Militar, disponía el Fiscal que investigaba el caso. A raíz de eso, determinaba el Consejo de Guerra y quienes lo componían, quienes a su vez proponían la sentencia y él tenía que aprobar, modificar o rechazar las penas propuestas. No tenía contacto con los detenidos, pero que en este caso especial, como conocía a los señores Valdivia y Rojas, habló con ellos para ver si le daban una explicación al respecto. Al señor Busch lo vio, pero no habló con él. A la señora Grimilda Sánchez no la vio, porque no estaba presente en ese momento. Agrega que la orden de detención respecto de las cuatro personas la dio el Fiscal de Carabineros, señor Osvaldo Arriagada Pasmíño.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que al haber sido mencionado como Secretario del Consejo de Guerra, a fojas 3351, 3669, 3676 y 4430 vuelta declaró **Álvaro Alonso Romero Reyes**, señalando que en 1973 él era oficial y en marzo de 1973 lo trasladaron desde Iquique al Regimiento Militar de Calama como Subteniente de Telecomunicaciones, siendo sus funciones principalmente mantener enlaces en el Regimiento y sistema de escuchas de nuestros países vecinos. Indicó recordar el fusilamiento de las 3 personas, ya que tuvo cierta connotación, siendo una de las personas fusiladas el chofer

de la ambulancia que iba a buscar el pan a la panadería del Regimiento. Denunciaban que estos habían intentado ingresar a la fábrica de explosivos de la Dupont. Refiere que él no participó en ese Consejo de Guerra, pero que sí existió ese Consejo. Afirma que esta fue la primera y única vez en que se condenó a muerte a personas en el Regimiento. El Coronel Eugenio Rivera señaló posteriormente que había ofrecido a estas personas conmutar su pena de muerte por la de cárcel, pero que estas personas se habrían negado y señalaron que si los ponían nuevamente en libertad, volverían a intentarlo. Recuerda que Born Pineda fue el encargado del pelotón de fusilamiento de estas tres personas, lo que bien comentado porque Born anduvo muy afligido por muchos días, de hecho se decía que habló con el Comandante para que le quitara esa responsabilidad, pero el Comandante se lo negó. Indica que el acta del Consejo de Guerra podría encontrarse en la Primera División de Ejército, porque, por conducto regular, correspondía enviar los antecedentes al General Lagos. Señala que el Comandante Eugenio Rivera era bien claro en sus conceptos, y que si no hubiese tenido antecedentes, él no habría aprobado un Consejo de Guerra con condenas de muerte. Señala que él les hubiese cambiado la pena a estos señores si no hubiese estado convencido de los hechos, por los antecedentes suministrados por el Consejo de Guerra. Agrega que podría haber participado en otros Consejos de Guerra, no está seguro, pero que en éste, específicamente, no. Dice que no es efectivo lo que señala Rosalba Garmendia Flores en sus declaraciones. Explica que el Coronel Eugenio Rivera determinaba a los integrantes de los Consejos de Guerra y comunicaba la integración de forma verbal. Agrega que Rosalba Garmendia era la única dactilógrafa que existía en el Regimiento, por tanto ella integraba todos los Consejos de Guerra.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que a fojas a fojas 278, consta declaración de **Jerónimo Tomás Rojo** efectuada en la causa Rol N° 140-89 del Primer Juzgado Militar de Antofagasta, causa iniciada por homicidio y secuestro de Fernando Roberto Ramírez Sánchez, hijo de Grimilda Sánchez Gómez, donde señala que efectivamente por el espacio de tres o cuatro años se desempeñó como dactilógrafo en la Fiscalía Militar de Ejército, cuyas oficinas a la fecha de los hechos (19 de octubre de 1973) se encontraba en la Comandancia del Regimiento Calama. Agrega que la Fiscalía Militar, en la cual él cumplía funciones de dactilógrafo, conocía de infracciones al artículo de reclutamiento, desertiones, robos, que se producían dentro de la Unidad, o sea, cosas propias del servicio interno. Hace hincapié en que Carabineros también contaba con su Fiscalía. Añade no ser cierto que era Secretario de la Fiscalía, por estar bastante lejos el que haya podido cumplir con tal función, que estaba expresamente

reservada para el Fiscal, el grado de Mayor o Comandante, y el de Secretario el de Teniente, teniendo a la época solo el grado de Suboficial de tropa.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que por su parte declaró policialmente **Oswaldo Arriagada Pazmiño** (fallecido antes de la acusación y sobreseída parcial y definitivamente la causa a su respecto), quien además depuso en declaraciones de fojas 134, 142, 1329, 1400, y en careo de fojas 135 vta., manifestando haber ejercido funciones desde el año 1971 a 1973, en la Segunda Comisaría de Chuquicamata, como Comisario y que ascendió a Teniente Coronel. Agrega que el comandante del Regimiento de Calama para los sucesos del 11 de septiembre de 1973, era el Coronel Eugenio Rivera Desgroux, quien lo nombró como Fiscal Militar de Carabineros, para instruir procesos por infracciones a las disposiciones de comercio, que consisten básicamente en acaparamiento de mercadería, venta a mayor precio, mercado negro y negativa de venta, todas faltas, pero no instruía procesos criminales, pues no fue nombrado para eso, ya que esas materias estaban a cargo del Fiscal Militar del Ejército. En virtud de lo anterior, refiere que nada podría declarar respecto a la muerte de Andrés Rojas Marambio, Francisco Valdivia Valdivia y Luis Busch Morales. Afirmar que no realizó ninguna investigación al respecto y tampoco conocía a esas personas, por lo que nada podía declarar y repite que los procesos criminales eran investigados por el Fiscal Militar del Ejército. Finalmente, indica que el Prefecto de Carabineros de la época era Abel Galleguillos Araya y el Subprefecto, de quien no recuerda datos, fue llamado a retiro y le correspondió asumir la Subrogancia de la Subprefectura de Calama, esto en los días posteriores al 11 de septiembre. Producto de ello y de sus constantes viajes a la ciudad de Calama, específicamente a revisar documentación, se enteró de la designación de un grupo de carabineros de Calama, de dotación de la Primera Comisaría de Calama, quienes fueron agregados al Ejército, pero que ignora mayores antecedentes. Agrega que efectivamente existía un retén Dupont, ubicado a la salida de Calama, en las afueras de la Planta de Enaex, no recuerda el nombre del funcionario que estaba a cargo de ese Retén, pero que dependía de la Primera Comisaría de Calama, al mando del Comisario Mayor Juan Salazar Lantery. En otras declaraciones indicó que nunca tuvo conocimiento sobre robo de explosivos en Dupont, que él se encontraba en Chuquicamata, así que no le correspondía esa sección. Afirmó no tener conocimiento de que hubiera Consejos de Guerra. A fojas 1329, se acompañó declaración judicial efectuada en causa Rol N° 2182-98 Episodio Ricardo Pérez Cárdenas, a través de la cual señala que siendo él, Comisario de Chuquicamata, y su superior el Prefecto de Calama, señor Galleguillos, y estando como jefe de plaza el Coronel Eugenio Rivera Desgroux; él fue designado

por el Juzgado Militar de Calama, como oficial investigador de una explosión producida en la fábrica de explosivos Dupont, sucedida en octubre de 1973 y que a él se le envió un parte con varios detenidos que estaban en la Cárcel de Calama, a quienes interrogó, determinó sus responsabilidades y participación en los hechos, notificó a los detenidos del cierre de la investigación, recibió los descargos, y todos los antecedentes se los envió al Regimiento de Calama donde estaba el Juez Militar, que era el mismo Coronel Rivera Desgroux, para que siguieran con el Plenario de la causa, no volviendo él a saber del proceso, ni teniendo ninguna participación posterior. Refiere ignorar si se celebró un Consejo de Guerra, como asimismo si dictaron condenas a los implicados. A fojas 1400, declaró policialmente a raíz de los dichos de su declaración de fojas 1329, señalando que no se le designó como oficial investigador en una explosión que se produjo en la planta de explosivos Dupont, sino que simplemente el Prefecto de la época, don Abel Galleguillos, le ordenó que interrogara a los trabajadores y para ello se constituyó en el Retén Dupont, donde interrogó a varios empleados de la planta, que eran como dos o tres, y que su interrogación fue de manera verbal, sin dejar registro escrito de aquello. Aclara que las personas no estaban detenidas en el Retén, sino que solamente fueron citados para declarar y después de tomar sus declaraciones verbales, le entregó los antecedentes, también de manera verbal, al prefecto Galleguillos. Añade que no se trató de una investigación, solamente recabó antecedentes que entregó al Prefecto. A fojas 144, 133, 2360 ratificada a fojas 2565, a fojas 3902, y en careo de fojas 136 vta., declaró policialmente **Óscar Figueroa Márquez** (fallecido antes de la acusación y sobreseída parcial y definitivamente la causa a su respecto) manifestando que fue destinado en enero del año 1973 al Regimiento de Infantería Reforzado N° 15 a la ciudad de Calama, como Segundo Comandante y Fiscal Militar no letrado, donde estuvo por un año. Explica que su función como Fiscal Militar no letrado, significaba que hacía todas las investigaciones sumarias de todos aquellos delitos reñidos con la justicia militar, salvo algunos casos que fueron presentados por el Fiscal de Carabineros, de quien no recuerda nombre. Añade que el Comandante del Regimiento era el Coronel Eugenio Rivera Desgroux, y que pocos días después del 11, la junta militar de gobierno decretó la conformación de los Tribunales militares en tiempo de guerra, que a partir de ese momento todas las personas que cometían delitos eran sancionadas severamente de acuerdo al Código de Justicia Militar en tiempo de guerra y que para ello se designaba a un Fiscal investigador que en la mayoría de los casos fue él, y luego el Comandante designaba la conformación de un Consejo de Guerra, a quien se le proporcionaban los antecedentes de

la investigación y ellos proponían una sanción al Comandante, quien podía aprobarla o rechazarla. En relación a la muerte de Andrés Rojas Marambio, Francisco Valdivia Valdivia y Luis Busch morales, indica que dio la autorización para su sepultación en el cementerio, previa vista del certificado de defunción, firmado por el médico del Ejército, don Luis Rojas Delzo (según el certificado de defunción éstos fueron extendidos el 8 de octubre de 1973). A partir de esos antecedentes, se enteró que personal de Carabineros habían detenido a estas personas transportando una cantidad de explosivos en la ambulancia del Hospital, que conducía uno de ellos y que Carabineros de esa Zona realizó la investigación completa de los hechos, en la cual Carabineros de la Zona, estableció que el transporte de estos explosivos era para volar Enaex (planta de explosivos). Refiere que todos estos antecedentes y la investigación completa la realizó el Jefe o el Fiscal de Carabineros, y que fueron presentados al coronel Rivera, quien dispuso la conformación del Consejo de Guerra. Reitero que a él no le correspondió investigar estos hechos y sólo se limitó a entregar o firmar las correspondientes autorizaciones para sepultarlos en el Cementerio de Calama, no recordando a quién le correspondió llevar a cabo las sepultaciones. Tampoco recuerda quién o quiénes fueron las personas que materializaron el fusilamiento y en qué lugar se llevó a cabo, por lo que nada podría declarar al respecto, ni sobre la conformación del Consejo de Guerra que propuso el fusilamiento. No obstante, señala que podría referirse a la estructura de un Consejo, y que éste contaba normalmente con un presidente con el grado de mayor o superior, luego venían los miembros del consejo, normalmente tres personas con el grado de capitán o superior y un secretario que podía ser un Teniente. Repite que no recuerda el nombre de los integrantes del Consejo de Guerra, que se dispuso por parte del Comandante Rivera para este caso concreto. Agregó que el cargo que se les imputó a las víctimas fue que ellos querían volar la planta de Enaex, y que esto fue el 6 de octubre de 1973. Añade que Eugenio Rivera Desgroux, a los tres días, les hizo el comentario de lo que había pasado. Explica que la ejecución suya fue cumplir lo que había dispuesto la Junta, en el sentido que tenía que inhumarlos en el Cementerio y preocuparse de que hubiera un Certificado Médico y de Defunción. Refiere que no les entregaron los cadáveres a las familias. Explica que solo supo del fusilamiento el mismo día, ya que se comentó en todo el Regimiento, aparte del hecho de la autorización de la sepultación de esas tres personas que llevó a cabo. Respecto al nombre de Claudio Messina Schulz, señala que le suena, pero ignora quién sea y cuál es su oficio o profesión, no recuerda que haya tenido alguna participación en los hechos que se investigan. A fojas 3902, agregó que quien vio todo esto era el Fiscal de

Carabineros, que había involucrado un boliviano y con una orden del juez militar, él le propuso el nombre del Teniente y al mismo tiempo le propuso que un Mayor de infantería supervigilara el inicio y término para que los cadáveres fueran entregados a quien corresponda, a los familiares. Añade que los conscriptos estaban preocupados porque sus compañeros debían fusilar a esas personas. Refiere que él propuso a Born Pineda para que armara el pelotón de fusilamiento. Explica que no tuvo nada que ver en este Consejo en particular, que todo esto lo vio el Fiscal de Carabineros, y que todo comenzó con la patrulla que estaba viendo el tema de los explosivos. No sabe el apellido del Fiscal de Carabineros, que podría ser Arriagada Pazmiño. Añade que había abogados defensores en los Consejos de Guerra, además de los futuros condenados y quien los acusa, él en algunos casos, cumpliendo su rol de Fiscal Militar. Afirma que los únicos en la situación de condena de muerte fueron los tres fusilados. Señala que el Juez Militar los condenaba y se ejecutaban, pero que no era todo tan rápido, se demoraban dos o cuatro días más o menos. Vuelve a indicar que él propuso a Born para que cumpliera la sentencia, que se lo propuso a Rivera porque había que destinar a un Teniente y Rivera podía haber designado a otro. Agrega que el Comandante del Pelotón y un médico debían estar en los fusilamientos, y que en caso que quedara vivo, el Comandante daba el tiro de gracia, pero no sabe si eso pasó a alguna vez. No recuerda a algún sacerdote participando. Cree que los integrantes del pelotón de fusilamiento eran conscriptos, y que éstos estaban muy preocupados porque sus compañeros iban a matar. Añade no recordar que Born le haya dicho que no quería hacerlo.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que fojas 2408,2639, 3117 y 4431, **Rosalba del Carmen Garmendia Flores**, depuso indicando que en el año 1972, mientras se encontraba en la ciudad de Calama, por intermedio de conocidos se enteró que el Ejército necesitaba personal para desempeñarse como Dactilógrafa en la Fiscalía, quedando contratada de inmediato e integrándose a sus nuevas labores. En esos años, su jefe directo era el Suboficial Jerónimo Tomás Rojo, eran los dos funcionarios fijos, pues a los fiscales los rotaban permanentemente, al igual que a los Secretarios. Explica que su función principal era como dactilógrafa, además de llevar los casos por desertión e Infracción a la Ley de Reclutamiento y en algunas ocasiones se tramitaban otros casos, como accidentes o responsabilidad por delitos del personal. Hace presente que la persona encargada de tomar declaraciones y llevar los procesos era el Suboficial Rojo, quien tenía bastante experiencia trabajando en la Fiscalía. Añade que para los sucesos del 11 de septiembre de 1973 no tuvo mucha injerencia, pues las causas que se llevaron en la Fiscalía eran tramitadas por personal de Inteligencia y los Suboficiales Rojo y Von Shackman, pues

eran los funcionarios que tenían más experiencia en estas materias. Agrega que el Fiscal Militar era el Segundo Comandante del Regimiento, en ese entonces, Óscar Figueroa Márquez. Ellos cumplían sus funciones en las mismas dependencias de la Comandancia del Regimiento de Calama, donde había una pequeña oficina que compartía con el Suboficial Rojo, en ese lugar llevaban los procesos y cuando requerían la presencia del Fiscal o el Secretario, concurrían a sus respectivas oficinas en la Segunda Comandancia, para sacar las firmas pertinentes. Recuerda que los días posteriores al 11 de septiembre, se decretó acuartelamiento de todo el personal y en el caso de ella, todos los días regresaba a su domicilio, entraba a su trabajo a las 08:00 horas de la mañana, con un horario de colación de 12:30 a 14:30 horas, para luego finalizar el horario a las 18:00 horas. Con respecto a los procesos que se tramitaron en la Fiscalía Militar, relacionados con temas políticos, indica que los encargados eran los Suboficiales Rojo y Von Schakman, junto a personal de Inteligencia, y que para tal efecto, ocupaban unas dependencias ubicadas en el subterráneo de la misma Comandancia del Regimiento y en algunas ocasiones se le ordenó llevar a la Cárcel a personas detenidas, no podría asegurar si se trataba de detenidos por temas políticos, pues por lo general trasladaban a los desertores. Hace presente que desconocía completamente el tipo de interrogaciones que se practicaba con la gente y en algunas ocasiones se enteró de las sentencias que se emitieron, a saber, algunos extrañamientos a la Isla Dawson. En relación al fusilamiento Andrés Rojas Marambio, Luis Busch Morales y Francisco Valdivia Valdivia, escuchó comentarios de que estas tres personas estaban tramando hacer volar Calama, pues al parecer alguno de ellos era trabajador de la Planta de Explosivos Dupont. Añade que estas personas fueron sometidas a un Consejo de Guerra integrado por altos oficiales del Regimiento de Calama y un abogado civil, al parecer de apellido Mardones, de lo que no está segura. Para tal efecto, fueron llevados a una sala de conferencias ubicada en el segundo piso y allí se celebró el Consejo cuyos integrantes conoció en ese entonces, pero que hoy no recuerda. Refiere que todos fueron condenados a la pena de muerte, pero antes de ser fusilados fueron llevados a dependencias de la Fiscalía Militar para dejar constancia de su último deseo, recordando que Luis Busch pidió dejar sus pertenencias a su conviviente doña Grimilda Sánchez y que de los deseos de los demás no recuerda nada. Sobre los responsables de ejecutar la orden del Consejo de Guerra, a saber, designación de los fusileros, como el lugar donde se llevó a cabo, desconoce todo tipo de antecedentes, pues eran los oficiales los encargados de tomar esas decisiones que obviamente no eran informadas a la Fiscalía Militar, añadiendo que si es que

quedó constancia de esos hechos, no recuerda haberlo visto en los procesos, desconociendo otros antecedentes. Luego especificó que el nombre del abogado Mardones es Óscar Mardones Oyarzún, quien recuerda que estaba de asesor en el Consejo de Guerra de Busch, Valdivia y Rojas. Agregó que no le suena para nada el abogado Claudio Messina Shultz y tampoco lo conoció. Indica que ella no veía los casos por consejos de guerra, pues solo veían en Fiscalía casos de desertión, dentro de otros de esa naturaleza. Supo que existió el Consejo de Guerra de Bush, Valdivia y Rojas, agregando que ella no estaba ahí. Explica que la Fiscalía funcionaba en el primer piso de la Comandancia, sabe que el Consejo de Guerra se hizo en el Segundo Piso de ésta, lo que supo porque todos los funcionarios lo mencionaban, también porque el suboficial Rojo se lo contó. Además vio a la gente que fue condenada subiendo. Relata que Tomás Rojo iba a buscar y dejar gente a la cárcel, pero no pasaban muchos por Fiscalía. El suboficial Rojo era quien estaba en contacto con el Fiscal Militar, no recuerda quien era en ese momento, al parecer Figueroa Márquez, pero no tiene plena seguridad de aquello. Afirma que los suboficiales no participaban en los Consejos de Guerra. Refiere que en ese momento era dactilógrafa, escribía declaraciones y oficios, generalmente de desertores pues en ese tiempo había muchos. De detenidos políticos no tomaba declaraciones, pues habían otras personas encargadas de eso; le parece que los de inteligencia. Reafirma que a Busch, Valdivia y Rojas Marambio los vio en la Fiscalía al último, después de su Consejo de Guerra, para que ellos dejaran registro de su última voluntad. Agrega que las tres personas pasaron por la Fiscalía Militar. No recuerda si ese Consejo de Guerra fue una sesión larga o corta. Añade que Álvaro Romero Reyes fue secretario del Consejo de Guerra en comento. Afirma con toda seguridad que ella no fue la dactilógrafa de ese Consejo de Guerra, por tanto niega lo que dice Rivera Desgroux. Dice que su único contacto con esos fusilados fue cuando subieron a su Consejo de Guerra, no supo qué pasó con ellos después. No recuerda si vio la sentencia de los fusilados, ni su copia. Tampoco recuerda a los integrantes del Consejo, solo sabe que eran oficiales del Regimiento de Calama. Expuso que generalmente formaban los Consejos de Guerra los oficiales de más alto grado. Refiere que como última voluntad, solo recuerda lo que indicó Busch, en que le dejaba las cosas a su pareja la Sra. Grimilda. En esa oportunidad los vio muy afectados.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que a fojas 1486 fojas 1514, 1703, 2238 y en careos de fojas 2239 y 2240 declaró **Juan Carlos González Reyes**, quien al respecto, señaló que ese día le correspondió pasar dos vehículos militares para que se llevaran a efecto los fusilamientos de "Marambio, Gutiérrez y Valdivia". Precisa que estas tres personas fueron fusiladas por orden de

la Fiscalía Militar, previo Consejo de Guerra, le solicitaron desde la comandancia del Regimiento dos vehículos cortos para transportar personal y en cumplimiento a lo ordenado, acudió a la comandancia a proporcionar los vehículos, se trataba de dos jeep, marca Toyota, mimetizados para el desierto. Primeramente llevó un vehículo que dejó ubicado frente a la comandancia. A su llegada, observó que en la puerta había una persona que estaba esposado con sus manos atrás y llorando, custodiado por un centinela. Al observar más detenidamente, se pudo percatar que se trataba de Andrés Rojas Marambio, quien era un conductor de la ambulancia del Hospital, a quien ubicaba, pues anteriormente le habían enviado al Hospital para officiar como conductor cuando había huelga y conocía a la mayoría de los conductores. Refiere que al parecer había sido sometido a un Consejo de Guerra, esto lo supo, porque le estaban impidiendo el paso hacia la comandancia del Regimiento, ya que se estaba celebrando un Consejo de Guerra. En relación a este aspecto se pronunciaron también **Pedro Gustavo Ormeño Muñoz**, quien declaró a fojas 1516, 1641, 2241 y en careos de fojas 2240 y 2567 A, admitiendo tener conocimiento de los hechos por ser uno de los integrantes del pelotón de fusileros que participaron y que en cerro Topater se procedió a la ejecución, por orden de un Consejo de Guerra, de tres sujetos; añadió que más tarde el teniente Born les manifestó que esto no debía comentarse y que todo estaba amparado por una sentencia pronunciada por un consejo de guerra, cuyos integrantes ignora. **Jorge Luis Valenzuela Thonpson** quien en declaración compulsada de fojas 1575 señaló que el año 1960 ingresó al Servicio Público como dentista, específicamente al Hospital Carlos Cisternas de esa ciudad, donde prestó servicios hasta fines del año 1972, trasladándose a Antofagasta, pero en sus viajes a la ciudad de Calama, donde visitó el Hospital Carlos Cisternas, se enteró por intermedio de las demás auxiliares, que a Andrés Rojas Marambio lo habían detenido, acusado de haber trasladado un paquete en la ambulancia desde el Consultorio de Sierra Gorda, hasta la ciudad de Calama, desconociendo el contenido de dicho paquete, que le fuera entregado por otra auxiliar, cuyo nombre no recuerda. Explica que como resultado se descubrió que ese paquete contenía dinamita o explosivos, motivo por el cual Andrés fue detenido y fusilado al día siguiente, con un juicio abreviado. Añade que el hecho lo recuerda bastante bien, pues al entonces Director del Hospital, un doctor de apellido Rojas Delzo, que era muy amigo de Rojas Marambio, en su calidad de Oficial de Sanidad del Ejército de Chile. Aclaró que estos antecedentes fueron contados a su persona por el propio doctor Rojas Delzo, quien estuvo muy afectado por el tema y aunque se negó a participar, e incluso trató de defenderlo, igual lo fusilaron, contaba que Rojas Marambio se arrodillaba delante

de él pidiéndole que lo salvara, pero no pudo hacerlo y lo mataron por orden superior. En cuanto a Francisco Valdivia Valdivia, señala que se trataba de un trabajador de la Empresa Dupont de explosivos, siendo uno de sus directores. Lo anterior le consta porque para esa época era dentista del Sindicato de esa empresa y él era uno de sus directores, siendo una persona muy capacitada para ser tan joven y que sintieron mucho su pérdida, sin tener ningún antecedente sobre las circunstancias de su detención. **Germán Cesar Gautier Arroyo** a fojas 1733, 1945 y 2237, refirió que un día, sin recordar fecha exacta, llegó el Capitán Gustavo Marshal, quien lo designó como integrante de un pelotón de fusilamiento; les explicaron lo que señala el Código de Justicia Militar, en razón de que estaban en estado de Sitio y el no cumplimiento de una orden ameritaba el fusilamiento de quien la incumpliera, se les dio a entender que se trataba de un pelotón al igual que Gendarmería y tenían que cumplir la sentencia que un Consejo de Guerra había emitido. Seguidamente, se les informó que se había celebrado un Consejo de Guerra y que todo estaba completamente amparado por la Ley, de acuerdo a ese periodo excepcional que se estaba viviendo. **Jorge Manuel Mánquez González**, quien depuso a fojas 1912, 2463, 2668 y 2715 y expuso que sobre el fusilamiento de Andrés Rojas Marambio, Luis Busch Morales y Francisco Valdivia Valdivia, solamente se enteró por comentarios de que a estas personas las habrían sorprendido transportando explosivos en la ambulancia del Hospital, que el Fiscal de la Causa fue el Capitán Juan Araya Fernández y que fueron sometidos a un Consejo de Guerra, el que fue integrado por el Comandante del Regimiento, el Fiscal y otros oficiales de quienes no recuerda sus nombres; agregó que dicho Consejo de Guerra se habría celebrado en el segundo piso de la Comandancia en la sala de cartas. Dando cumplimiento a lo ordenado, eligió a los tiradores de confianza, pues la orden era cumplir la resolución del Consejo de Guerra que los había condenado a muerte, preparó a la gente que eran 6 hombres cuyos datos personales no recuerda, pero que nunca los llamaron para cumplir la sentencia y tiene entendido que después llamaron a un pelotón de gendarmería para cumplir lo ordenado. **Clemente del Rosario Ávalos Zúñiga**, declaró a fojas 2635, 2640, 2974 y en careo de fojas 2783, señalando que el día 6 de octubre de 1973, siendo alrededor de las 18:00 horas, en circunstancias que se encontraba en el Regimiento N ° 15 Calama, específicamente cuando iban a formar al Rancho, se acercó el Teniente Fernando Born Pineda, quien eligió a varios soldados conscriptos y los clases, ordenándoles que se prepararan porque irían a realizar un allanamiento al sector del Cerro Topater, recordando que eligieron como a 10 soldados conscriptos, además iba el Capellán de apellido Jorquera y

los clases de la Compañía, entre los cuales recuerda a Óscar Gutiérrez, Jaime Acevedo, Carlos Gajardo y del resto no recuerda sus nombres, pero eran alrededor de 7 personas, con quienes se subieron a los Jeep Land Rover y comenzaron a viajar en dirección a Topater. Añadió que a don Andrés Rojas Marambio, lo ubicaba porque era conductor de la ambulancia del Hospital y generalmente concurría al Regimiento a buscar pan para los enfermos. Además, anteriormente le había correspondido custodiarlo mientras se encontraba detenido en la Comandancia del Regimiento de Calama, pues en ese lugar los mantenían en un subterráneo, observando que tenía su vista vendada y sus manos atadas atrás.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que, ponderando la prueba antes aludida para determinar si existió un Consejo de Guerra que habría impuesto la pena de muerte a las tres víctimas de esta proceso, de atender a esos testimonios debería optar por la afirmativa, porque todos ellos refieren que hubo un Consejo de Guerra, sin embargo, ninguno de ellos es un testigo presencial de dicho Consejo de Guerra, lo que señaló al efecto el imputado Rivera Desgroux, quien debería haberse pronunciado aprobando o no la decisión de ese presunto Consejo, es por lo menos confusa. En efecto, en cuanto a las razones para detener a Rojas Marambio indicó que le habían encontrado un paquete con explosivos en la ambulancia del Hospital cuando venía desde Sierra Gorda y que eso habría dado inicio al proceso correspondiente por el imputado Arriagada Pasmiño quien había sido informado del robo de dinamita en la Planta, explicación que no resiste la más básica lógica porque la Planta estaba a la salida de Calama, entonces cabe preguntarse, cuál es la razón de haber trasladado esa dinamita desde Calama a Sierra Gorda y después volver a traerla a Calama. Si bien consta que fueron condenadas dos auxiliares del consultorio por haberle entregado dinamita a Rojas Marambio, bien pudo ser otro juicio simulado para dar sustento a la teoría peregrina que esgrimieron para justificar los asesinatos, porque no se entiende que para atentar contra la planta de explosivos, hayan ido a buscar los explosivos a una ciudad distante a muchos kilómetros de Calama; al respecto cabe tener en cuenta que para justificar la muerte de Ricardo Pérez, a quien identificaban como pariente de Rojas Marambio, se arguyó que éste tenía los explosivos enterrados en el cerro Moctezuma; pero obviando esas razones, Rivera Desgroux indica que en esa oportunidad se formularon cargos a cuatro personas, los tres ejecutados y a doña Grimilda Sánchez, lo que ésta niega e indicó en forma categórica que su Consejo de Guerra fue en el mes de noviembre, en el mismo sentido la testigo Rosalba Garmendia Flores no la menciona dentro de las personas que según ella habría sido sometidas a Consejo de Guerra. Por lo demás, esto habría acontecido el mismo día 6 de octubre de

1973, entonces no se entiende en qué momento Rivera Desgroux pudo examinar "los tomos" del expediente para dar su veredicto final. Este sujeto indicó que él no participó en el Consejo de Guerra (aunque Jorge Mánquez González señala que estuvo integrado el Consejo por el Comandante del Regimiento), sin embargo, señala que se acercó a Valdivia y a Rojas Marambio para preguntarles si se arrepentían de sus acciones, quienes le habrían dicho que no se arrepentían, sin embargo esa actitud que atribuye a la víctima Andrés Rojas, no coincide con lo que manifestaron los testigos Juan Carlos González Reyes, quien lo vio llorando cerca de la Comandancia, y el testigo Jorge Valenzuela Thompson, a quien el doctor Rojas Delzo que concurrió al lugar donde se realizó el fusilamiento, le comentó que Rojas Marambio se arrodillaba delante de él pidiéndole que lo salvara. Además, como se entiende que Rojas Marambio haya sido sometido a un Consejo de Guerra, si el testigo presencial Clemente Ávalos Zúñiga manifestó que aquel estuvo detenido en el subterráneo del Regimiento con las manos atadas atrás y la vista vendada, entonces surge la interrogante que teniendo en consideración que a esta víctima lo llevaron en la tarde de ese día desde el Retén Río Loa o Dupont hasta el Regimiento, y en ese corto lapso de tiempo, pudo ser sometido a un Consejo de Guerra y luego de eso, dictarse una sentencia la que después fue conocida, estudiada y después aprobada por el Juez Militar o sea por Rivera Desgroux, todo ello en un par de horas, teniendo en cuenta que el fusilamiento se realizó a las 18,30 horas. Ahora bien, Rosalba Garmendia expuso que ella no participó en un Consejo de Guerra, y el testigo Álvaro Alonso Romero Reyes manifestó que ésta participaba en todos los Consejos de Guerra porque era la única dactilógrafa que existía en el Regimiento; Romero también negó haber sido Secretario de ese Consejo. Rosalba Garmendia manifestó que no recordaba haber visto la sentencia o alguna copia de ese documento. El imputado Figueroa Márquez tampoco admitió haber participado, señalando que se habría limitado a cumplir lo ordenado por la Junta, sobre la inhumación de los cadáveres y la entrega a los familiares, cuestión que por lo demás tampoco hizo, porque según lo expresado por la viuda de Francisco Valdivia esa entrega recién se realizó dos años después. Figueroa en una declaración postrimera admitió haberle propuesto a Rivera Desgroux que la ejecución la realizara Born Pineda.

Por otra parte el acusado Osvaldo Arriagada Pazmiño sólo admitió haber hecho una investigación de una explosión producida en la fábrica de explosivos Dupont, sucedida en octubre de 1973 y que a él se le envió un parte con varios detenidos que estaban en la cárcel de Calama a quienes interrogó, determinó sus responsabilidades, notificó los cargos y recibió los descargos y todos los antecedentes se

los envió al Regimiento de Calama donde estaba el Juez Militar para que siguieran con el plenario de la causa (SIC); en una oportunidad posterior negó haber sido oficial investigador y que el Prefecto Abel Galleguillos le ordenó que por la mentada explosión interrogara a los trabajadores, constituyéndose en el Retén Dupont, donde interrogó verbalmente a dos o tres empleados de la planta, que habían sido citados a ese lugar y que no estaban detenidos.

Queda claro entonces que ninguna de las personas que Rivera Desgroux señaló que participaron en el Consejo de Guerra admite haberlo hecho, pero, aunque ellos no estuvieren diciendo la verdad respecto de esa posible intervención, por temor a ser implicados en el delito, igualmente resulta muy difícil de creer que haya existido ese Consejo de Guerra, porque Rojas Marambio sólo fue llevado al regimiento el mismo día 6 de octubre en horas de la tarde, doña Violeta Berríos indica que vio cuando se lo llevaban en la parte de atrás de una camioneta en momentos en que había ido a dejarle comida a su pareja; por su parte doña Silvia Tapia Gallardo refiere que a don Francisco Valdivia lo fueron a buscar a la Cárcel a las 15,00 horas, y según los certificados de defunción las ejecuciones se realizaron a las 18,30 horas, entonces, no tiene explicación lógica que en menos de tres horas hayan realizado un Consejo de Guerra y luego hayan remitido los antecedentes para que el Juez Militar, o sea Rivera Desgroux diera su veredicto final, quien como se dijo- según él- debió examinar varios tomos de investigación (SIC). ¿Cuál habría sido la razón de tanta urgencia?, quizás el asesinato de Ricardo Pérez efectuado el día anterior, a quien vinculaban con los hechos que la imputaron también a estas víctimas, según la prensa de la época (ya analizada precedentemente).

Pero surgen otras dudas, mediante la sentencia de 8 de octubre de 1973 custodiada a fojas 3550 (dictada dos días después del supuesto Consejo de Guerra), en donde se condenó a Orlando Justiniano Aros, y que señala: "y habiéndose constituido el Consejo de Guerra en virtud del Decreto s/n, del cinco de octubre de mil novecientos setenta y tres, librado por el Jefe de Zona en Estado de Sitio del Departamento del El Loa, Coronel don EUGENIO RIVERA DESGROUX, con el objeto de determinar la participación punible y penalidad del acusado ORLANDO HUMBERTO JUSTINIANO AROS...", lo mismo acontece con el consejo de guerra de don Manuel Gallardo Gallardo, según consta de la sentencia que rola custodiada en la misma foja antes señalada, con lo cual se ha logrado determinar que, de haber existido un Consejo de Guerra para los señores Busch, Valdivia y Rojas, éste debiera haber procedido de la misma forma que para el caso de los señores Justiniano y Gallardo, con similares formalidades y a través del mismo Decreto s/n referido (curiosamente dictado

un día antes del fusilamiento de las tres víctimas), con mayor razón en este caso porque se trataba de situaciones más gravosas, en que era necesario justificar o comprobar que al menos formalmente se había cumplido con los protocolos que, precariamente, ellos mismos habían establecido, sin embargo, no existió atisbo alguno que tenga las características de imparcialidad y verosimilitud que lleve a siquiera presumir que realmente existió dicho consejo de guerra.

Entrevistado a fojas 3623 **Orlando Humberto Justiniano Aros** declaró que Francisco Valdivia era técnico en explosivos según le parece, era empleado en la Dupont. En el Partido Socialista era dirigente regional y en la Dupont era dirigente del sindicato. Andrés Rojas Marambio también era socialista, chofer de una de las ambulancias del Hospital de Calama. Grimilda Sánchez era la compañera de Busch Morales, por eso la ubicaba. Ella era dirigente en el Hospital de Chuquicamata, donde trabajaba. Luis Busch era boliviano, pero no lo conoció muy de cerca, más de nombre, lo veía en las reuniones políticas del partido. Agrega que a Busch, Valdivia y Rojas los fusilaron el 6 de octubre de 1973, nunca los vio en la cárcel. Señaló que fueron doce los que cayeron detenidos por el famoso "plan Z", de los cuales tres quedaron vivos; manifestó que un día lo sacaron de la cárcel junto a otros detenidos, los vendaron y encapucharon, luego los dejaron en el gimnasio del Regimiento de Calama y cree que fue el primer Consejo de Guerra que se realizó contra ellos, los del "Plan Z". Cabe tener presente que según la documentación aportada por la Vicaría de la Solidaridad a fojas 3547, las sentencias del Consejo de Guerra del señor Justiniano, fueron dictadas el 8 y 9 de octubre de 1973, y figuran conformando el Consejo de Guerra, Luis Ravest San Martín como Presidente, Claudio Messina Schulz como Auditor, Mayor Carlos Robles Orellana, Capitán César Zavala Verdugo, Carlos Minoletti Arriagada y José Molina Ottone como vocales y el Teniente Álvaro Romero Reyes como Secretario. También figura como defensor el Capitán Domingo Flores Figueroa y como Fiscal Militar Óscar Figueroa Márquez.

Además de todo lo anterior, en este tema cabe tener en consideración, nuevamente, las publicaciones del diario El Mercurio de Calama, teniendo en cuenta que, según ya se ha indicado precedentemente, no se trataba de cualquier medio informativo, la sola circunstancia de presentar las noticias sin indicar la fuente, (con contadas excepciones), permite apreciar que se trataba de un medio que estaba compenetrado con el Gobierno Militar y las nuevas autoridades que regían al país, de tal suerte que no se trataba de periodistas que andaban tras de la noticia, se evidencia un vaso comunicante expedito entre dicho diario y el régimen militar, siendo así, no aparece lógico que de haberse efectuado un Consejo de

Guerra el día sábado 6 de octubre de 1973, que haya desembocado en los primeros casos de fusilamiento en esa ciudad, no se les haya comunicado inmediatamente, sin embargo el 7 de octubre se publicó la noticia con el titular "44 extremistas detenidos en la Cárcel de Calama", donde se indica que: "Entre los últimos ingresados figura un ex guerrillero boliviano, quien recibió asilo político en nuestro país y montaba en compañía de otros delincuentes un criminal plan. También los ex dirigentes de la Compañía de Explosivos que robaron material en esa industria para emplearlo posteriormente con fines de sabotaje. Además, un ex chofer de ambulancia del Hospital de Calama, quien transportaba explosivos a la capital del Loa". Además de lo anterior, el día subsiguiente, esto es, el 8 de octubre de 1973, bajo el titular: "DESBARATAN UN PLAN TERRORISTA EN EL LOA", donde se indica: "Personal del Servicio de Inteligencia de Carabineros de Calama logró desbaratar un plan terrorista de amplias proyecciones...", se agrega a continuación: "En los planes figuraban además de Pérez Marambio, un tal Rojas Marambio, chofer de la ambulancia del Hospital Carlos Cisternas, Manuel Gallardo Gallardo, Santiago Valdivia, ex presidente del Sindicato Profesional de la Compañía Nacional de Explosivos, Río Loa. Los peligrosos delincuentes: Ricardo Pérez, socialista; Domingo Mamani, ex presidente del Sindicato Profesional de la Compañía Nacional de Explosivos Río Loa y Luis Busch...", en la misma publicación y bajo el título: "Los explosivos" se indica que: "Los explosivos eran robados en la Planta de Río Loa de la Compañía Nacional de Explosivos, por Domingo Mamani y Santiago Valdivia, ex dirigentes sindicales de esa empresa, según se desprende de las declaraciones de Manuel Gallardo Gallardo y por las investigaciones realizadas por el SICAR". Finalmente se indica en el párrafo titulado "A la cárcel", que todos los detenidos, salvo Pérez Marambio, fueron encarcelados el viernes pasado y el sábado debieron declarar y dar cuenta de sus actuaciones ante la Fiscalía Militar. Para terminar: "Posteriormente serán procesados por un Consejo de Guerra", es decir, dos días después del fusilamiento, el Mercurio de Calama, portavoz del régimen militar, publicaba que el Consejo de Guerra se haría "posteriormente". Recién, el día 10 de octubre de 1973, se menciona en la noticia titulada "20 AÑOS DE PRISION PARA UN EXTREMISTA" que Luis Busch Morales, Francisco Javier Valdivia y Andrés Rojas Marambio, fueron fusilados de acuerdo a la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que se reunió "el sábado pasado", indicándose, además, que: "Los sentenciados fueron ejecutados el sábado a las 18:30 horas". Todas estas publicaciones fueron certificadas por la Biblioteca Nacional, por la encargada de la Sección Periódicos y Microformatos doña Paulina Olivos Opazo. Es conveniente hacer presente que la publicación de

fojas 203 no fue considerada porque fue adjuntada por la Policía de Investigaciones sin certificado de fidelidad y, además, porque no se trata de una página completa, de tal manera que, no puede asegurarse que el texto de una noticia titulada "3 peligrosos extremistas fueron fusilados en Calama" y que se refiere a un comunicado oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de Calama, se hubiere publicado realmente el 8 de octubre de 1973, como figura en la fotografía superior, porque al solicitarle a la referida Biblioteca que remitiera los diarios que contenían la noticia de la detención y del fusilamiento, no adjuntaron esa publicación.

Ahora bien, de las sentencias de Gallardo y de Justiniano, consta que eran perseguidos por los mismos cargos que le atribuyeron a Busch, Rojas y Valdivia, pero le aplicaron sanciones privativas de libertad y no la muerte, e incluso respecto de don Domingo Mamani, a quien le imputaron un delito idéntico al de don Francisco Valdivia, le impusieron una pena de 20 años de cárcel, según consta de las publicaciones de 3468, 3469, 3470 y 3471, (independientemente que después la Caravana de la Muerte Calama lo hubiese asesinado), de este modo, si realmente se hubiese realizado el Consejo de Guerra en contra de las víctimas de este juicio, no existía razón para discriminar respecto de los demás condenados y no deberían haber sido condenados a muerte.

De todo lo que se ha venido razonando resulta lógico concluir que no se realizó el mentado Consejo de Guerra. Sin que esté demás señalar que aunque se hubiese realizado, ha quedado de manifiesto que las tres víctimas fueron torturadas para obtener una confesión, incluso el peritaje médico de Luis Busch Morales señala que el evento número 7 corresponde a una fractura de su brazo que no fue producida por los disparos, sino que por aplicación lenta de fuerza, lo que es indiciario de aplicación de tortura; ya se señaló lo que sufrió Andrés Rojas Marambio y también don Francisco Valdivia, sobre todo cuando a éste lo detuvieron por primera vez el 20 de septiembre de 1973; también se pudo establecer que todo el proceso debió haber durado menos de dos horas, incluyendo la aprobación de parte del juez militar, lo que no coincide con lo que emana de las dos copias de sentencias ya referidas, respecto de Gallardo y Justiniano, en las que la aprobación se efectuó al día siguiente de la dictación de esa sentencia. A Gallardo, no obstante que se señala que le perjudicaban dos agravantes, no le impusieron pena de muerte, sino una pena corporal de privación de libertad de 20 años en total. En el mismo sentido, cabe tener presente que don Andrés Rojas Marambio esa misma tarde fue observado por un funcionario militar con la vista vendada y las manos atadas a

su espalda en el subterráneo del Regimiento, de los otros dos no existe antecedente si estaban en mejor condición, pero en ese estado, cualquier decisión jurisdiccional constituiría una apariencia de juicio, sin pruebas legales, mediante confesiones obtenidas bajo la aplicación de torturas y sin derecho a defensa. (Al efecto cabe tener en cuenta lo que señaló Domingo Flores Figueroa a fojas 3731 y siguientes, que lo hicieron defender a unos imputados sin tener conocimiento alguno para ejecutar esa labor y que pudo advertir que no había prueba alguna de la existencia de armas o explosivos, al efecto cabe considerar que él figura en las sentencias de Justiniano y Gallardo como defensor).

EN CUANTO AL FUSILAMIENTO.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que para demostrar el hecho del fusilamiento de las víctimas se reunieron testimonios presenciales y de oídas que a continuación se indica: a) Juan Carlos González Reyes, a fojas 1486, 1514, 1703, 2238 y en careos de fojas 2239 y 2240, señaló haber sido destinado al Regimiento de Infantería Reforzado Motorizado de Montaña N° 15 en la ciudad de Calama. Agrega que una vez que se presentó en su nueva unidad, fue destinado a la tercera batería de combate, asignándosele el cargo de comandante de pieza, y a su vez, el comandante de grupo era el entonces capitán Miguel Campos. Añade que en esa época, estaban dedicados exclusivamente al tema militar, es decir instrucción, campañas y otras materias propias de la especialidad. Explica que en el año 1973 ya tenía el grado de cabo primero y continuaba en el tema de la artillería militar. Por su parte, refiere que estando en los primeros días del mes de octubre de 1973, fue devuelto al Regimiento de Calama, donde quedó a cargo de la sección transporte de la unidad militar, correspondiéndole pasar dos vehículos militares para que se llevaran a efecto los fusilamientos de "Marambio, Gutiérrez y Valdivia". Precisa que estas tres personas fueron fusiladas por orden de la Fiscalía Militar, previo Consejo de Guerra. Refiere que estos sujetos fueron fusilados en el sector Topater, donde se instalaron unos durmientes para amarrarlos. Luego, llegó una sección de ocho cabos, que actuaron como fusileros. Entre los que recuerda estaba Pedro Ormeño, también el médico de la Unidad, Mayor Luis Rojas Delzo, y el Capellán "Jorquera". También recuerda que Gutiérrez quedó vivo y el Oficial a cargo, del que no recuerda su nombre, le dio el tiro de gracia por orden del médico. Más adelante, le correspondió, junto a Pacheco y Carrasco del Departamento segundo, desamarrarlos, ponerlos en unas sábanas, las que cosieron, los subieron al camión que él conducía, marca Reo, serie A-4813, y se dirigieron al cementerio local, donde estaban las tres fosas confeccionadas, de modo que se depositaron en ese lugar, se taparon con tierra y no se dejó

ningún indicio de que allí estaban. Relata que terminada esta faena, se devolvió al Regimiento, lavó el camión y se retiró a su domicilio, ratifica su declaración de fojas 1486, agregando que efectivamente en los primeros días del mes de octubre del año 1973, él estaba a cargo de la sección transporte del Regimiento Calama, cuando un día, que no recuerda fecha exacta, le solicitan desde la comandancia del Regimiento dos vehículos cortos para transportar personal. En cumplimiento a lo ordenado, acude a la comandancia a proporcionar los vehículos, se trataba de dos jeep, marca Toyota, mimetizados para el desierto. Primeramente llevó un vehículo que dejó ubicado frente a la comandancia. A su llegada, observó que en la puerta había una persona que estaba esposado con sus manos atrás, custodiado por un centinela. Al observar más detenidamente, se pudo percatar que se trataba de Andrés Rojas Marambio, quien era un conductor de la ambulancia del Hospital, a quien ubicaba, pues anteriormente le habían enviado al Hospital para officiar como conductor cuando había huelga y conocía a la mayoría de los conductores, quien estaba llorando. Refiere que al parecer había sido sometido a un Consejo de Guerra, esto lo supo, porque le estaban impidiendo el paso hacia la comandancia del Regimiento, ya que se estaba celebrando un Consejo de Guerra. Posteriormente, se retiró a su lugar de trabajo. Cuando estaba llegando, lo llamaron nuevamente de la Comandancia y le pidieron otro vehículo. A los pocos minutos, y después de haber preparado otro jeep, marca Toyota, de las mismas características que el anterior, nuevamente acudió a la Comandancia. En esta oportunidad no vio a nadie. Agrega que habían pasado alrededor de 45 minutos desde que había llevado el primer vehículo y se le ordenó trasladar al Capellán Luis Jorquera Molina, a la localidad de Topater, diligencia que realizó inmediatamente, pues a los pocos minutos se subió el Capellán y emprendieron viaje al sector antes indicado. Pasado el puente Topater, unos 300 metros más hacia San Pedro de Atacama, viraron a la izquierda y llegaron a un lugar donde había dos vehículos estacionados, entre ellos, el otro jeep que él había proporcionado. Una vez en el lugar, el Capellán Jorquera se bajó del vehículo y caminó hacia el lugar donde estaban realizando el fusilamiento, que estaba a unos 200 metros del lugar donde él se encontraba estacionado. Desde allí pudo observar que había tres personas amarradas a los durmientes con su vista vendada (pañó negro) y frente a ellos, a unos 30 metros, había un pelotón de 8 fusileros, entre los cuales pudo distinguir a Pedro Ormeño. Relata que el cura conversó con los tres condenados y luego se retiró, luego vinieron los balazos y uno a uno fueron cayendo los condenados, escuchando gritos como "Viva el compañero Allende e improperios contra los milicos", observando cuando uno de ellos botó sangre por su boca y cayó

al piso. De ahí, vio que subió el doctor Rojas Delzo, quien examinó a los condenados y luego hizo un gesto a alguien, un oficial, del cual desconoce sus antecedentes personales, quien subió, sacó su pistola y le disparó a uno de los condenados que al parecer había quedado vivo. Seguidamente, pasados unos minutos, la gente se empezó a retirar y quedaron los del departamento II. El jeep en el cual él andaba se lo llevó otro clase y a él lo dejaron ayudando a los del Departamento II, Carrasco y Pacheco, quienes estaban envolviendo a los muertos en unas sábanas blancas. Se acercó y ayudó a afirmar las sábanas, y luego ubicaron los cuerpos en un camión que estaba en el lugar, sin saber en qué momento llegó, pero echaron los cuerpos en la parte posterior, y una vez cargado, le ordenaron que los llevara al Cementerio. Llegaron a la entrada del Cementerio, bajaron los cadáveres y los llevaron a unas fosas que estaban listas. Enterraron los cuerpos y luego regresó al Regimiento con el camión, acabándose su participación como observador de lo que estaba sucediendo. Señala que ese día se hizo un consejo de guerra, él andaba cerca de la comandancia, y al llegar vio a una persona, varón, que estaba llorando. Ese era el primer condenado a muerte en ese consejo. Desconoce quiénes formaban el consejo. Refiere que se habría hecho un solo consejo de guerra donde fueron condenadas las tres personas mencionadas en su oportunidad. Precisa que luego, en sector Topater, él se paró como a 200 metros de los detenidos amarrados al poste, y que vio cuando ordenaron dispararles, de a uno por uno. A fojas 2238 vuelve a declarar judicialmente, precisando que al ver a Rojas Marambio fuera de la Comandancia, y al preguntar al Sargento que allí estaba, de nombre Carlos Hidalgo Rodríguez (fallecido, fojas 2245), qué pasaba, éste le señala que al interior, en el segundo piso en la Sala de Carta de Mapas, había un consejo de guerra y esta sala era restringida, que siempre fue así, antes y después de estos acontecimientos. Añade además que ese funcionario estaba emparentado con Rojas Marambio, y que al preguntar por él, le dijo "para qué se me mete en líos". b) Pedro Gustavo Ormeño Muñoz indicó a fojas 1516 1641, 2241 y en careos de fojas 2240 y 2567 A, que en el mes de septiembre del año 1970 fue destinado al Regimiento N° 15 Calama, donde cumplió funciones hasta el año 1989. Añadió que en el Regimiento de Calama, para septiembre de 1973, pertenecía a la Segunda Batería de Combate a cargo del Capitán José Molina Ottone y el Teniente oficial de la Unidad, don Patricio Lapostol Amo, y que el comandante del Regimiento a la fecha del Pronunciamiento Militar era Eugenio Rivera Desgroux. Luego, en el careo con Juan Carlos González Reyes, admitió tener conocimiento de los hechos y ser uno de los integrantes del pelotón de fusileros que participaron y que en cerro Topater se procedió a la ejecución, por orden de un Consejo de Guerra, de tres

sujetos; recuerda que fue el Sargento 1° Jorge Rosas Pastenes quién lo designó a la misión de integrar el grupo de fusileros. Refiere que no recuerda quién más, pero supone que a él le ordenaron formar el grupo, de tal forma que más tarde fue el Teniente Adolfo Born Pineda, quién dio una pequeña instrucción sobre la forma de llevar a cabo el cometido, y que les habría indicado que debían ser certeros y dar en el blanco con el fin de evitar que las personas que se iban a fusilar sufrieran y asimismo evitar el "tiro de gracia" que él, como oficial a cargo del pelotón, podría llevar a cabo, agregando que la orden era cumplirla sí o sí, ya que quién no la cumpliera, incluso él, podrían ser sometidos a un consejo de guerra y ser sancionados y correr la misma suerte de las personas que se iban a fusilar. Recuerda que se trasladaron en un camión al Cerro Topater, y que allí había tres vigas, no recuerda si los sujetos estaban amarrados o no, pero recuerda haber visto al Capellán Jorquera, vio que él conversaba con esas tres personas. También vio a un médico del que no recuerda nombre. Agrega que se hizo instalar el pelotón, no recuerda a qué distancia, vio que a los sujetos les instalaron un disco en el pecho, lugar al cual había que disparar, tal como el teniente señaló. Luego, el mismo teniente dio la orden de disparar y para tal efecto bajó lentamente su sable y disparó una vez. Añade que a los segundos vio que el médico fue a certificar la muerte, hizo una seña y el teniente fue donde él, a su vez que el grupo de fusileros se retiraba. En eso escuchó un disparo, supone que una de las víctimas había quedado viva y el teniente debió llevar a cabo el tiro de gracia, hecho que no vio. Refiere que posterior a lo sucedido, los devolvieron al cuartel en el mismo vehículo y más tarde el teniente Born les manifestó que esto no debía comentarse y que todo estaba amparado por una sentencia pronunciada por un consejo de guerra, cuyos integrantes ignora. Por último, aclara que esa fue la única vez que estuvo en un procedimiento con resultado de muerte, y si antes nada dijo fue por temor, que siempre tuvo miedo de haber acatado esa orden y que solo la cumplió para no tener problemas con el Ejército. C) Jorge Luis Valenzuela Thonpson a fojas 1575, 1579 y 2239, indicó que el año 1960 ingresó al Servicio Público, específicamente al Hospital Carlos Cisternas de esa ciudad, donde prestó servicios hasta fines del año 1972. Hace presente que en su época estudiantil se hizo militante del Partido Socialista. A su llegada a la ciudad de Antofagasta a fines del año 1972, ingresó a trabajar al Hospital Regional de Antofagasta. Respecto a Andrés Rojas Marambio, Francisco Valdivia Valdivia y Luis Busch Morales, señala que a los tres los conoció, indicando que el primero era conductor de la ambulancia del Hospital Carlos Cisterna de Calama, lugar donde trabajó desde el año 1960 hasta fines del año 1972, fecha en la que se fue a

trabajar a la ciudad de Antofagasta. Relata que se trataba de un hombre muy servicial y querido por todo el personal de ese recinto asistencial, con marcadas tendencias de izquierda, supo que nunca perteneció a ningún partido político, solamente su ideología era ayudar a los demás con su conducta humanitaria. Relata que en varias ocasiones tuvo que viajar con Andrés hacia los pueblos interiores, cumpliendo con rondas médicas y allí pudo tomar su propia impresión respecto de la calidad humana que él tenía, era soltero, pero convivía con una auxiliar del mismo hospital, y que incluso supo que tuvieron un hijo. Para los sucesos del mes de septiembre del año 1973, refiere que él no estaba en la ciudad de Calama, pues, ya había sido trasladado a Antofagasta, pero en sus viajes a la ciudad de Calama, donde visitó el Hospital Carlos Cisternas, se enteró por intermedio de las demás auxiliares, que a Andrés Rojas Marambio lo habían detenido, acusado de haber trasladado un paquete en la ambulancia, desde el Consultorio de Sierra Gorda, hasta la ciudad de Calama, desconociendo el contenido de dicho paquete, que le fuera entregado por otra auxiliar, cuyo nombre no recuerda. Explica que como resultado se descubrió que ese paquete contenía dinamita o explosivos, motivo por el cual Andrés fue detenido y fusilado al día siguiente, con un juicio abreviado. Añade que el hecho lo recuerda bastante bien, pues al entonces Director del Hospital, un doctor de apellido Rojas Delzo, que era muy amigo de Rojas Marambio, en su calidad de Oficial de Sanidad del Ejército de Chile, lo habrían obligado a participar en el fusilamiento de su amigo, a quien incluso tuvo que ponerle un blanco en el pecho, donde los fusileros debían disparar. Aclara que estos antecedentes fueron contados a su persona por el propio doctor Rojas Delzo, quien estuvo muy afectado por el tema y aunque se negó a participar, e incluso trató de defenderlo, igual lo fusilaron, contaba que Rojas Marambio se arrodillaba delante de él pidiéndole que lo salvara, pero no pudo hacerlo y lo mataron por orden superior. Con respecto a Luis Busch Morales, lo conoció porque era pareja de Grimilda Sánchez, conocida auxiliar del Hospital Carlos Cisternas de Calama, pero que no tuvo un mayor acercamiento con esta persona. Refiere que era muy callado para actuar. Respecto a Francisco Valdivia Valdivia, señala que se trataba de un trabajador de la Empresa Dupont de explosivos, siendo uno de sus directores. Lo anterior le consta porque para esa época era dentista del Sindicato de esa empresa y él era uno de sus directores, siendo una persona muy capacitada para ser tan joven y que sintieron mucho su pérdida, sin tener ningún antecedente sobre las circunstancias de su detención. Agrega que Andrés viajaba y llevaba gente a Antofagasta a buscar remedios, traslado de pacientes, y que por eso pasaba por Sierra Gorda, Baquedano y hacía encargo a las personas. Añade

que el médico Rojas Delzo era Oficial militar, Mayor del Ejército. D) Germán Cesar Gautier Arroyo, a fojas 1733, 1945 y 2237 señaló que a mediados del año 1970, fue trasladado al Regimiento N° 15 Calama, donde cumplió funciones hasta el año 1978, quedando encuadrado en la segunda batería de artillería. Refiere que un día, sin recordar fecha exacta, llegó el Capitán Gustavo Marshal, quien lo designó como integrante de un pelotón de fusilamiento, pues anteriormente se había realizado una formación donde se había pedido voluntarios para integrarlo, pero nadie se ofreció y luego designaron, eligiéndole a él y a otros compañeros, cuyos nombres no recuerda. Después de su designación, comenzaron a explicarles lo que señala el Código de Justicia Militar, en razón de que estaban en estado de Sitio y el no cumplimiento de una orden ameritaba el fusilamiento de quien la incumpliera, se les dio a entender que se trataba de un pelotón al igual que Gendarmería y tenían que cumplir la sentencia que un Consejo de Guerra había emitido. Seguidamente, se les informó que se había celebrado un Consejo de Guerra y que todo estaba completamente amparado por la Ley, de acuerdo a ese periodo excepcional que se estaba viviendo. Seguidamente, los llevaron a realizar prácticas de tiro, recalcando que tenían que ser efectivos y dar en el blanco porque las personas que iban a ser fusiladas no podían sufrir. No recuerda los nombres de los compañeros que participaron en el pelotón, pero dice que eran alrededor de 9 personas. Llegado el día, los subieron arriba de un Jeep Land Rover Largo, recuerda que él iba sentado en la parte de atrás, avanzaron por el camino al cementerio, luego cruzaron el puente y a la altura del monolito del Cerro Topater doblaron a la izquierda, por un camino que empalmaba con la ruta a Chiu Chiu. Avanzaron unos metros, tramo corto y los hicieron esperar en el vehículo, luego les ordenaron bajar y ya estaban en la posición o el lugar dispuesto para llevar a cabo la sentencia. Recuerda que desde donde se encontraban se veía la ciudad de Calama a sus espaldas, pues miraban hacia el cerro. No recuerda muy bien, pero al parecer había palos enterrados para colocar a las personas, luego apareció el Capellán Jorquera Molina, quien iba con las personas dándole la extremaunción, para luego ubicar a las tres personas en los palos, de lo que no está seguro. Mientras tanto, refiere que ellos estaban reunidos un poco más abajo, pero cerca de la posición donde se iba a efectuar el fusilamiento. Añade que el oficial a cargo, cuyo nombre no recuerda, nuevamente les habló de la importancia de ser efectivos al disparar, pues las personas no podían sufrir y así evitarle a él tener que dar el tiro de gracia. Seguidamente, ordenó tomar ubicación al pelotón de fusilamiento, se formaron en línea recta dando sus espaldas a la ciudad de Calama. Delante de ellos, a unos 10 metros, colocaron a tres personas, cuyas

identidades desconoce, pero ocurrió en horas de la tarde con el sol a sus espaldas y cercano a esconderse. Agrega que una vez formados en línea recta, el oficial se ubicó al costado derecho con un sable en su mano, el cual levantó, y al bajar se hizo fuego y todos dispararon, con un fusil SIG, calibre 762. Después de dicha acción, el oficial a cargo se acercó a los condenados y revisó que estuvieran fallecidos, sin recordar si efectuó algún tiro de gracia, pues en ese momento el declarante salió de la línea de tiro y se puso a caminar alrededor del vehículo, por cuanto la impresión que le causó el hecho fue demasiado fuerte, pues había matado a una persona. Añade que posteriormente, el oficial a cargo les ordenó embarcar en el mismo Jeep y regresaron al Regimiento de Calama, con instrucciones expresas de evitar hacer comentarios con respecto a lo sucedido. Explica que esa noche no pudo conciliar el sueño y al día siguiente, fue a la oficina del Suboficial Mayor Portilla, explicándole lo sucedido y él le recomendó hablar con el Capellán, a quien ubicó ese mismo día para comentarle lo que sentía y él le dijo que lo realizado estaba de acuerdo a la Ley, que todo estaba informado y respaldado por un Bando Oficial en el cual se comunicaba la sentencia aplicada, pero nunca quiso saber los nombres de las víctimas. Recuerda que eran más de cinco funcionarios en el pelotón de fusileros, entre los cuales puede señalar que al parecer estaba el funcionario Pedro Ormeño Muñoz, y además estaba presente en ese evento el Capellán don Jorquera Molina, quién en todo momento estuvo cerca de los prisioneros alentándolos antes de ser ejecutados. Asimismo, recuerda que estaba presente un médico, de quién no recuerda nombre ni apellido, como también no recuerda si se hizo o no un disparo de gracia. E) Jorge Manuel Mánquez González a fojas 1912, 2463, 2668 y 2715, indicó que ingresó al Ejército de Chile, en el año 1961, con la finalidad de realizar su Servicio Militar obligatorio, mientras realizaba su servicio, postuló a la Escuela de Infantería, a donde se integró en el año 1962 y 1963, saliendo egresado como Instructor de infantería, siendo destinado al Regimiento de Infantería N° 15 Calama, donde cumplió funciones durante 22 años. Refiere que sobre el fusilamiento de Andrés Rojas Marambio, Luis Busch Morales y Francisco Valdivia Valdivia, solamente se enteró por comentarios de que a estas personas las habrían sorprendido transportando explosivos en la ambulancia del Hospital, que el Fiscal de la Causa fue el Capitán Juan Araya Fernández y que fueron sometidos a un Consejo de Guerra, el que fue integrado por el Comandante del Regimiento, el Fiscal y otros oficiales de quienes no recuerda sus nombres. Además, indica que había un abogado defensor, pero no recuerda sus datos personales. Agrega que dicho Consejo de Guerra se habría celebrado en el segundo piso de la Comandancia en la sala de

cartas y tiene entendido que el fusilamiento se llevó a cabo en el cerro Topater o detrás del que Regimiento, donde había una quebrada, pero no tiene la certeza. Recuerda que le ordenaron preparar un equipo de fusileros, y que la orden fue impartida por el capitán Videla Valdebenito. Dando cumplimiento a lo ordenado, eligió a los tiradores de confianza, pues la orden era cumplir la resolución del Consejo de Guerra que los había condenado a muerte, preparó a la gente que eran 6 hombres cuyos datos personales no recuerda, pero que nunca los llamaron para cumplir la sentencia y tiene entendido que después llamaron a un pelotón de gendarmería para cumplir lo ordenado, porque nunca más los llamaron a ellos y sobre el tema no se habló más, desconociendo mayores antecedentes al respecto. f) Jorge Milton Rosas Pastenes, a fojas 2383 y en careo de fojas 2567 A, señaló que fue asignado al Regimiento N° 15 de Calama y que posterior al 11 de septiembre del año 1973, él se encontraba en la Batería de Plana Mayor. Agrega que sobre las víctimas, solo recuerda a Rojas Marambio, por cuanto él tenía un familiar militar, creo que era cuñado, en el mismo Regimiento, de nombre Carlos Hidalgo Rodrigo (fallecido), sin tener idea de quiénes eran las otras dos personas, además que a la fecha de la muerte de estas personas, él ya no estaba en su batería, sino que se encontraba en la Gobernación. Refiere que supo que fueron fusilados, más no las razones, solo el comentario que se hizo en la población Militar. En cuanto a Pedro Gustavo Ormeño Muñoz, recuerda que era un Sargento de su batería, que era instructor, y que no tiene conocimiento que haya tenido otras labores especiales. Afirma que no es efectivo lo señalado por el funcionario Ormeño Muñoz, en el sentido que él lo habría designado para integrar el grupo de pelotón para el fusilamiento de Andrés Rojas Marambio, volviendo a señalar que para esa fecha él estaba en la Gobernación. G) Clemente del Rosario Ávalos Zúñiga, a fojas 2635, 2640, 2974 y careo de fojas 2783, dijo que ingresó al Ejército de Chile el día 15 de enero de 1973, con la finalidad de realizar su servicio militar obligatorio, siendo encuadrado a su ingreso en la Segunda Batería del grupo de Artillería, siendo el Comandante de esa unidad el Capitán Domingo Flores Figueroa, siendo de la dotación el Teniente Fernando Born Pineda, recordando a un Subteniente de nombre Sergio Mandiola Arredondo. En la compañía había también personal del cuadro permanente, entre los cuales recuerda a Oscar Gutiérrez Cáceres, Carlos Gajardo Orellana, Iván Gómez Mundaca, el Sargento Pedro Gutiérrez y del resto no recuerda sus nombres, pero había un total de 9 funcionarios. Refiere que el día 6 de octubre de 1973, siendo alrededor de las 18:00 horas, en circunstancias que se encontraba en el Regimiento N ° 15 Calama, específicamente cuando iban a formar al Rancho, se acercó el Teniente Fernando Born Pineda,

quien eligió a varios soldados conscriptos y los clases, ordenándoles que se prepararan porque irían a realizar un allanamiento al sector del Cerro Topáter, recordando que eligieron como a 10 soldados conscriptos, además iba el Capellán Jorquera y los clases de la Compañía, entre los cuales recuerda a Óscar Gutiérrez, Jaime Acevedo, Carlos Gajardo y del resto no recuerda sus nombres, pero eran alrededor de 7 personas, con quienes se subieron a los Jeep Land Rover y comenzaron a viajar en dirección a Topater, recordando que llegaron al sector de la Planta de Filtros, donde observaron que había un lugar habilitado con un durmiente enterrado en posición vertical, y que hacia el frente había una zona demarcada y el lugar estaba completamente deshabitado. Al llegar, les ordenaron acordonar el sector, para protegerlo, impidiendo el paso de cualquier persona extraña, quedando distante a unos 20 metros desde donde se encontraba el durmiente y desde esa posición observó que llegó al lugar un vehículo militar que trasladaba personas detenidas, desde donde se bajó un detenido, los clases lo amarraron al durmiente, la persona se encontraba con su vista vendada y sus manos amarradas atrás. Luego, los mismos clases lo fijaron al durmiente desde sus manos y luego le pusieron una especie de triángulo en el pecho, mientras el grupo de 7 clases estaba formado con sus Subametralladoras Sig en la zona demarcada. Luego, se acercó el Capellán Jorquera, quien comenzó a hablar al detenido y éste luego le entregó sus pertenencias y el padre comenzó a alejarse hablando en voz alta, mientras el Teniente Born Pineda, daba las instrucciones el pelotón de fusilamiento, levantó su mano y cuando la dejó caer, los clases dispararon al detenido, quien cayó de manera instantánea. Luego, lo tomaron los clases, lo envolvieron en una sábana, color blanco y lo dejaron tendido a un costado. Seguidamente, bajaron a otro detenido, realizando el mismo procedimiento anterior, y finalmente bajaron del vehículo a don Andrés Rojas Marambio, a quien ubicaba porque era conductor de la ambulancia del Hospital y generalmente concurría al Regimiento a buscar pan para los enfermos. Además, anteriormente le había correspondido custodiarlo mientras se encontraba detenido en la Comandancia del Regimiento de Calama, pues en ese lugar los mantenían en un subterráneo, observando que tenía su vista vendada y sus manos atadas atrás. Luego, lo amarraron al durmiente, le colocaron el triángulo rojo en el pecho, luego se acercó el Capellán a quien le entregó sus pertenencias y el Teniente Born Pineda dio la orden de disparar, resultando los tres detenidos muertos, mientras a ellos los llevaron a la cuadra para seguir con sus funciones, con prohibición absoluta de comentar lo sucedido. Respecto a los cuerpos, desconoce completamente lo que sucedió con ellos, pero refiere que a los tres los envolvieron en sábanas

blancas y al costado del durmiente, había una zanja, la cual se notaba que había sido confeccionada con una retroexcavadora, donde presume deben haber enterrado los cuerpos. Posteriormente, el Ejército comunicó por intermedio de la radio que tres personas habían sido dadas de baja, desconociendo mayores antecedentes. H) David Roberto Desa Quinzacara, a fojas 2776, 2784 y 3043, declaró señalando que ingresó al Ejército de Chile el día 10 de enero de 1973, para realizar su Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento N ° 15 Calama, siendo encuadrado en la Segunda Batería del Grupo de Artillería, siendo el Comandante de ese entonces el Capitán Domingo Figueroa Flores, el Teniente de la Compañía era Jorge Mandiola Arredondo y el Subteniente era Jorge Born Pineda, entre los clases recuerda a Pedro Gutiérrez, después venía Jaime Acevedo, Cayetano Gutiérrez, Oscar Gutiérrez, Jorge Guajardo, Carlos Gajardo, German Gautier y Jaime Alvarado. Respecto a los hechos investigados, indica que para el día 11 de Septiembre de 1973, se encontraba enfermo internado en la enfermería del Regimiento por una intoxicación alimenticia, así que no participó con su Batería en las labores que fueron asignadas. Entiende que los mandaron a Chuquicamata a custodiar el mineral. Refiere que estando en la enfermería, el día 6 de octubre 1973, siendo aproximadamente las 17:00 horas, llamaron a todo el personal disponible en el Regimiento a formar en el patio, dado que gran parte de las Compañías estaban fuera del Regimiento, así que habían como 40 personas custodiando el Regimiento. Recuerda que el Segundo Comandante, Óscar Figueroa Márquez, seleccionó a 12 soldados conscriptos para realizar una custodia a una caravana. En eso, se dieron cuenta de la existencia de 3 personas detenidas en la Comandancia del Regimiento de Calama e inmediatamente les ordenaron custodiarlos. Recuerda que entre los detenidos estaba uno de nombre Andrés Rojas Marambio, quien les contó que era chofer de la ambulancia del Hospital de Calama, lo recuerda claramente, porque le pidió un cigarro y como le regaló uno, se pusieron a conversar. Al cabo de unos minutos, llegó un Jeep Militar, vendaron a las tres personas y las subieron arriba, mientras ellos, los soldados conscriptos, se fueron acompañando a la caravana en un camión militar. Entre los soldados conscriptos designados, no recuerda sus nombres porque eran de distintas compañías y el chofer del camión que los transportaba era el Cabo Ramón Olguín Salinas. Refiere que enfilaron hacia el cerro Topater y a su llegada al sector, se pudo percatar que había un durmiente instalado previamente. A ellos los hicieron bajar del camión y les ordenaron cerrar un perímetro de 200 metros a la redonda, aproximadamente. Mientras tanto, los jeep donde transportaban a los detenidos se detuvieron cerca del durmiente, procedieron a bajar a los detenidos de a uno y los pararon en

el durmiente; primero pusieron a uno de Enaex, que vestía chaqueta roja y un pantalón azul; luego se formó frente a él un pelotón de fusilamiento integrado por clases de su Batería; entre los cuales puede mencionar a Carlos Gajardo Orellana, Germán Gautier Arroyo; Jorge Guajardo y Jaime Acevedo. Además, había dos clases de la Batería Logística, Ormeño y Carlos Ramírez, todos ellos comandados por el Teniente Jorge Born Pineda, de la Segunda batería a la cual él pertenecía. Una vez que el detenido de ENAEX estaba en el durmiente, el Teniente Born levantó el sable y cuando lo bajó, el pelotón disparó al cuerpo del detenido, observando que quedó con vida y el Teniente Born se acercó y dio dos tiros de gracia en la cabeza del detenido; luego los soldados conscriptos designados sacaron el cuerpo de la persona fallecida, la envolvieron en sacos ropero y los subieron arriba del camión que los había llevado a ellos al lugar. Luego, bajaron de los Jeep al segundo detenido, correspondiente a don Andrés Rojas Marambio, a quien identificó porque vestía una chaqueta a cuadros de lana con un jean azul, además porque temprano había hablado con él y le había dado un cigarro, a quien amarraron al durmiente y luego nuevamente el Teniente Born levantó su sable y al bajarlo el pelotón disparó al cuerpo del detenido, a quien le habían colocado un blanco, correspondiente a un disco rojo en el lado del corazón. Nuevamente el detenido quedó con vida y el Teniente Born con su pistola Staller, dio dos tiros de gracia, cayendo el detenido al piso y los soldados conscriptos designados sacaron el segundo cuerpo, lo echaron a los sacos y lo subieron al camión. Seguidamente, sacaron el tercer detenido desde los Jeep, lo amarraron al durmiente y se hizo nuevamente el mismo procedimiento. Este detenido vestía una camisa blanca, también quedó con vida y el Teniente Born se acercó a darle dos tiros de gracia en la cabeza, luego los soldados conscriptos desamarraron el cadáver, lo echaron a los sacos y luego lo subieron al camión conducido por el Cabo Olguín, luego se subieron los mismos soldados conscriptos al camión y se llevaron los cuerpos conjuntamente con el durmiente a un lugar desconocido, mientras tanto ellos regresaron al Regimiento Calama en los Jeep Militares. Alrededor de las 19:00 horas, llegó el camión de regreso al Regimiento, le mandaron a lavar el camión que venía con sangre, se trataba de un camión marca REO, no recuerda número, pero era el único de color olivo a diferencia de los otros que eran todos mimetizados. Relata que lo lavaron bien, sacándole todas las manchas de sangre, retiraron el durmiente del camión y lo enterraron por orden superior frente a la panadería. Añade que en la noche fue designado como guardia de los camiones donde pasó la noche y al día siguiente fue enviado de regreso a la Segunda Batería

del grupo de Artillería, su unidad, que estaba en ese entonces a cargo del Cabo Reserva Washington Cruz Pineda.

Que, con las declaraciones consignadas precedentemente, se logró acreditar la efectividad del fusilamiento en cercanías del cerro Topater, instancia en donde un contingente de militares, bajo el mando del Teniente Adolfo Fernando Born Pineda, procedieron a fusilar a las tres víctimas en forma consecutiva, para posteriormente ser envueltos en sábanas blancas y ser subidos a un camión con destino al cementerio de la ciudad de Calama. Que durante el fusilamiento se encontraba presente el capellán del Ejército Luis Exequiel Jorquera Molina (sin perjuicio de que él niega todo a fojas 245 y 1049) y el médico del Ejército Sr. Luis Rojas Delzo (a fojas 68 figura como Comandante de la Sección Sanidad), quien atestigua y certifica sus muertes (lo que se comprueba mediante certificados médicos de defunción de fojas 342, 344 y 375, repetidos a fojas 707 y 710, donde él figura firmándolos).

CUADRAGÉSIMO: Que, con la prueba aludida en los motivos precedentes, consistente en instrumentos públicos y declaraciones de testigos, presenciales y de oídas, según se ha venido analizando en cada caso, se ha demostrado fehacientemente que las víctimas don Luis Busch Morales, don Francisco Valdivia Valdivia y don Andrés Rojas Marambio, fueron detenidas el 4 y/o 5 de octubre de 1973, por un grupo denominado Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), y por personal militar, quienes posteriormente los trasladaron a dependencias del Retén Río Loa, también conocido como Dupont, dependiente de la Primera Comisaría de Calama (ésta a cargo de Raúl Aránguiz). Durante la permanencia en dicho Retén, las víctimas fueron interrogadas y sometidas a apremios físicos. Luego, dos de ellos Busch y Valdivia fueron trasladados a la cárcel de Calama, para finalmente, el día sábado 6 de octubre del mismo año, en horas de la tarde, ser llevados al Regimiento N° 15 de Calama, lugar en donde se decidió ejecutarlos, lo que se llevó a cabo a las afueras de la ciudad de Calama, en el sector de Cerro Topater. Que respecto de Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, se logró comprobar que fue detenido una primera vez el día 20 de septiembre de 1973 en horario de trabajo, por funcionarios de Carabineros, que fue llevado junto a otros compañeros de trabajo al Retén Dupont, interrogado bajo tortura y liberado el mismo día en horas de la noche. De eso dio cuenta doña Silvia Tapia Gallardo, su hijo Francisco Valdivia Tapia, que a la sazón tenía once años de edad, don Senedio Jiménez Rojas y don Germán Ramón Hidalgo Contreras a fojas 3182 y 3417, todas esas probanzas otorgan la presunción a este tribunal de que efectivamente Francisco Valdivia Valdivia fue detenido en una instancia previa, el día 20 de septiembre de 1973, por

funcionarios de Carabineros, siendo torturado y liberado el mismo día. Posteriormente, el 4 de octubre de 1973, en horas de la noche, fue detenido otra vez en su domicilio por un contingente de Carabineros y militares, siendo trasladado nuevamente al Retén Dupont, circunstancia que también fue acreditada, como ya se dijo. Posteriormente, el día 6 de octubre de 1973, fue trasladado a la cárcel de la ciudad y de ahí fue sacado alrededor de las 15,00 horas, lo que pudo ver directamente su cónyuge doña Silvia Tapia Gallardo, para ser trasladado al Regimiento de Calama. Por su parte, Andrés Rojas Marambio fue detenido el 4 de octubre de ese año, por funcionarios de Carabineros, quienes previamente andaban en su búsqueda, siendo trasladado al Retén Dupont, donde también fue duramente torturado, tanto es así que ni siquiera pudo identificar a doña Violeta Berríos Águila, quien lo vio y conversaron el día 5 de octubre en el Retén Dupont, y al día siguiente, el 6 de octubre de 1973 durante la tarde lo volvió a ver cuando estaba con el rostro desfigurado por los golpes recibidos, e intercambiaron algunas palabras antes que lo echaran en la parte de atrás de una camioneta. Otro testigo presencial de su estadía en el Retén fue el funcionario Ruperto Lara Muñoz. En cuanto a Luis Busch Morales, pese a no haber datos certeros del momento de su detención, la cual podría haber ocurrido el día 4 o 5 de octubre, se logra comprobar por los dichos del testigo Orlando Justiniano Aros y Rosa Sepúlveda Araya, consignados en las motivaciones precedentes, que al menos durante el día 6 de octubre de 1973, se encontraba en la Cárcel de Calama, desde donde fue retirado, para posteriormente llegar a dependencias del Regimiento de la ciudad. Que se ha logrado probar que para el día 6 de octubre de 1973, las tres víctimas se encontraban durante la tarde en dependencias del Regimiento N°15 de Calama, lugar desde donde fueron trasladados por un contingente de funcionarios del Ejército, al sector de cerro Topater, donde fueron fusilados, a las 18:30 horas aproximadamente, por un pelotón formados por funcionarios del citado Regimiento, comandados por un Teniente de Ejército.

CALIFICACIÓN JURIDICA DE LOS HECHOS:

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que, los hechos descritos en el motivo precedentes son constitutivos del delito de homicidio calificado, en grado de consumado, previsto en el artículo 391 N°1, circunstancia primera del Código Penal, puesto que el asesinato de los señores Francisco Gabriel Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, se ejecutó actuando los hechores con alevosía, esto es, sobre seguro, tratándose de tres personas que fueron detenidas por funcionarios de Carabineros del SICAR, quienes habiendo sido llevados previamente a otros recintos de detención e interrogados con aplicación de tortura, fueron trasladados el

día 6 de octubre de 1973 al Regimiento N°15 de Calama y, ese mismo día, en horas de la tarde, aproximadamente a las 18:30 horas, las tres personas fueron fusiladas en el Cerro Topater de Calama, en un contexto posterior al golpe militar en que las fuerzas militares tenían el control total y absoluto del país.

En este sentido, la alevosía es una calificante que actúa en la comisión del ilícito, que demuestra mayor peligro al bien jurídico protegido, la vida del ser humano, denotando un alto grado de peligrosidad por parte de los autores de estos ilícitos, quienes no tuvieron razones para temer el fracaso de su accionar y no corrían riesgos de ningún tipo desde que las fuerzas policiales y militares tenían el control absoluto del país, siendo mayor aun el reproche social de su actuar, por cuanto se desarrolló en relación a tres víctimas sometidas, superadas física y mentalmente, que no tuvieron posibilidad alguna de defenderse frente a ese ataque ilegal e injusto.

DELITO DE LESA HUMANIDAD:

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que, respecto de esos homicidios calificados, además, debe considerarse que de los antecedentes allegados al proceso fluyen algunos elementos para determinar cuáles fueron las verdaderas razones para detener a Valdivia, Rojas y Busch por los funcionarios de Carabineros, y si bien se les trató de vincular a un irrisorio plan terrorista, lo cierto es que queda claro que fueron razones políticas las que motivaron a los hechores a ultimar a las víctimas, lo cual constituye delitos de lesa humanidad, como se dirá a continuación.

El informe de fojas 1, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación indica que: "El 6 de octubre de 1973 fueron ejecutados, por resolución de un supuesto Consejo de Guerra celebrado en Calama. Las tres personas mencionadas fueron condenadas a la pena de muerte por Consejo de Guerra que según versiones oficiales se habría realizado en Calama el día 6 de octubre de 1973, acusados de participar en un intento de sabotaje a la planta de explosivos Dupont de la empresa Enaex. La versión oficial fue publicada en la prensa regional. Esta Comisión no obtuvo copia del proceso respectivo ni de la sentencia. Las ejecuciones se practicaron el mismo día en que se habría desarrollado el Consejo y los restos de los ejecutados no fueron entregados a sus familiares sino hasta dos años después, cuando se les indicó el lugar en que se hallaban sepultados y se les permitió exhumarlos." La referida corporación concluyó que: "La Comisión se formó convicción de que la muerte de Luis Busch, Francisco Valdivia y Andrés Rojas fue el resultado de un enjuiciamiento realizado al margen de toda legalidad,

incurriendo en una violación de su derechos humanos, en especial el derecho al justo proceso y a la vida, comprometiendo la responsabilidad de agentes del Estado". Según ya se dejó establecido, el ajusticiamiento de las víctimas correspondió a ejecuciones carentes de toda justificación, de responsabilidad de agentes del Estado, en violación de los derechos humanos más fundamentales, sin que se haya demostrado siquiera el intento de sabotaje que se les atribuyó. Es más, la persecución sufrida por las víctimas se da en un contexto de ubicación por parte del aparataje de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad de Calama, de todas aquellas personas militantes del Partido Socialista de la zona, u otros partidos contrarios al régimen militar. Si atendemos a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° N° 78.951-2016, en sentencia de 25 de mayo de 2017, en que manifestó: "CUARTO: Que, sin embargo, como reiteradamente ha señalado esta Corte y recoge acertadamente el recurso, se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes." Y más adelante el mismo fallo señala: "SEXTO: Que con ocasión del estudio del elemento de contexto del crimen de lesa humanidad, contenido en el preámbulo del artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la doctrina más autorizada ha señalado que dicho precepto convierte en crimen de lesa humanidad los actos individuales enumerados en dicha disposición, en tanto cumplan con el test sistemático general. Esta prueba se propone para garantizar que los actos individuales, aislados o aleatorios, no lleguen a constituir un crimen de lesa humanidad. Mientras que el término "generalizado" implica un sentido más bien cuantitativo: que un acto se llevará a cabo a gran escala, involucrando a un gran número de víctimas, la expresión "sistemático" tiene un significado más bien

cualitativo que requiere que el acto se lleve a cabo como resultado de una planificación metódica. Sin perjuicio que la jurisprudencia siempre ha optado por una lectura disyuntiva o alternativa de estos elementos, se ha destacado que lo más importante ya no es el significado aislado que aporta cada uno de estos elementos expresados de modo alternativo, sino el que adquieren al interconectarse, en la medida en que la "comisión múltiple" debe basarse en una "política" de actuación, sólo su existencia convierte múltiples actos en crimen de lesa humanidad. Este elemento -de la política- deja claro que es necesario algún tipo de vínculo con un Estado o un poder de facto y, por lo tanto, la organización y planificación por medio de una política, para categorizar de otro modo los delitos comunes como crimen de lesa humanidad (Ambos, Kai. "Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte Penal Internacional"); SÉPTIMO: Que en ese orden de ideas, cabe reiterar que el recurrente arguye que respecto de las hipótesis que prevén los crímenes contra la humanidad, a saber, el "ataque generalizado" y el "ataque sistemático" contra la población civil, en el caso de estos antecedentes nos encontramos frente a un ataque indiscriminado, que no exige que la víctima haya tenido una militancia política u opción política definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opción política de la víctima, lo cual supone que la propuesta de nulidad deriva de la consideración que el régimen imperante a la época de la muerte del ofendido, correspondió con una política estatal de control que autorizó a los agentes del Estado para detener, afectar la integridad e incluso privar de la vida a los ciudadanos. Por otro lado, consta de autos que con ocasión de estos hechos se instruyó un proceso militar por el 2do. Juzgado Militar de Santiago, Rol N°875-77, en que los agentes estatales no fueron considerados responsables de delito alguno, ya que fueron absueltos con fecha 10 de diciembre de 1980, lo cual pone de manifiesto que su actuar al menos contó con el beneplácito o tolerancia de los responsables de diseñar e implementar esta política estatal de control del orden público". El fallo de la Excm. Corte que se ha venido analizando, continuó razonando explicando que: "OCTAVO: Que en este contexto, los hechos que causaron la muerte de González Cerda a causa de las maniobras dolosas desplegadas por los funcionarios estatales pueden constituir un delito de lesa humanidad, pues es incuestionable, no sólo en atención a los hechos del proceso sino, además, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en la época se implementó una política estatal que consultaba la represión de posiciones ideológicas contrarias al régimen, pretendiéndose la seguridad interna al margen de toda consideración por la persona humana a través de maniobras de amedrentamiento a los civiles y, sobretodo, la garantía de

impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, entre otras actuaciones, lo que ha sido recogido en autos al encontrarse González Cerda en la nómina de víctimas de violación de sus derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza, conforme lo concluido por el Consejo Superior de la Comisión Rettig, según aparece del Informe que ésta evacuara sobre calificación de víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, lo que habilitó a la señora Fiscal Judicial para formular el requerimiento respectivo y solicitar la instrucción del sumario correspondiente". En la sentencia de reemplazo dictada al acoger el recurso de casación en el fondo la Corte dictaminó: "Que los hechos indagados se han producido en virtud de una política estatal de represión y control ejecutada al margen de toda consideración por la persona humana, amedrentando a la población y otorgando una garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, de manera que ellos no pueden ser calificados en modo alguno como un comportamiento negligente y menos de carácter común".

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN:

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que, la acusación fiscal se dirigió en contra de Claudio Hernán Mesina Schulz y a Adolfo Fernando Born Pineda, por homicidio calificado.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que en lo tocante a la participación atribuida a **Claudio Hernán Mesina Schulz**, éste declaró a fojas 2373 y en careos de fojas 2379 y 2380. A fojas 2373 manifestó que cumplió funciones de Notario en la ciudad de Calama entre el año 1968 y 1983, recuerda que en una ocasión lo fueron a buscar a su domicilio particular por orden del Ejército, ignora quien dio la orden, para certificar en su calidad de Notario hechos y nunca lo llamaron sin llegar a certificar nada. A los días siguientes lo fueron a buscar a su domicilio a eso de las 8:00 horas y le solicitan integrar un Consejo de Guerra, lo trasladaron al Regimiento y allí se encontró con Militares, cree que estuvo allí hasta las 15:00 horas, esperando que se hiciera el Consejo que nunca se realizó, luego se fueron a sus domicilios, al día siguiente supo de la muerte de una cantidad de personas, sin saber la forma y circunstancias de ello. Agrega que nunca cumplió funciones específicas de asesor en los Consejos de Guerra en la ciudad de Calama. En careo de fojas 2379, agregó que nunca participó en investigaciones, asesorías, Consejos de Guerra o como abogado defensor, según los dichos de Eugenio Rivera Desgroux, afirmando además, que sale de toda lógica que fuera abogado defensor y a la vez asesor. Asimismo, en careo de fojas 2380, señala que nunca participó en los hechos descritos por Luis Mario Aracena Romo, quien afirmaba que un

abogado de apellido Mesina, que asesoraba al Consejo de Guerra, había llegado con el Comandante Rivera, donde se produjo un incidente, y que ese abogado era de opinión que las penas debían ser más severas, señalando además, que las cosas que se estaban realizando no estaban bien.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que, la participación que se le ha atribuido a este acusado, de acuerdo a lo expresado por el imputado fallecido Rivera Desgroux, es haber intervenido en un Consejo de Guerra que se ha demostrado en forma categórica que no existió; además la testigo Rosalba Garmendia, quien refiere la existencia de un Consejo de Guerra respecto de las víctimas de este proceso, manifiesta que el abogado que estuvo de asesor fue Óscar Mardones Oyarzún y que no le sonaba para nada el abogado Claudio Molina Schulz; lo mismo expresó el imputado fallecido Óscar Figueroa Márquez a fojas 2372, donde señala que le suena el nombre Claudio Mesina Schulz, pero ignora quién sea y cuál es su oficio o profesión, no lo recuerda que haya tenido alguna participación en los hechos investigados.

Cabe tener presente, que sin perjuicio de la existencia en el proceso de declaraciones que sitúan al acusado Mesina como asesor de los Consejos de Guerra de la época, a saber, Luis Mario Aracena Romo a fojas 2375 vta., quien manifestó "Efectivamente y tal como he manifestado en mi declaración que he ratificado, estuve presente en por lo menos en dos Consejos de Guerra, ninguno de éstas con resultado de fusilamiento, estos fueron presididos por el Mayor Reveco. Recuerdo que había un abogado de apellido Messina, quién asesoraba al Consejo de Guerra y esta persona estaba muy molesta con el integrante de los Consejos, ya que era de opinión que las penas debían ser más severas"; Carmen Adelaida Hertz Cadiz a fojas 4001, quien declaró "Yo quisiera agregar que otro testigo de los hechos de Calama es un abogado de apellido Messina, que según los antecedentes que poseo sería notario de Santiago de una Notaría ubicada en Vicuña Mackenna entre Irarrázabal y Diez de Julio"; Víctor Ramón Santander Veliz a fojas 2377, quién refirió "Que otros funcionarios conformaron los Consejos de Guerra recuerdo a uno que falleció de nombre César Zavala, al mayor Reveco, también había un abogado que era nombrado por el Comandante, no recuerdo si era de grado, pero si era cercano, ese abogado debía asesorarnos en los Consejos, ya que nosotros éramos nulos en la materia y él nos guiaba y recuerdo que hace poco por unas de las calle de Santiago vi un letrado que indicaba el nombre de ese abogado, pero no recuerdo, esto en 10 de julio a mano derecha pasado Vicuña Mackenna y esto fue más o menos en el 1975 a 1977; respecto de abogado defensor, recuerdo que solo se nombraba a un oficial de ejército, lo cual consideré que no correspondía"; Carlos Georg Max Langer

Von Furstenberg a fojas 4073, quien declaró "No sé si efectivamente lo integraban, pero los Capitanes que yo me acuerdo de haber conocido allá, era el Capitán Flores, el Capitán Videla, un Capitán Araya, Capitán Madrid y había un abogado que veía la parte legal, me acuerdo que se llamaba Mesina, no sé el otro apellido. Es lo que se conversaba porque el Fiscal que era el Segundo Comandante del Regimiento no era letrado. Era el Comandante Oscar Figueroa. Siempre lo veía yo a este señor Mesina que iba al Regimiento, no sé qué labor desempeñaba, él era civil, sí"; A fojas 3844, Orlando Justiniano Aros sitúa en su Consejo de Guerra a un "Doctor Mesina", aseveración que coincide con lo que dan cuenta las sentencias de 8 de octubre de 1973, custodiadas a fojas 3550, donde figura como Auditor "Claudio Mesina Schulz". No obstante ello debe considerarse que el señor Justiniano manifestó que su Consejo de Guerra fue el primero que se realizó, lo que ratifica las conclusiones a las que ha arribado este sentenciador respecto a la inexistencia de un Consejo de Guerra el 6 de octubre de 1973.

A pesar de estar suficientemente comprobado que Messina Schulz colaboró activamente con el Ejército de Chile con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, actuando como auditor, esto es, acusador en los procesos en contra de los presos políticos, en lo que corresponde al hecho específico por el cual se ha enderezado acusación fiscal y particular en su contra, y descartada la veracidad de los dichos del partícipe Rivera Desgroux, no hay elemento de prueba alguno que lo sitúe en el lugar, día y hora de ocurrencia de los hechos, ni que haya prestado cooperación en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos a los mismos. Incluso considerando el hecho de que Messina mintió en su declaración al señalar que nunca participó en Consejos de Guerra u ofició como asesor, lo que se contrapone a lo que emana de las copias de las sentencias que condenaron al testigo Orlando Justiniano Aros y a Manuel Gallardo Gallardo. Es más, en algunos instrumentos públicos se demuestra también la participación de otro abogado asesor de los Consejos de Guerra de Calama, así consta en la sentencia de 12 de noviembre de 1973 del Consejo de Guerra de Calama agregada a fojas 338 y siguiente, y en resolución de fojas 378, donde figura como Auditor-Abogado el referido Mardones; lo mismo se advierte en la declaración compulsada de Wilson Rubén Pacheco Obreque de fojas 2452, quien refiere: "...existía una Fiscalía Militar en el regimiento de Calama que estaba a cargo de un civil, un abogado de apellido Mardones que, actualmente está fallecido. Junto con él trabajaba un suboficial de nombre Jerónimo Tomás Rojo y otro de apellido "Von Shasmann".

Que, no existiendo antecedentes concretos que demuestren la participación de Claudio Molina Schulz como cómplice, ni

autor en los hechos investigados en la presente causa se dictará sentencia absolutoria en su favor.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: En cuanto a la participación atribuida a **Adolfo Fernando Born Pineda**, deben considerarse las declaraciones que éste formuló en el proceso a fojas 2249, 2417, 2568 y 3283. Expuso que ingresó a la Escuela Militar en el año 1965, egresando como Oficial el día 1 de enero de 1970, como Oficial de Artillería, y que a principios del año 1973 fue destinado al Regimiento de Infantería Motorizada y Reforzado N° 15 Calama, llegando con el grado de Subteniente y ascendiendo a Teniente en el mes de febrero del año 1973, cumpliendo funciones en ese Regimiento hasta el mes de noviembre del año 1975, fecha en la que fue destinado a la ciudad de Santiago. Añadió que el día 11 de septiembre de 1973, se encontraba encuadrado en el Grupo de Artillería, siendo el Comandante el Mayor Fernando Reveco Valenzuela. Recuerda que ese día, en horas de la mañana, hubo una formación de todo el Regimiento y el Coronel Eugenio Rivera Desgroux, informó que se había producido un pronunciamiento militar y que las unidades de Calama tomarían el control de la ciudad, se había declarado Estado de Excepción o de Sitio y el Regimiento se haría cargo de la seguridad. Agregó que inmediatamente al grupo de artillería conjuntamente con otras unidades de Infantería, le correspondió asumir el control de la seguridad de servicios de utilidad pública en Chuquicamata, quedando la Segunda Batería en la Guarnición de Calama con otras unidades de Infantería. Refirió que a partir de ese momento comenzaron los servicios de guardia, como controles de las guardias de los servicios de utilidad pública en Calama, que consistían en la custodia de los servicios de utilidad pública, tales como instalaciones eléctricas, agua potable, hospitales, puentes, caminos y todo aquello que pueda entorpecer el desarrollo normal en la ciudad. Como oficial, le correspondió hacer rondas en vehículos, pero era mayormente el personal de Infantería que estaba apostado en esos lugares. Señaló que esa función la realizaron hasta el mes de noviembre del año 1973, fecha en la que fueron a relevar a parte del grupo que se encontraba en Chuquicamata. Añadió que en ese lugar estuvieron hasta el mes de diciembre del año 1973, fecha en la que regresaron al Regimiento de Calama. Añadió que no tiene nada que aportar sobre el fusilamiento de tres personas en la ciudad de Calama el día 6 de octubre de 1973, cuyos nombres corresponden a Francisco Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, personas a las que no conoció y que nada podría declarar al respecto. Agrega que tampoco le correspondió participar en ningún Consejo de Guerra, pues normalmente actuaban los Mayores y Capitanes. A fojas 2417 ratifica íntegramente la declaración policial de fojas 2249, donde vuelve a afirmar que sobre los hechos ocurridos en

Calama nada podría decir, por cuanto nada sabía y que además no participó en ningún Consejo de Guerra, ya que normalmente actuaban los Mayores y los Capitanes, y que tampoco nada podría decir de las tres personas fusiladas el 6 de octubre de 1973, cuyos nombres le fueron señalados como Luis Busch Morales, Andrés Rojas Marambio y Francisco Valdivia Valdivia, a quienes no conoció. Agrega que el grupo de Artillería al cual perteneció, casi completo se instaló en Chuquicamata y el resto en el mismo Regimiento de Calama, cumpliendo funciones de guardia y servicios en lugares de utilidad pública. Hizo presente, además, que a los hechos del 11 de septiembre de 1973, él tenía el grado de Teniente y que su mando era sobre su sección y todos los hechos por los cuales se le ha consultado relacionados al Estado de Sitio del País, a los Consejos de Guerra que se llevaron a cabo en Calama, son hechos que deben ser de conocimiento del Comandante del Regimiento N°15, don Eugenio Rivera Desgroux, y del segundo Comandante, don Oscar Figueroa Márquez, quienes serían los indicados para dar todos los antecedentes al respecto. Ante la pregunta si tuvo alguna participación en el fusilamiento de Luis Busch, Andrés Rojas y Francisco Valdivia, declaró que no tuvo participación de ninguna índole, menos de otras personas. Respecto de la pregunta en relación a la declaración prestada por un funcionario del Ejército, que ha señalado que Adolfo Born cumplió funciones de "Jefe de Pelotón" de fusilamiento y que él le habría dado instrucciones al respecto, declara que es totalmente falso, que jamás sucedieron esos hechos y volvió a señalar que quién debería saber estos antecedentes son el Coronel Rivera Desgroux y Oscar Figueroa Márquez. A fojas 2568 ofreció nueva declaración judicial, donde aclaró que al prestar indagatoria de fojas 2417, cuando se le hace una pregunta y manifestó que no era la persona, al llegar a su vehículo trató de ordenar las ideas y empezó a hacer un retroceso. Señaló que a la fecha de los hechos él tenía 23 años de edad, era un Teniente recién ascendido y recuerda que fue llamado por el Teniente Coronel Óscar Figueroa Márquez para que se presentara en la oficina del Comandante del Regimiento y Juez Militar Eugenio Rivera Desgroux. Al llegar a ese lugar, estaban ellos dos y el Comandante Rivera le comunica que por resolución de un Consejo de Guerra se había determinado la pena de muerte de tres personas, que habían sido sorprendidos con explosivos y que pretendían efectuar un sabotaje en la planta de explosivos Dupont. Adujo haberle manifestado que no estaba preparado por su edad, por su grado y por la experiencia para el cumplimiento de lo que se le ordenaba, solicitándole al Comandante del Regimiento que le eximiera de dicha labor, quien no aceptó, explicándole que era todo legal, por resolución de un Consejo de Guerra. Añade que en vista de lo sucedido, viendo que no podía eludir la orden entregada, y

considerando los tiempos que se vivían (Estado de Sitio), lo que implicaría que el no cumplir la orden, podría ser sancionado por el Código de Justicia Militar, tuvo que efectuar lo ordenado. Agregó que al salir de la oficina, muy afectado, conversó con Jorge Mandiola, Oficial de su batería a quien le comentó esta situación, no recordando qué le manifestó. Respecto del Consejo de Guerra, indicó que no podría decir quiénes lo integraron, pero que sí podía decir que el Juez Militar era Eugenio Rivera Desgroux. Ignora quiénes integraron el Pelotón de Fusileros, y no haberlos designado él, añadiendo que deben haber sido unos cinco a seis clases. Tampoco recuerda que les haya manifestado que fueran certeros para así evitar el sufrimiento de las personas, pero admite que debe haber dado instrucciones al personal de dicho pelotón. Respecto del fusilamiento propiamente tal, refirió que este debe haber sido en forma secuencial. En cuanto a si se efectuó un tiro de gracia, recordó que alguien más antiguo que él, le dijo que fuera a dar el tiro de gracia, lo cual no se llevó a efecto, por cuanto el médico Luis Rojas Delzo le manifestó que no era necesario, ya que el fusilado estaba fallecido. Añade que las personas que estaban en el fusilamiento, eran el doctor ya señalado, el capellán Luis Jorquera, y supone que debe haber habido algún oficial más antiguo que él. Además, consignó que el proceso de fusilamiento ordenado por el Consejo de Guerra se efectuó de acuerdo a lo reglamentario. A fojas 3283, aclaró que al ser consultado por primera vez por el fusilamiento de tres personas, manifestó que no tenía antecedentes porque fue un evento muy traumático para él. Posteriormente se le volvió a llamar, y se le consultó si él había participado en el Consejo de Guerra, respondiendo que no y que había participado en el pelotón de fusilamiento. Respecto a la declaración judicial de fojas 2568, la rectificó, señalando que su motivación en esa oportunidad fue ampliar la declaración pasada, por cuanto ante la consulta de haber participado en un Consejo de Guerra, él manifestó que no lo había hecho, obviando en esa oportunidad su participación a cargo del pelotón de fusilamiento, todo lo anterior debido a que quiso previamente ordenar los recuerdos para hacer más fehaciente su declaración ampliada. Si bien ignora quiénes integraron el pelotón de fusileros, supuso que eran de la Segunda Batería, a la que él pertenecía. Indicó que el pelotón de fusilamiento procedió en forma secuencial con cada uno de los detenidos y en forma legal. Respecto a los tiros de gracia, relata que no se efectuaron, ya que el Fiscal Militar, Óscar Figueroa Márquez, le comunicó que no era necesario, atendido lo señalado por el médico que estaba presente. Añade que el Coronel Eugenio Rivera, en presencia de Oscar Figueroa Márquez, le manifestó que era un asunto legal, que estas personas habían sido detenidas por

carabineros, por intentar hacer volar una fábrica de explosivos ubicadas en Dupont. Señala que estaban en Estado de Sitio y que fue una orden emanada de un Tribunal Militar en Tiempo de Guerra. No sabe qué podría haber pasado con él si no cumplía la orden, atendido a lo dictaminado por el Código de Justicia Militar. Refirió que en ese momento estaba el Coronel Óscar Figueroa Márquez, el médico Luis Rojas Delzo, el capellán Luis Jorquera, junto a otras personas del pelotón de fusilamiento. Recuerda que cuando comenzó a colocar a las personas del pelotón, Márquez le dijo que estuviese tranquilo, que todo este tema iba a pasar. Señaló que quedó traumatado con este tema, ocurrido el 6 de octubre de 1973, añadió que él estaba de cumpleaños el 9 de octubre de 1973, y que le dio cuenta de su estado al señor Figueroa y a Mandiola. Declaró desconocer si este Consejo de Guerra se realizó correctamente, si estas personas tuvieron defensa. Desconoce cuándo los detuvieron, y señaló que a él solamente le dijeron que carabineros los detuvo, y que él como Teniente no tenía por qué saber todo ese tema. Refirió tener la impresión que la defensa no fue tal. No vio nunca la sentencia y nunca ha entendido por qué razón las actas de los Consejos de Guerra se incineraron, porque es el documento que a ellos les legitima que hubo un Tribunal constituido legalmente que les dio la orden. Agregó haber ido a los Archivos del Ejército a buscarlo, sin obtener resultados. Añade que Óscar Figueroa Márquez le dijo con el tiempo que en el Consejo de Guerra habían participado solamente carabineros, estando presente en esa conversación Álvaro Romero. Refirió haberle dicho que era imposible que a él le hubiese ordenado eso algún funcionario de carabineros.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, Adolfo Fernando Born Pineda, quien a la época de los hechos tenía el grado de Teniente, según su Hoja de Vida Agregada a fojas 3704, cabe considerar que después de haberlo negado en sucesivas declaraciones policiales y judiciales en este proceso, al ser contrastado con los dichos de funcionarios en retiro del Ejército que lo sindicaban como comandante del pelotón de fusileros, confesó haber participado en el fusilamiento de las tres víctimas de autos; aunque afirma haber actuado por orden de sus superiores jerárquicos, a saber, Eugenio Rivera Desgroux y Óscar Figueroa Márquez, argumenta que lo habría hecho en virtud de un dictamen de un Consejo de Guerra, el que le fue informado por el Comandante Rivera, cuando lo mandó a buscar a fin de informarle su designación para dirigir el pelotón de fusilamiento. De sus declaraciones emana que dicha designación fue verbal, sin mediar un documento escrito, y sin exhibirle sentencia alguna que condenara a las víctimas. Confiesa además que es él quien da la orden de fusilarlos, dirigiendo el pelotón de fusilamiento, y aunque no admite haber dado tiro de gracia a alguno de los fusilados, como sí

indicaron los funcionarios que participaron del pelotón y del cordón de seguridad del lugar en que se perpetró el asesinato, lo cierto es que también de la autopsia de don Luis Busch se desprende claramente que recibió un disparo en su cabeza desde atrás hacia adelante, lo que permite corroborar lo que dijeron los funcionarios y que niega el acusado. Esta confesión reúne los requisitos del artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, y permite tener por acreditada su participación como autor en los delitos de homicidios calificados de don Francisco Valdivia Valdivia, don Andrés Rojas Marambio y don Luis Busch Morales, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, lo que se corrobora con las declaraciones consignadas en el considerando 34 de esta sentencia. Además, su versión de los hechos coincide en parte con lo declarado por Óscar Figueroa Márquez, en el sentido de que este último habría sido quien designó a Born para el cometido a llevar cabo. En su última declaración judicial, de fojas 3902, Figueroa afirmó que él propuso a Born, puesto que debía ser un Teniente el que dirigiera el fusilamiento. Por su parte, Born indica que fue llamado al Regimiento por Figueroa, quienes se reunieron con Rivera Desgroux. En lo que no coinciden, es en la respuesta de Born ante la designación. Mientras éste afirma haber solicitado que lo liberaran de su cometido, Figueroa refiere no recordar que Born le haya manifestado que no quería hacerlo. Sin perjuicio de ello, Adolfo Born está confeso de haber acatado la designación. Por otra parte, indica que posterior a la reunión con Figueroa y Rivera, le comenta lo sucedido a Jorge Mandiola, quien se desempeñaba como oficial de su batería. Al respecto a fojas 3279, 3867, 3882 y 4429 Jorge Camilo Mandiola Arredondo, en consonancia con lo informado por el Ejército a fojas 69, refirió que permaneció en el Regimiento N° 15 de Calama desde el año 1973 hasta el año 1976, en la Segunda Batería del Grupo de Artillería, donde en ese tiempo era Subteniente para luego ascender a Teniente, desempeñándose como Oficial Instructor. Agregó que entre los oficiales recuerda al Teniente Fernando Born, entre otros. A fojas 3882, agregó que el Consejo de Guerra y fusilamiento, fue ejecutado por una orden formal, nada ilegal, por parte del señor Born, todo lo cual le consta por conversaciones que tuvieron entre ambos en el casino de oficiales durante la noche en que ocurrió el fusilamiento. Que, según todo lo que escuchó, efectivamente el fusilamiento ocurrió debido a que antes hubo un Consejo de Guerra. Afirma que el Capitán Flores Figueroa debe tener mucha información al respecto, debido a que alguna orden debe haber pasado por él, que debe haber dispuesto vehículos o gente de su unidad. Sin embargo, a fojas 4430 vta., el mismo deponente declara: "el Comandante del Regimiento podía nombrar al que él considerara que era apto para esa función". Esto último

coincide con lo declarado por Domingo Flores Figueroa a fojas 3281 (quien además depone a fojas 3731), refiriendo que sus funciones en 1973 en el Regimiento Calama eran de Comandante de la Segunda Batería hasta el 29 de mayo de 1974 (lo que es corroborado con lo informado por el Ejército de Chile a fojas 69, siendo el superior jerárquico de los señores Born y Mandiola). Por otro lado, a pesar de que a fojas 3739 reconoce que él daba las órdenes a sus subalternos, Flores también declara lo siguiente: "en ese tiempo el Segundo Comandante me parece que era, me pide a mí la participación del Teniente Born y un vehículo, era prácticamente habitual dentro de la Unidad puesto que nosotros pasábamos los camiones a Infantería porque no tenían vehículos, eran muy escasos, nunca me dijo qué actividad específica él iba a desempeñar. A mí me pidieron un Oficial y un camión, pero no me dijo que actividad específica iba a comisionar, esa era la situación. Posteriormente, cuando él regresó de esta misión ahí lo vi muy afectado, dentro de ello, nadie dijo yo participé en esto, o yo vi cuando estas personas fueron fusiladas, a nadie le comentaban, a mí me dio la impresión de haberlo visto tan afectado que posiblemente después que ocurrieron los hechos, (pensó que) él a lo mejor estuvo presente allí cuando ocurrió esta situación puesto que lo vi bastante afectado en su ánimo, pero lo concreto es que cuando a mí el Segundo Comandante me pide el Oficial y me pide los vehículos no me dice mire él va a desempeñar tal actividad determinada, me los pidió nomas". Luego agrega que el Segundo Comandante era Óscar Figueroa Márquez. Enseguida señaló: "Cuando ocurrieron los hechos, ese mismo día en la tarde prácticamente todo el mundo sabía lo que había ocurrido, por supuesto que sí. Ya se había dado a conocer dentro del cuartel lo que había ocurrido con estas personas". Por tanto, la declaración del señor Flores Figueroa, se ajusta a lo declarado por Figueroa Márquez, en el sentido de que este último había propuesto la designación de Born. Y si seguimos la lógica de lo declarado por Jorge Mandiola, respecto a que Eugenio Rivera Desgroux podía designar prácticamente a quien quisiera, nada obsta a que Óscar Figueroa Márquez, a la época Segundo Comandante del Regimiento de Calama, y por tanto, superior de Domingo Flores Figueroa, pudiera haber dispuesto también la designación de Adolfo Born.

Habiéndose acreditado la participación de este acusado como autor inmediato y directo de los asesinatos de don Luis Busch, de don Francisco Valdivia y de don Andrés Rojas, se dictará sentencia condenatoria en su contra.

CONTESTACIONES DE LAS ACUSACIONES

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que a fojas 4308 el abogado Ismael Hernán Olivares Swett, en representación del acusado Claudio Hernán Mesina Schulz, contestó la acusación fiscal y las

acusaciones particulares. Solicitó la absolución de su representado por falta de participación, en subsidio la recalificación del grado de participación de cómplice a encubridor del artículo 17 N°4 del Código Penal, se acoja la modificatoria de responsabilidad de media prescripción, irreprochable conducta anterior del artículo 11 N°6 y colaboración sustancial del artículo 11 N° 9 del Código Penal. Respecto a la acusación particular de la AFEP, solicita que se rechacen las agravantes del artículo 12 N°8, 10 y 11, respecto a la acusación particular del Programa solicita que se rechace la agravante del artículo 12 N° 8, por último solicita para el caso que se dicte sentencia condenatorio alguna de las penas sustitutivas de la Ley N°18.216.

Que no habiéndose establecido la participación de Claudio Mesina en los hechos investigados, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de las alegaciones de su defensa.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que a fojas 4376 el abogado Maximiliano Eduardo Murath Mansilla, en representación del acusado Adolfo Fernando Born Pineda, contestó la acusación fiscal, adhesiones y acusación particular solicitando la absolución de su defendido.

Alegó la eximente de responsabilidad penal consistente en error de prohibición indirecto, la que funda en que se vio afectada en este caso la conciencia de la antijuridicidad, "que se haya constituido concretamente en la noción errada por cierto de hallarse la conducta desplegada, justificada por la concurrencia de una causal de liberación (en realidad inexistente), cual fue la de existir una orden legítima que disponía la concreción de un hecho típico". Sostiene que hubo una orden de fusilamiento, dictada por el alto mando, por un órgano competente, en el ejercicio de sus funciones, lo que basa en un oficio del Comandante del CAJSI, el General Joaquín Lagos Osorio de 30 de octubre de 1973, en donde señala una lista de 10 personas que fueron ejecutadas por Resolución del Cajsi y se indica además las personas ejecutadas por orden del Comandante en Jefe del Ejército (55 personas) y en el Item IV Calama se ordenó por el Cajsi fusilar a don Luis Busch Morales, don Andrés Rojas Marambio y don Francisco Gabriel Valdivia Valdivia. Enseguida, refiere la validación de la orden de fusilamiento por la autoridad militar y jurisdiccional del Regimiento y por la Fiscalía Militar del Regimiento, basado en lo que sostuvo Figueroa Márquez, que Rivera Desgroux le solicitó un oficial para cumplir la orden y resolución del fusilamiento dispuesta por el CAJSI, sea o no esta una resolución tomada en un Consejo de Guerra. La continuación del conducto regular de los fusilamientos hacia el comandante de la Batería, respecto de

lo cual indica que cuando el comandante del regimiento aceptó la propuesta de Born, el segundo comandante Figueroa Márquez le pidió formalmente al Capitán y comandante de la Segunda Batería de Artillería del regimiento de Calama Domingo Flores Figueroa que disponga del teniente Born y de un vehículo y personal, lo que reconoció dicho capitán al deponer en los autos. Añade como fundamento de la eximente alegada, que en este caso existió un estatus distinto y legal de estos fusilamientos con los demás fusilamientos ad hoc y las circunstancias que rodearon los fusilamientos, eran parte del conducto regular de una condena a muerte. Lo que apoya en que Figueroa Márquez habría indicado que los únicos en situación de condena de muerte fueron los tres fusilados, de lo que deduce el defensor que se estaría refiriendo a que fueron sentenciados, a diferencia de los fusilados por la Caravana de la Muerte Calama, lo que según el señor defensor, también se refrendaría con el oficio de Joaquín Lagos, en el hecho que se hubiese habilitado un lugar para el cumplimiento del fusilamiento según lo informado por la PDI, y no en cualquier lugar y de cualquier forma. Añade asimismo lo informado por Rosalba Garmendia quien señaló que las víctimas pasaron por la Fiscalía, previo a su condena a muerte, donde estaba ella a dejar testimonio de su última voluntad y habrían pasado a dejar sus pertenencias a la Fiscalía. Refiere también los dichos de Clemente Ávalos Zúñiga, quien dio cuenta de la dinámica del fusilamiento, de Germán Gautier Arroyo, sobre lo mismo; la declaración de Juan Carlos González quien señaló que estuvieron en el fusilamiento el médico de la Unidad y el capellán de Ejército Jorquera; los dichos de Jorge Mandiola Arredondo, quien manifestó que al cumplir la orden de fusilamiento el Teniente Born se vistió de uniforme de salida, de manera totalmente formal, cuando ejecutó la orden de fusilar. Sumó a lo anterior los dichos de Rivera Desgroux, sobre la condena a muerte dispuesta por un Consejo de Guerra y cuya ejecución debía hacerse de acuerdo a la legislación vigente, los certificados de defunción de las tres víctimas emitidos por el Servicio de Registro Civil, que aluden a un fusilamiento. Alude también a las circunstancias posteriores al fusilamiento que eran parte del conducto regular de una condena a muerte, para lo cual cita los dichos de doña Grimilda Sánchez, quien refirió que el párroco del Ejército le devolvió el anillo de su marido el 7 de octubre de 1973; de Silvia Castillo, quien recibió la información del fusilamiento de su marido Francisco Valdivia del mismo sujeto, el informe de la PDI que señaló que los cuerpos fueron llevados después al cementerio. Reitera también el informe de Joaquín Lagos, de 31 de octubre de 1973, a Pinochet. Argumentó también sobre el estado de excepción constitucional del Estado de Sitio y la formación de los tribunales militares, que enmarcan el contexto de los hechos;

respecto de lo cual cita los dichos de Figueroa Márquez sobre la decisión del Comandante sobre la conformación de esos tribunales a partir del 11 de septiembre de 1973 y el Decreto Ley N°3 de 11 de septiembre de 1973 que dispuso el estado de sitio por conmoción interna, el Decreto Ley N°5 y el Decreto Ley 641. La circunstancia de la existencia de un Consejo de Guerra, previo a la resolución del CAJSI, que en su concepto, justifican más la legalidad de la resolución que enmarcan el contexto de los hechos, respecto de lo cual cita los dichos de Jorge Márquez González, Álvaro Romero Reyes, un informe de la PDI de fojas 1771, dichos de Rosalba Garmendia sobre el hecho que las víctimas habrían pasado a la Fiscalía a dejar testimonio de su última voluntad, los dichos de Juan Carlos González, sobre la existencia de un Consejo de Guerra y la declaración de Rivera Desgroux. Añade a los aspectos precedentes, las circunstancias de la detención de las personas fusiladas, y al efecto los dichos de Jorge Márquez González, quien habría tenido conocimiento que fueron sorprendidos transportando explosivos en una ambulancia y que fueron sometidos a un Consejo de Guerra, lo que daría también cuenta el informe de fojas 1771 y siguientes de la PDI. Finalmente alude a las circunstancias personales del Teniente Born, su edad, el hecho de haber sido recién ascendido a teniente, que era un oficial subalterno, y tenía nulo conocimiento sobre cumplimiento de sentencias de Consejos de Guerra, que habría solicitado que dieran esa función a alguien de más grado y experiencia, que el Fiscal Militar Figueroa Márquez tuvo que calmarle los nervios para que pudiera ejecutar los fusilamientos como oficial a cargo del pelotón de fusileros y que después de eso habría quedado muy afectado y afligido.

Opuso subsidiariamente como excepciones de fondo la prescripción y la amnistía.

QUINCUGÉSIMO: Que, respecto del error de prohibición, se basa principalmente en que debió cumplir una orden de sus superiores que se desempeñaban como CAJSI (Comandos de Acción Jurisdiccional de la Seguridad Interior), respecto de lo cual comienza señalando que esto haya existido o no un Consejo de Guerra. En relación al mentado Consejo de Guerra, ya se dejó suficientemente establecido que no existió y esa versión surgió para justificar los asesinatos; pero de cualquier manera, haya sido una orden del Comandante del regimiento, como Juez Militar o de un Consejo de Guerra, igual correspondía al menos solicitar la copia de la sentencia o la orden por escrito, lo que el mismo acusado niega haber visto. Y en cuanto a su petición de ser relevado de esa orden, están solo sus dichos, y lo que ahora recién viene a indicar Jorge Mandiola sobre lo que Born le habría contado esa noche; sin embargo, Figueroa Márquez consultado específicamente sobre

eso, señaló que esa petición no había existido. Este acusado había ascendido a Teniente a comienzos de 1973, así que no estaba recién ascendido. Y la circunstancia de haber existido estado de sitio por conmoción interna, en nada cambiaba que no podía cometer un delito tan atroz como el que se está investigando; sus derechos a representar la orden no fueron derogadas por los decretos leyes que indica el señor defensor, pero como se dijo, no lo hizo.

En cuanto al informe policial de fojas 1771 y siguientes, cabe señalar que la revisión completa de ese informe permite apreciar que solo Germán Gautier Arroyo se refirió a los hechos que nos ocupan, y en base a esos dichos el policía Vallejos, concluyó lo que refiere el defensor.

En cuanto a los dichos de Rosalba Garmendia y la declaración de última voluntad de las víctimas, cabe señalar que esta testigo no resultó confiable en nada de lo que expuso, incluso en esa última voluntad, porque ella sostuvo que Busch pidió dejar sus pertenencias a su conviviente doña Grimilda Sánchez, sin embargo, los militares que participaron del fusilamiento refieren que las especies fueron entregadas al cura Jorquera y Grimilda Sánchez señala que este sujeto le hizo entrega del anillo al día siguiente; resulta absurdo, entonces, que se haya efectuado una declaración de voluntad y que no se hayan entregado en ese momento las especies.

El oficio de Joaquín Lagos Osorio, es posterior al fusilamiento y allí se pretende deslindar responsabilidades respecto de las matanzas que realizó la Carava de la Muerte dirigida por Arellano Stark, por orden de Pinochet; en lo demás no demuestra que la decisión de eliminar a estas tres víctimas haya sido justificada o que se hayan llevado a cabo respetando mínimas reglas de debido proceso.

QUINCUGÉSIMO PRIMERO: Que, es cierto que a la época en que ocurrieron los hechos, hacía poco tiempo que se había producido un golpe militar y a consecuencia de eso las fuerzas armadas habían tomado el completo control del país, pero el estado de excepción constitucional no dejó sin efecto las normas elementales de la obediencia debida. Y si bien queda en evidencia la existencia de órdenes verbales en el curso de los acontecimientos, que tendían notoriamente a la perpetración y consumación de los delitos, estas no cumplen con las exigencias que impone el artículo 214 inciso 2º del Código de Justicia Militar en relación a los artículos 334 y 335 del mismo de ese código, por cuanto dichas órdenes si bien fueron imperativas y dadas por superiores jerárquicos a subordinados para exigirles una acción, ellas han versado sobre la consumación y encubrimientos de delitos, por lo que carecerían de legitimidad de acuerdo al artículo 19 del Código de Justicia Militar, con intereses extraños al ámbito

militar. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 334, las órdenes imponen la obligación de ser obedecidas por los inferiores cuando se reúnen los requisitos siguientes: 1.- La existencia de una orden de un superior; 2.- Que esta orden sea relativa al servicio; 3.- Que la misma sea dada en uso de sus atribuciones legítimas y 4.- Y en el caso que la orden tienda notoriamente a la perpetración de un delito, ésta se haya representado por el inferior e insistida por el superior.

Resulta obvio que estas normas versan sobre el cumplimiento de una orden de servicio, es decir, propia de la función militar y que aquel que la ordena, la dé en uso de sus atribuciones legítimas, lo que no ocurre en la especie, ya que en ninguna normativa se consigna como orden relativa al servicio la ejecución de seres humanos.

QUINCUGÉSIMO SEGUNDO: Que, el acusado ha admitido que no vio sentencia alguna, y era lo menos que podía exigirse a un oficial de Ejército, que tuviera a la vista la decisión, porque no se trataba de un simple patrullaje o algún allanamiento, debía ejecutar a tres personas, y su aludida corta edad no podía excusarlo de conocer las disposiciones del Código de Justicia Militar.

Atendido a que el defensor ha argumentado sobre la situación física e intelectual de su defendido y la situación anímica o emocional posterior al fusilamiento, cabe considerar que pareciera que la elección de Born para comandar a los fusileros no fue al azar, teniendo en cuenta que el Regimiento N°15 de Calama era una gran unidad militar y habían muchos oficiales que pudieron ser electos para cumplir esta función, entonces surge la interrogante, ¿por qué él?. No hay antecedentes sobre eso, únicamente existe la información que al poco tiempo lo mandaron a hacer un curso de inteligencia y que según su hoja de vida, posteriormente se desempeñó en la Dirección de Inteligencia del Ejército, si bien esa información no aclara porque fue elegido para ejecutar a las víctimas, si da algunas luces que no se trataba de un simple oficial recién ascendido a teniente, como sostiene su defensa.

Por lo que se ha venido considerando se rechaza la eximente de responsabilidad criminal de error de prohibición, ya que no puede atenderse a que un oficial de ejército, creyera que podía cometer delitos en contra de civiles en cumplimiento de una orden de su superior, lo que se le debía exigir es que en esa situación debía representar la orden, o al menos que se le exhibiera la sentencia que decretaba la pena de muerte de las tres víctimas, lo que no hizo y no puede invocar ignorancia en cuanto a las normas del Código de Justicia Militar.

Además, el acusado concurrió con su voluntad para ser parte del fusilamiento encomendado, y en el caso particular de Born, teniente de la Segunda Batería del Regimiento de Calama, resulta lógico concluir que sus acciones en ese puesto de mando, le permitieron tener pleno conocimiento de la ilicitud del fusilamiento encomendado, por cuanto su reacción al recibir la noticia de su designación, según lo que él expresa fue de tratar de eludir la labor. Además, otros deponentes declaran haberlo visto mal anímicamente, antes y después de ocurrido el fusilamiento. De no haber tenido consciencia de lo injusto de su actuar, otra habría sido la reacción de este acusado. Por tanto, no resulta correcto considerar en este caso que se hubiese actuado por error, descartándose la petición de la defensa.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, en relación a las excepciones de Amnistía y prescripción, se reproducen para su rechazo las motivaciones quinta a décimo segunda de esta sentencia.

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL:

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que el abogado don David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), a fojas 4242, dedujo acusación particular en el sentido que se considere la concurrencia de las agravantes establecidas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, estas son, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable, ejecutarlo con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia y con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Por lo anterior, solicita se imponga a los acusados: 1) Adolfo Fernando Born Pineda, la pena de presidio perpetuo, como autor de tres delitos de homicidio calificado, en grado de consumados y 2) Claudio Hernán Mesina Schulz, la pena de presidio perpetuo, en calidad de autor de tres delitos de homicidio calificado en grado de consumados; solicitando asimismo la aplicación de la regla de reiteración de delitos prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, y por último que se imponga a todos los acusados las penas accesorias legales y costas de la causa.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que, a fojas 4252, el abogado Álvaro Aburto Guerrero, por el Programa de Derechos Humanos, dedujo acusación particular en relación a la concurrencia de la circunstancia agravante prevista en el numeral 8 del artículo 12 del Código Penal, esto es, valerse del carácter público que tenga el culpable. Pidió que se les impusiera a Adolfo Fernando Born Pineda y a Claudio Hernán Mesina Schulz, la

pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, en calidad de autores del delito de homicidio calificado consumado. Asimismo, solicitó se imponga a ambos acusados las penas accesorias correspondientes y la aplicación de la regla de reiteración de delitos prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal.

QUINCUGÉSIMO SEXTO: Que no perjudica al acusado la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 12 N° 8 del Código Penal, esto es, prevalencia del carácter público esgrimida, toda vez que si bien Adolfo Fernando Born Pineda, al momento de cometer el delito detentaba la calidad de miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden, en virtud de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Punitivo, dicha causal de agravación es incompatible con el delito que nos ocupa, un crimen de lesa humanidad, en que el abuso de la calidad de funcionario público -agente del Estado- constituye un elemento integrante del tipo.

Lo mismo ocurre con la agravante del artículo 12 N°11, del código punitivo, esto es, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, porque el homicidio calificado, lo es por haber actuado sobre seguro, ante víctimas que no podían ejercer ninguna resistencia, y esa figura conlleva un agravamiento del injusto, de tal manera que la forma en que se ejecutó también constituye un elemento integrante del tipo.

En cuanto a la agravante de cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia, regulada en el N°10 del artículo 12 del código sancionador, también será desestimada, teniendo en consideración para ello que este delito si bien es cierto se ejecutó cuando se había decretado estado de sitio por conmoción interna, lo cierto que, ese fue un estado de guerra presunto y no real, porque "conmoción" de conformidad al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en lo que podría aplicarse a esta situación, consiste en: "tumulto, levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo", circunstancia que no aconteció en la especie, desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control del país en forma inmediata, por lo expuesto, se desestimaré también esta agravante.

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.

QUINCUGÉSIMO SÉPTIMO: Que a fojas 4376, el abogado Maximiliano Eduardo Murath Mansilla, en representación del procesado Adolfo Fernando Born Pineda, invocó las atenuantes del artículo 11 N°6, 11 N°9, 211, 214, error de prohibición,

prescripción gradual y solicito se aplique alguna de las medidas alternativas de la Ley N°18.216.

Que se acogerá la minorante prevista en el N°6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior del encausado, lo que se comprobó con el extracto de filiación agregado a fojas 3650, exento de anotaciones pretéritas y los dichos de los testigos Cristhian Patricio Moreira Barros, Francisco Tomás Balart Páez, y de Luis Raimundo Gazitúa Larraín de fojas 4427 y siguientes, que dieron cuenta de su conducta irreprochable. Sin embargo, de los antecedentes, e incluso de los dichos de los testigos antes referidos no se desprenden antecedentes que permitan sostener que esa conducta excede al comportamiento esperado en una persona normal, por manera que no se calificará la atenuante.

Que en cuanto a la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, prevista en el numeral 9° del artículo 11 del código sancionador, se debe considerar que no obstante que en sus primeras declaraciones el acusado negó tener conocimiento de los hechos, lo que mutó cuando ya se habían reunido elementos probatorios que lo sindicaban como el que mandó el grupo de sujetos que fusilaron a las víctimas, lo cierto es que cuando corrigió sus dichos entregó detalles precisos y coincidentes con lo expresado por los demás testigos, varios de los cuales testificaron con posterioridad a su reconocimiento de participación, además él pudo mentir señalando que si había visto una sentencia o una orden escrita que le instruía ejecutar a las víctimas y no lo hizo, con lo cual se puede considerar que su colaboración ha sido sustancial y así se le reconocerá. Esos antecedentes no son suficientes para calificar la conducta porque la admisión de responsabilidad no se produjo espontáneamente sino en la forma que se ha dado cuenta precedentemente.

QUINCUGÉSIMO OCTAVO: Que, en lo que dice relación a la eximente incompleta del error de prohibición, o de la antijuridicidad de la conducta, que el defensor en este acápite fundamenta en que habría existido un error del sujeto activo, pero que no se da el requisito de la evitabilidad, también será desestimada porque la atenuante invocada, referida al artículo 11 N°1, en relación con el artículo 10 N°1, ambos del Código Penal, que hace valer, dice relación con los actos del loco o demente, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón; lo que no puede ser asimilado al error de prohibición que se invocó como eximente. Aún de admitirla por analogía, la circunstancia de ser evitable el error, lo hace desaparecer completamente, más aún si se considera que se trata en la especie de un militar profesional, en grado de oficial, quien posteriormente fue enviado a realizar un curso

de inteligencia, no puede considerarse que le faltó conocimiento para darse cuenta del error de una conducta que implicaba nada menos que la ejecución de tres personas.

QUINCUGÉSIMO NOVENO: Que respecto de las atenuantes, en lo que atañe a la circunstancia prevista en el artículo 211 en relación al 214 del Código de Justicia Militar que establece: "Fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Y si ellas fueren relativas al servicio podrán ser consideradas como atenuantes muy calificadas" y el artículo 214 Código de Justicia Militar, que dispone: "Cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable salvo el caso de concierto previo, en que serán responsables todos los concertados".

Que el artículo 211 del Código de Justicia Militar, sobre obediencia indebida, dispone que fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico.

Que, en primer término, dicha norma resulta inaplicable a los delitos de lesa humanidad, como el que nos ocupa, toda vez que las sentencias del Tribunal de Nüremberg, que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establecieron que cualquier persona puede y debe ser capaz de discernir que los crímenes de lesa humanidad jamás pueden ser considerados como parte de sus deberes como soldado.

Que, por su parte, el artículo 214 inciso 2º del Código de Justicia Militar dispone que el inferior será castigado con la pena inferior en un grado a la asignada por la ley al delito cuando haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio y no hubiere cumplido con la formalidad de representarla a su superior. En consecuencia, para que opere la regla de determinación de pena del inciso 2º del artículo 214 del Código de Justicia Militar es necesario que se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio.

Que dicha norma tampoco resulta aplicable a los delitos de lesa humanidad, toda vez que, como se dijo precedentemente, las sentencias del Tribunal de Nüremberg, que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establecieron que cualquier persona puede y debe ser capaz de discernir que los crímenes de lesa humanidad jamás pueden ser considerados como parte de sus deberes como

soldado y, por tanto, la ejecución de opositores políticos o enemigos del régimen, no puede ser amparado por una supuesta orden del servicio.

SEXAGÉSIMO: Que en cuanto a la circunstancia prevista en el artículo 103 del Código Penal la referida alegación no será aceptada respecto del delito de homicidio calificado de lesa humanidad, por cuanto la media prescripción, para que opere, está relacionada con el transcurso incompleto del tiempo necesario para extinguir la responsabilidad por prescripción de la acción penal y siempre requiere de un inicio del cómputo para los efectos de concluir que ha transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción; sin embargo, al haberse establecido que el delito investigado en autos es un delito de lesa humanidad, este tiene por expresa disposición normativa el carácter de imprescriptible, por ende, no hay plazo alguno que contabilizar.

Que, además, para que opere la aplicación de la prescripción gradual, el legislador exige que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción de la acción penal o de la pena y que el transcurso del tiempo exigido por la norma se verifique antes de que el responsable se presente o sea habido. De lo anterior se desprende que el artículo 103 del Código Punitivo opera respecto de procesados que se encontraban ausentes durante el desarrollo del proceso, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que el acusado Born Pineda estuvo siempre presente en el juicio, nunca ausente o rebelde.

Tanto la prescripción como la prescripción gradual benefician al responsable de un delito en consideración a los efectos que provoca el transcurso del tiempo en la necesidad de la pena, la estabilidad social y la seguridad jurídica, efectos que no se presentan respecto de los delitos declarados imprescriptibles.

En suma, para el rechazo de esta alegación se atiende por una parte, a la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, lo que obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.

Pero junto con ello, se subraya que cualquiera sea la interpretación que pueda hacerse del fundamento del precepto

legal en discusión, es lo cierto que las normas a las que se remite el artículo 103, otorgan una mera facultad al juez y no le imponen la obligación de disminuir la cuantía de la pena aunque concurren varias atenuantes (Sentencias Corte Suprema Rol N° 35.788-17, de 20 de marzo de 2018 y Rol N° 39.732-17, de 14 de mayo de 2018).

DETERMINACIÓN DE LA PENA:

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que en la especie al tratarse de tres víctimas de homicidio calificados, estamos ante delitos reiterados, en consecuencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 391 N°1 del Código Penal, vigente a la época de comisión de dichos ilícitos, es sancionado con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, por lo que atendida la reiteración, de conformidad al artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, la pena se aumentará en un grado desde el mínimo, quedando en definitiva en presidio mayor en su grado máximo, que va en el tramo de quince años y un día a veinte años. Beneficiando al encartado dos circunstancias atenuantes y no perjudicándolo ninguna agravante, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 inciso 4° del código punitivo, el tribunal está facultado para imponer la pena inferior en uno o dos grados, según el número y entidad de dichas circunstancias; en este caso se hará uso de esa facultad bajando en un grado la pena, imponiéndola en presidio mayor en su grado medio, en el quantum que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N° 6 y 9, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 26, 29, 50, 51, 67 inciso 4°, 69 y 391 N°1 circunstancia primera del Código Penal y 10, 50, 108 a 114, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 459, 463, 464, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 510 y 533 del Código de Procedimiento Penal, se declara:

I.- Que **se rechazan** las excepciones de previo y especial pronunciamiento y las mismas excepciones opuestas como defensas de fondo deducidas por el abogado defensor del acusado Adolfo Fernando Born Pineda a fojas 4376 y siguientes.

II.- Que se **ABSUELVE** al acusado CLAUDIO HERNÁN MESINA SCHULZ, ya individualizado, de la acusación formulada en su contra de ser cómplice del delito de Homicidio Calificado, en grado de consumado de don Francisco Valdivia Valdivia, don Luis Busch Morales y don Andrés Rojas Marambio.

III.- Que se **CONDENA** a **ADOLFO FERNANDO BORN PINEDA**, ya individualizado, a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA, de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de

inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado en carácter de reiterado de don Francisco Valdivia Valdivia, don Luis Busch Morales y don Andrés Rojas Marambio, cometido en la ciudad de Calama el día 6 de octubre de 1973.

La sanción impuesta se cumplirá de manera real y efectiva y se contará desde que el sentenciado Adolfo Fernando Born Pineda se presente o sea habido, debiendo servir de abono el tiempo que estuvo privado de libertad con ocasión de este proceso, esto es, desde el 22 de enero de 2019 al 11 de febrero de ese mismo año, según consta de fojas 3553 y 3634, respectivamente, en un total de 21 días.

Atendida la extensión de la pena impuesta no se le concederá ningún beneficio consagrado en la Ley N°18.216.

Consúltese los sobreseimientos definitivos de fojas 3052, 3986 y 4127.

Notifíquese personalmente a los sentenciados.

Notifíquese a los apoderados de las partes. Exhórtese al Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago respecto de los apoderados que registran domicilio en esas ciudades.

Ejecutoriada que sea la sentencia, cúmplase con lo dispuesto por el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese, si no se apelare.

Rol N°3-2010 Tomo A (Antofagasta)

PRONUNCIADA POR EL MINISTRO EN VISITA EXTRAORDINARIA DON VICENTE HORMAZÁBAL ABARZÚA Y AUTORIZADA POR DOÑA ROXANA CAMUS ARGALUZA, SECRETARIA TITULAR.

